



Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Sede académica de México

Doctorado en Investigación en Ciencias Sociales (Mención en Sociología)

VII Promoción (2008-2011)

Las comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia: tramas narrativas y ofertas de sentido temporal para comprender la violencia

Tesis que para obtener el grado de Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología, presenta:

Jefferson Jaramillo Marín

Directora

Dra. Nora Rabotnikof

Lectores

Dra. Eugenia Allier

Dr. Julio Aibar

Seminario

Conflicto, Memoria y Política

Línea de Investigación

Discursos, identidades y subjetividades en América Latina y el Caribe

México D.F, julio de 2011

Agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT)

Tabla de Contenido

Agradecimientos	5
Introducción	12
1. Contexto, debate y método	20
1.1 <i>Una hermenéutica de la condición histórica: nuestro marco de referencia</i>	21
1.1.1 ¿Por qué hablamos de una hermenéutica de la condición histórica?.....	21
1.1.2 Construcción de tramas narrativas y despliegue de ofertas de sentido temporal.....	24
1.2 <i>Duelo de relatos sobre la guerra y las violencias en Colombia</i>	27
1.2.1 Entre el mito de la continuidad y la tesis de la discontinuidad.....	27
1.2.2 ¿Es posible construir una gran trama narrativa en medio de la guerra?	35
1.3 <i>¿Por qué estudiar comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia?</i>	39
1.3.1 Dispositivos de ensamble temporal y narrativo	40
1.3.2 Dispositivos singulares y paradigmáticos	42
1.3.3 Comisiones y expertos: una industria política y académica del diagnóstico	50
1.4 <i>Sobre el esquema analítico utilizado en el análisis de las comisiones</i>	59
1.5 <i>Algunas cuestiones de método</i>	63
2. La Comisión Investigadora (1958)	68
2.1 <i>El Encuadre: Violencia, Frente Nacional, anticomunismo</i>	68
2.1.1 La <i>Violencia</i> , un parteaguas en el orden de las representaciones sociales y políticas .	69
2.1.2. Un pacto político entre caballeros para superar la <i>Violencia</i>	75
2.1.3 El Frente Nacional y el tránsito a la Doctrina de la Seguridad Nacional	83
2.2. <i>El clima operativo y pos operativo</i>	88
2.2.1 Su conformación y funcionamiento	88
2.2.2 El trabajo en terreno: llegar y escuchar	100
2.2.3 Negociar y renegociar pactos	120
2.2.4 La ingeniería social tras la comisión	123
2.2.5 Las expectativas políticas y las lecturas sociales de la prensa escrita	130
2.3 <i>Los marcos de temporalización</i>	134
2.3.1 No hay comienzo claramente establecido para la <i>Violencia</i>	135
2.3.2 Diagnóstico de un presente nacional en un orden históricamente turbado.....	144
2.3.3 ¿Un nuevo comienzo para la nación?: la lectura de futuro de la <i>Investigadora</i>	149
2.4. <i>El Libro La Violencia en Colombia</i>	152
2.4.1 La Comisión: ¿insumo remoto o conditio sine qua non? para el libro	152
2.4.2 El libro y la primera lectura emblemática sobre la <i>Violencia</i>	156
2.4.3 El libro y la institucionalización de una ciencia social incipiente en Colombia.....	160
2.4.4 Ruptura o continuidad del libro con el pacto frentenacionalista	164
2.4.5 Un canon interpretativo del desangre en tres lecturas	167
3. La Comisión de Expertos (1987)	171
3.1 <i>El encuadre: mutación de la violencia en un contexto de pos-Frente</i>	171
3.1.1 Consideraciones sobre el legado del Frente Nacional y los saldos en contra.....	172
3.1.2 Las violencias de los ochenta: ¿continuidades? o ¿discontinuidades radicales?	177
3.1.3 Belisario Betancur, Virgilio Barco: sus tratamientos de la guerra	185

3.1.4	La impostura democrática nacional y la década de los ochenta en el continente	196
3.2	<i>El clima operativo y pos operativo</i>	200
3.2.1	Antecedentes de la Comisión	200
3.2.2	Conformación	209
3.2.3	La artesanía investigativa de la Comisión	218
3.2.4	Los alcances políticos de la comisión en los gobiernos de Barco y Gaviria	223
3.2.5	Las lecturas de la prensa, de los comisionados y la reacción de la academia.....	230
3.3	<i>Los marcos de temporalización</i>	235
3.3.1	La polémica tesis de la “cultura de la violencia”	235
3.3.2	Un diagnóstico de presente en lógica de cultura de la paz	240
3.3.3	Un futuro posible a través de un nuevo pacto social de nación.....	242
3.4	<i>El informe Colombia, Violencia y Democracia</i>	243
3.4.1	De la descripción de las violencias y las recomendaciones para su superación	244
3.4.2	Del gran diagnóstico de las violencias contemporáneas a un informe polémico	253
3.4.3	Objetivación de un campo de estudios y de expertos sobre violencias en el país	259
3.4.4	Recomendaciones políticamente correctas y visiones timoratas	260
4.	La subcomisión de Memoria Histórica (2007).....	263
4.1.	<i>El encuadre: del conflicto histórico a la amenaza terrorista</i>	264
4.1.1	La política de <i>seguridad democrática</i> de Álvaro Uribe Vélez	264
4.1.2	La emergencia de la <i>Ley de Justicia y Paz</i> : acuerdos y cifras	273
4.1.3	Un modelo de justicia transicional a la colombiana.....	281
4.1.4	Justicia transicional, boom humanitario y ola memorial	288
4.1.5	Deber de memoria y razones de olvido. ¿Es posible el equilibrio reflexivo?.....	295
4.2.	<i>El clima operativo y pos operativo</i>	303
4.2.1	La CNRR: conformación, filosofía, fases de trabajo y limitaciones	304
4.2.2	Origen y conformación de <i>Memoria Histórica</i>	318
4.2.3	Ruta de trabajo de <i>Memoria Histórica</i>	328
4.2.4	Lecturas político-sociales y expectativas académicas frente a <i>MH</i>	355
4.2.5	Los impactos del trabajo de <i>MH</i>	360
4.3.	<i>Los marcos de temporalización</i>	364
4.3.1	La manufacturación del pasado reciente bajo un triple horizonte de sentido	365
4.3.2	Del diagnóstico de las masacres al diagnóstico de las resistencias en el presente.	371
4.3.3	El futuro: hacia una memoria ejemplar contra el olvido	374
4.4	<i>Los informes de Memoria Histórica</i>	375
4.4.1	Una breve descripción de los informes	376
4.4.2	Archivos de dolor y etnografías de terror.....	380
4.4.3	¿Informes con múltiples voces? ¿Todas las voces valen por igual?.....	386
4.4.4	Del diagnóstico de las violencias a una nueva taxonomía memorial.	388
4.4.5	Hacia la generación de una memoria pública.....	390
5.	Balance, preguntas y apuestas	392
5.1	<i>Balance de las experiencias</i>	392
5.2	Dispositivos rituales y espacios sociales de sentido: revelan y ocultan	402
5.3	<i>¿Expertos y comisiones funcionales al sistema?</i>	404
Fuentes		409

Tabla de Cuadros

Cuadro 1. Comisiones oficiales de investigación de 1971 a 1995.....	44
Cuadro 2. Comisiones de la verdad 1974-2007.....	45
Cuadro 3. Comisiones de investigación y extrajudiciales en Colombia (1991 – 2005)	46
Cuadro 4. Dimensiones y subdimensiones de análisis de las comisiones	62
Cuadro 5. Algunos de los micropactos firmados a raíz de la intervención de la <i>Comisión Investigadora</i>	123
Cuadro 6. Presupuesto por regiones destinado para labores de rehabilitación (1958-1959)	127
Cuadro 7. Presupuesto por Rubros (1958).....	127
Cuadro 8. Algunas masacres “tristemente celebres” en el país	332

Tabla de ilustraciones

Figura 1. Extracto del decreto gubernamental de creación de la Investigadora	91
Figura 2. El político, el cura y el militar: los notables del pacto y de la <i>Comisión Investigadora</i>	97
Figura 3. Concentración popular con motivo de la visita de los miembros de la Investigadora en Quinchía –Caldas.....	104
Figura 4. Noticia de Balance de las visitas al Quindío y el Valle del Cauca.....	107
Figura 5. Tema de urgencia para la Comisión Investigadora	110
Figura 6. Otto Morales Benítez (miembro de la comisión) con el “General Peligro” y el “General Santander” en La Herrera, Tolima.....	117
Figura 7. Noticia sobre el alegre recibimiento a la Comisión por un reconocido victimario	119
Figura 8. El cura, el abogado y el militar reunidos con los “alzados en armas” en algún lugar del Tolima, para firmar un micropacto	121
Figura 9. Noticia sobre la exhortación a la paz de los comandos guerrilleros en el marco de la visita de la Comisión Investigadora.	122
Figura 10. Noticia sobre el informe presentado al Ministro de gobierno por la Investigadora.....	125
Figura 11. Fragmento del editorial “La operación de Paz”.....	133
Figura 12. Noticia sobre el libro <i>La Violencia en Colombia</i>	153
Figura 13. Los “notables” de las ciencias sociales en los sesenta: el cura, el jurista y el sociólogo	154
Figura 14. Noticia sobre la reacción del alto clero colombiano frente al libro <i>La Violencia en Colombia</i>	167
Figura 15. Los expertos del 87: (¿violentólogos? ¿irenólogos? ¿intelectuales para la democracia?)	210
Figura 16. Colombia: tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, 1964-2008	227
Figura 17. Una columna a propósito del libro <i>Colombia, Violencia y Democracia</i>	231

Figura 18. A propósito del informe del periodista Niedergand sobre la situación en Colombia.....	232
Figura 19. Instalación de la CNRR. Representantes de la sociedad civil con el presidente Uribe Vélez.....	306
Figura 20. El sociólogo y el historiador en el nuevo diagnóstico de la guerra	321
Figura 21. Algunos miembros de <i>Memoria Histórica</i>	322
Figura 22. Noticia sobre la I Semana por la Memoria (2008)	351
Figura 23. Una muestra de acto de contricción estatal	353
Figura 24. ¿Para qué recordar en la Colombia contemporánea?.....	360

2. La Comisión Investigadora (1958)

La Comisión Investigadora, tuvo lugar en los albores del Frente Nacional, siendo una excelente síntesis del ideario de pacificación, rehabilitación y modernización social que embargó por aquel entonces el clima nacional. Este capítulo buscará precisamente mostrar cómo a través de esta comisión, se desplegaron la construcción de una narrativa institucional y unas ofertas de sentido temporal sobre la violencia bipartidista. En ese sentido, destacamos en qué consistieron, quiénes fueron sus principales protagonistas y dentro de qué encuadre político nacional e internacional se sucedieron. Se describe hasta qué punto ella contribuyó a situar en la escena pública de aquel presente, unos mecanismos y estrategias de procesamiento y tramitación institucional de las secuelas del desangre bipartidista. Por ejemplo, la toma de testimonios, la visita a las zonas afectadas, la generación de micropactos entre las distintas facciones políticas enfrentadas, el establecimiento de medidas de emergencia y rehabilitación y sobre todo la eclosión de una terapéutica del dolor, novedosa para la época. Finalmente, destacamos cómo esta comisión favoreció la concertación de unas políticas de futuro para el país, a partir de unas representaciones que hicieron determinados actores en relación con los alcances de esta comisión y la sedimentación de las estrategias de pacificación y rehabilitación del denominado Frente Nacional.

2.1 *El Encuadre: Violencia, Frente Nacional, anticomunismo*

Nuestro punto de partida es que el papel protagónico de la *Investigadora*, no puede entenderse ni valorarse por fuera de una visión contextual sobre la violencia política que vivió el país en el período que abarca entre 1946-1964 y desde luego, de un análisis de las soluciones políticas que se intentaron para superarla, a través del pacto político conocido como *Frente Nacional*, el cual tiene lugar para el país en un concierto mundial donde también se luchaba contra el fantasma del comunismo. Esta coyuntura crítica, tiene varias etapas complejas de asir, y de ellas intentaremos dar cuenta a continuación. Aclaremos de antemano que con lo mencionado aquí, no se trata de hacer historiografía de la violencia, sino de situar en un encuadre político significativo, algunos elementos de

reflexión que permitan comprender la naturaleza y los alcances de la *Investigadora*.

2.1.1 La *Violencia*, un parteaguas en el orden de las representaciones sociales y políticas

Las etapas cronológicas de la denominada *Violencia*, han sido descritas en la literatura convencional por varios autores, no obstante, una de las voces más autorizadas en la división analítica de este período es Marco Palacios (2002; 2003), quien identifica al menos cuatro fases. La primera fase de la *Violencia* comienza en 1945 con las campañas electorales del momento que enfrenta a Gaitanistas (partidarios del líder liberal – populista Jorge Eliécer Gaitán) y Ospinistas (partidarios del líder conservador Mariano Ospina Pérez). Esta primera fase finaliza en 1949 con la abstención liberal a las elecciones que ganarán los conservadores con el liderazgo de Ospina Pérez. En esta fase el punto de inflexión de la confrontación cruenta entre partidos, ocurre a raíz del asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948. La segunda, transcurre de 1949 a 1953, la cual se abre con la abstención liberal en las elecciones y se cierra con la llegada del gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, quien le da golpe de estado al presidente conservador Laureano Gómez. Aunque más adelante mencionaremos con más amplitud este escenario, baste decir que Rojas Pinilla fue considerado en ese momento una ficha política al servicio de las élites, que por entonces buscan pacificar y reconciliar el país por arriba. Estos dos momentos son catalogados por Palacios como los de mayor sectarismo y fuerza destructiva en el país, debido a los enfrentamientos entre las dos facciones políticas. Un tercer período cubre de 1954 hasta 1958 y se expresa claramente por el terror provocado por los denominados bandoleros y pájaros, grupos de sicarios pagos por los directorios políticos que azotan las regiones y localidades. Finalmente estaría un momento residual que va desde la caída de Rojas Pinilla a 1964. En este último momento se combinan, en el marco de la eclosión del *Frente Nacional*, estrategias de amnistía y reinserción a la vida civil de bandas e individuos alzados en armas, mecanismos de pacificación y gamonalismo armado. Será en esta última fase donde tenga lugar la *Comisión Investigadora*.

Del período, aunque se tienen amplias referencias en el sentido común colombiano, lo cierto, es que ha quedado en la memoria nacional, “*como un collage de opiniones ambiguas, poses fúnebres, sentimientos de culpa y ontologías pesimistas que apenas comienza a desvanecerse ante el rigor de nuevas investigaciones y análisis*” (Palacios, 2003: 193). Para mal o para bien, lo que sabemos de *La Violencia* es producto de gran cantidad de relatos, pero también de diversos esfuerzos intelectuales y artísticos, condensados a lo largo de los años. Tenemos noticia suya a través de la literatura testimonial producida en la época, sobre todo una que florece a partir del 9 de abril fecha en la cual se marca una ruptura importante en la vida colombiana del siglo XX. Esta literatura va desde panfletos autobiográficos hasta novelas históricas, pasando por libros periodísticos, crónicas y diarios, los cuales proliferan hasta la mitad de los años sesenta (Ortiz, 1994; Rodríguez, 2008; Sánchez, 2009c). A partir de los años sesenta y durante los setenta, el período será descrito en varios estudios sociológicos, antropológicos e históricos que convierten la *Violencia* en objeto de estudio, para estudiar sus relaciones con el Estado, con las estructuras agrarias y con los partidos políticos; pero también para relieves el protagonismo de los actores o describir los impactos económicos y sociales tanto regionales como locales. La mayoría de estos estudios serán monografías especializadas forjadas en un período de institucionalización o de expansión de las ciencias sociales en el país⁵⁰. A esto habría que añadir, que varias de las visiones de los estragos que causó y de las alternativas de solución y pacificación que ofreció el Frente Nacional frente a la *Violencia*, fueron resultado también de la primera lectura emblemática del desangre que llevó a cabo el libro *la Violencia en Colombia*. Texto que “*moldeará la visión de las clases medias lectoras de ese entonces*” (Palacios, 2003: 193). El período tampoco será extraño a la representación teatral, a la producción cinematográfica, a la creación visual y a la literatura⁵¹.

⁵⁰Específicamente sobre este período de la historia nacional y para las décadas de los sesenta y setenta, destacan los trabajos de Pineda (1962), Torres (1963); Hobsbawm (1968); Pécaut (1973); Gilhodes (1974), Oquist (1976); Fajardo (1979) y Arocha (1979). El estudio del período se extenderá y decantará analíticamente especialmente en la pluma de historiadores durante los ochenta y noventa, con los trabajos de Sánchez y Meertens (1983); Henderson (1984); Ortiz (1985); Pécaut (1987), Guerrero (1991), Betancourt y García (1991), Barbosa (1992); Atehortúa (1995), Acevedo (1995) y Perea (1996). En la década del 2000 destaca el trabajo de Roldán (2003). Para una síntesis de las discusiones que alimentan cada uno de estos trabajos se recomienda el trabajo de González, Bolívar y Vásquez (2003) y el de Peñaranda (2009).

⁵¹Por ejemplo la serie *Genocidio y Violencia* del pintor Alejandro Obregón, la película *El río de las tumbas*, de Julio Luzardo (1964), “La masacre del 9 de abril” de la pintora Débora Arango, Las novelas *La Mala hora* de Gabriel

Sin entrar en disquisiciones teóricas, sobre la exactitud de la periodización, la calidad de los análisis producidos, la jerarquía de los epicentros o las estadísticas del desangre, la *Violencia* puede resumirse como *una serie de procesos⁵² provinciales y locales con expresión nacional [...] que parten en dos el siglo XX colombiano*” (Palacios, 2002: 630)⁵³. Y es un parteaguas por varias razones. A través de ella se expresó una *“confrontación pugnaz de las élites por imponer desde el Estado nacional un modelo de modernización, conforme a pautas liberales y conservadoras, y del otro, un sectarismo localista que ahogó a todos los grupos, clases y grandes regiones del país”* (Palacios, 2002: 630). Ese deseo de imposición de modelos de nación y de partidismo agobiante, agenciado por las dos subculturas políticas más importantes hasta entonces, terminaron modificando radicalmente, como dirá Pécaut (2003b) el *“orden de las representaciones sociales y políticas del país”⁵⁴*. La manifestación de ello se produjo al menos de tres maneras histórico-sociales, entrelazadas e imbricadas entre sí. De una parte, en la imposibilidad de *“construir un orden unificado de nación”*. De otra, en la legitimación de *“una representación de la división social del país, entre dos grandes facciones igualmente sectarias, laureanistas y gaitanistas”*; y, finalmente, en la prevalencia, *“en toda relación social y política, de la lógica amigo – enemigo”* (2003b: 32). Ese orden de representaciones será recogido y condensado en el trabajo llevado a cabo por la *Investigadora*, siendo ampliado luego por el libro *La Violencia en Colombia*.

Desglosemos cada una de las manifestaciones de este nuevo orden representacional, dado que en ellas se condensan lecturas sobre lo ocurrido en ese período. Frente a lo primero, habría que decir que la constitución de un “orden social unificado”, no ha sido algo coyuntural sino histórico en el país. Es decir, es un problema vigente desde el siglo

García Márquez (1962) o *El Cristo de Espaldas* de Eduardo Caballero Calderón (1952) solo por mencionar algunas de estas expresiones. Para una ampliación de este tema se recomienda [Sánchez \(2009c\)](#).

⁵²Es crucial entender este período como un conjunto de procesos, y no sólo como un “acumulado de hechos de violencia”. Más aún, según [Sánchez \(1990\)](#) hay que entender la violencia como un “proceso de procesos”, con efectos diferenciales para muchos sectores de la población.

⁵³Para una ampliación de este período el trabajo más canónico es el de [Paul Oquist \(1976\)](#).

⁵⁴Esta visión subyace a toda la obra de Pécaut, preocupado por la comprensión de los imaginarios sobre el orden político colombiano. Se nota en este análisis la clara influencia que ha tenido en su pensamiento la obra de Claude Lefort y Cornelius Castoriadis. La noción de imaginario se entiende aquí como el amplio abanico de representaciones fundadoras del orden social que soportan la unidad y las diferencias de una sociedad. Cfr. [Castoriadis, \(1994\)](#)

XIX, pero acrecentado aún más a mediados del siglo XX. Mientras otras naciones latinoamericanas (v.g. México, Brasil, Argentina), ya sea por fuerza de los hechos o por el papel visible de élites reformistas, partidos institucionalizados, intelectuales radicales o militares progresistas, buscaron, lográndolo en parte, unificar a comienzos del siglo XX a la sociedad desde un Estado intervencionista representante de la nación y muchas veces contrapuesto al juego de intereses, en Colombia esta lógica no tuvo asidero con igual fuerza. Demandas de nación se plantearon desde los intelectuales y científicos nacionales a mediados y finales del siglo XIX⁵⁵, incluso, se hicieron reformas sociales (laborales y educativas) en los años treinta del siglo XX, por el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, especialmente, para lograr cerrar brechas de atraso. Aún así, nuestro intervencionismo casero *“permaneció dentro de marcos sociales muy estrechos...no lográndose una legislación social con un algún grado de significación [...] por ejemplo, institucionalizar relaciones sociales y que el Estado asumiera la representación de la nación por igual de los intereses nacionales”* (Pécaut, 2003b:34).

De hecho, la reforma agraria, uno de los nudos gordianos de nuestra guerra hasta el día, no logró consolidarse con este gobierno; la tierra nunca fue el tema para desactivar el desangre que se vendrá después⁵⁶. Los gremios económicos y las élites políticas, también le dieron la espalda a reformas más estructurales. A esta institucionalización social precaria, se suma también una institucionalidad democrática a medio camino, en la que las subculturas políticas (liberal y conservadora) con amplio margen de dominio, serán incapaces de representar en su conjunto a la nación, de lograr una sociedad simbólicamente unificada, de referirse a un “pueblo”. Nuestra democracia terminó siendo más apegada a valores formales que sustantivos, donde los partidos tendrán la última palabra. Como dice Pécaut, amparado en una visión muy cercana a la de Claude

⁵⁵A mediados del siglo XIX destacarán en ese sentido, intelectuales y científicos como Manuel Ancizar y Santiago Pérez y a finales del mismo siglo, Salvador Camacho Roldán, José Manuel Samper, Miguel Samper y José Manuel Groot (Cf. Melo, 2008).

⁵⁶La imposibilidad de lograrla ha hecho que a lo largo de su historia Colombia tenga unos índices de desigualdad enormes y que la tierra sea uno de los caballos de batalla entre víctimas, victimarios y Estado. Colombia es catalogado actualmente como un país no sólo con uno de los mayores índices de desplazamiento forzado en el mundo (el segundo lugar, después de Sudán) sino también como un país de despojo forzado de territorios. Algunos hablan de más de un millón de hectáreas despojadas a los campesinos (Universidad de los Andes), otros de 5.5 millones (Comisión de seguimiento al desplazamiento), otros de 10 millones (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) (CNRR, 2009b).

Lefort, los partidos políticos colombianos terminarán representando “*no un pueblo, sino dos pueblos con sus respectivas culturas políticas opuestas*” (Pécaut, 2003b:35) Esta división afectará con pesos relativos, a las figuras del poder local (gamonales y curas párrocos), a los representantes del comercio local (fonderos y arrieros) y a las personalidades más representativas del panorama nacional, entre ellos políticos profesionales, militares, intelectuales y élites.

Pero la representación de dos pueblos o de dos subculturas, termina reforzándose y materializándose en el período que va entre 1945 y 1949. Aquí entonces entramos a la segunda manifestación mencionada arriba. Las dos principales fuerzas del país por entonces, son el gaitanismo y el laureanismo; esta última con más fuerza que el ospinismo mencionado ya. Son dos fuerzas que hunden sus raíces en los partidos tradicionales pero representan también rupturas frente a ellos. En ambas confluye una “separación absoluta de dos mundos”, aunque también se comparten paradójicamente visiones del país. Jorge Eliécer Gaitán, quien está a la jefatura del partido liberal, pero representa un populismo liberal, habla en nombre de un pueblo desposeído de cualquier existencia política propia. Habla desde lo que considera es el principal problema social de ese “pueblo”, no tanto el económico (salarios y prestaciones sociales) como si el problema del hambre, conectado a la salud y a la desnutrición. Pero además posiciona un lugar de enunciación en el que la mediación del líder es un prerrequisito para la superación de la marginalidad. Por su parte, Laureano Gómez, quien dirige el partido conservador y se disputa permanentemente el poder con Ospina Pérez, es un “*político profesional de gran habilidad para dar virajes inesperados y pragmáticos*” (Palacios, 2003: 205), que le habla también al pueblo, pero en nombre de la restauración del orden y de la salvación nacional, con un discurso casi falangista.

Tanto en Gaitán como en Gómez existen coincidencias. Los dos son políticos de plaza, elocuentes, que desconfían de sus propios partidos y hablan siempre contra la oligarquía, aquella que se apropia del poder político. En ambos existen discursos personalistas que contribuyen a debilitar la fuerza social de las organizaciones sindicales porque se teme que estén manipuladas por el comunismo o por el liberalismo oficialista. Ambos le

hablan a un pueblo que como dice Pécaut, “no tiene una existencia política, ni una presencia estable, se mantiene por fuera de la civilización y la cultura, además no tiene una conciencia política” (2003b: 38-39). Lo interesante es que siendo líderes radicales, aprovechan esa incapacidad histórica de dar forma a lo social unificado para “mostrar que el único camino de identificación colectiva que subsiste son los partidos”. El asunto es que lo hacen catalizando esa incapacidad a través del terreno del enfrentamiento salvaje. El partido no es sólo una arena de debate, sino una escena de transgresión. Por el partido se debe vivir pero también estar dispuesto a dar la vida. De hecho, tras la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948, la fractura social y política se agudiza y los partidos políticos asumen el imaginario de la “construcción de un sistema de protección contra la irrupción de las masas peligrosas” (Pécaut, 2003b: 39).

La *Violencia* entonces como ha dicho Pécaut, ante la inexistencia de un orden unificador se torna en constitutiva de lo social y de lo político, descifrándose bajo el signo de la dialéctica amigo-enemigo. Siguiendo en esto a Schmitt⁵⁷, es posible entonces explicar el “exceso” en la manifestación del desangre en ese período, dado que el enfrentamiento ya no es sólo entre partidos políticos con diferencias resolubles, sino entre adversarios sin tregua, donde el otro no es un enemigo privado, sino que es un enemigo público, un extranjero, un extraño radical. Los conflictos con él son llevados al límite de lo posible, ya no importa resolverlos ni por la norma, ni por la sentencia de un tercero imparcial. Estamos de frente entonces, a un escenario de transgresión total, a una lucha a muerte entre dos comunidades políticas, que mutuamente se estigmatizan y entran en litigio, al punto del aniquilación. En ese marco, los epítetos de un lado y otro son motores de la transgresión. Los conservadores, nombran al liberalismo como el gran monstruo, el “basilisco”, tal y como aparece en las pastorales de Monseñor Builes. Se les trata de chusmeros y bandoleros. Por su parte, los liberales nombran a los conservadores, especialmente a la policía, como chulavitas⁵⁸ y a los asesinos a sueldo como pájaros (los

⁵⁷Pécaut reconoce que utilizar a Schmitt es un punto de partida abstracto, pero útil para abrir camino en la comprensión de los imaginarios de la *Violencia* en el país.

⁵⁸En los comienzos del gobierno de Ospina Pérez (1946-1950) y durante los acontecimientos del 9 de abril, la policía fue reclutada, al parecer, de la vereda Chulavita, en el municipio boyacense de Boavitá, uno de los “enclaves electorales del conservatismo” (Palacios, 2003: 638). De ahí se hizo común llamar a los policías “chulavitas”.

antecesores del sicario de los ochenta). Entre unos y otros se representan como “indios”. Se escinde el mundo entre los que se consideran “civilizados” y los que son denominados “bárbaros”; entre los limpios y los impuros. Ambos sistemas de representación son radicalmente excluyentes.

Pero ese otro radical, también es el semejante de base. Para deshacerse de él, evitando una carga moral o ética, se le deshumaniza y bestializa. Ello pasa también por convertirlo en objeto de desprecio, por infringirle marcas indelebles en su cuerpo, por ritualizar su muerte de determinadas formas. Es precisamente lo que hacen los campesinos de una vereda que saben que están matando y rematando a congéneres de la misma u otra vereda, pero a los que asumen como sus contrarios políticos radicales. El mundo social que habitan es de unos y no puede ser de los “otros”. De esa forma de deshumanización, de una violencia llevada al límite y al exceso, dará cuenta el primer tomo del libro *La Violencia en Colombia*, en el Capítulo IX, que lleva por nombre “Tanatomanía en Colombia”⁵⁹ y que básicamente lo que hace es describir “la dimensión sacra de la violencia”⁶⁰. Una dimensión que revela también la tensión entre lo sagrado y lo sacrílego, donde cierto “sadismo” se naturaliza y se ritualiza, extendiéndose hasta nuestros días, bajo la forma de una “política punitiva sobre el cuerpo”. Al menos así parece estar presente en la lógica de las masacres perpetradas por paramilitares y sobre las cuales han versado algunos de los recientes informes emblemáticos producidos por del *Grupo de Memoria Histórica*⁶¹.

2.1.2. Un pacto político entre caballeros para superar la *Violencia*.

Hacia 1958 las élites políticas liberales y conservadoras van a ensayar una estrategia de reparto del poder durante 14 años, que se conoció como el *Frente Nacional*, erigida en

⁵⁹Por ejemplo, las consignas de “picar para tamal”, “bocachiquiar”, “no dejar ni la semilla”, con sus consecuentes “cortes” en el cuerpo del adversario, el “corte de franela”, el “corte francés”, el “corte de corbata”, el “corte de mica”; el “corte de oreja” (Guzmán, Fals, Umaña, 1962/2005: 245-253).

⁶⁰Entrevista con Daniel Pécaut, 23 de julio de 2010. Ampliar este tema en Pécaut (2003c).

⁶¹El tema de la lógica punitiva sobre los cuerpos y la economía del castigo sobre el adversario, a partir de una relectura de Foucault, es desarrollado para el caso colombiano por Blair (2010). Alrededor de las lógicas, intencionalidades y ritualidades de las “masacres” hay un trabajo de largo aliento en el país. Cfr. (Uribe, 1990, 2004; Blair, 2004; Suárez, 2008).

su momento como una macropolítica de concertación que tiene, entre otras pretensiones, solucionar el problema de la *Violencia*. La estrategia no era nueva para el país y tampoco será la única en el mundo.⁶² Había sido ensayada por el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909), a través de lo que se denominó la política de *Concordia Nacional*; y sería también probada por el presidente Mariano Ospina Pérez, con su ideario de *Unión Nacional* (1946-1949) propuesto a los liberales, pero rechazado por falta de garantías. Sobre el *Frente Nacional*, su naturaleza, alcances e impactos, se ha escrito mucho en el país y aunque no es nuestro interés aquí hacer un balance historiográfico del proceso, es importante mencionar solo algunos de los acentos sobre los cuales se ha trabajado, lo que permitirá luego entender las dimensiones e importancia de este macropacto político. Al respecto, se han hecho análisis sobre la forma como las élites logran pactar este tipo de estrategias “consociacionales”, así como sus impactos benéficos en el sistema democrático colombiano, por ejemplo, los trabajos de Hartlyn (1993) y de Dávila (2002). También se ha examinado en el estudio de Gutiérrez (2007), la estrategia política desde los pactos de silencio que articuló, por encima del desangre nacional y sus consecuencias sobre la legitimidad de los partidos tradicionales. Alrededor del accionar de la clase política tradicional y el juego electoral en este período también se han posado las miradas (Duque, 2005). Se ha estudiado acerca de la relación entre olvidos funcionales y memorias prohibidas en la investigación de Rodríguez (2008). También se ha analizado cómo este acuerdo tuvo grandes dificultades para incorporar las necesidades sociales de los colombianos al proceso de modernización (Leal, 1995) y cómo frenó o bloqueo la consolidación de otras fuerzas políticas (López de la Roche, 1994). De otra parte, hay quienes han considerado que la modernización política, económica y cultural y gran parte de la secularización de la sociedad colombiana, irrumpen directamente en el período de aplicación del *Frente Nacional* (Melo, 1992).

Ahora bien, el *Frente Nacional* se constituyó básicamente en una política de concertación que ofreció una “promesa de retorno a la paz” (Pécaut, 2002f: 48), aunque

⁶²Hacia octubre de 1959 se firmaría el “Pacto de Punto Fijo” que facilitó la transición hacia la democracia en Venezuela, luego de caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Este pacto fue firmado por los partidos Acción Democrática (AD), COPEI y la Unión Republicana Democrática (URD) y abriría un resquicio importante para la democracia en este país.

en la práctica implicó una “restauración de un poder político perdido” para las élites tradicionales que desencadenaría algunas consecuencias durante y después de su instauración, sobre todo en el plano de la representación del pasado, presente y futuro de la *Violencia*. La restauración del orden político y social era parte, como se verá más adelante, de una especie de nuevo comienzo, como tantos que se han intentado en la historia de Colombia. Nuevo comienzo después de una fase aciaga. Era una especie de iniciativa que permitía pactar el futuro del país por decreto político, que de entrada tenía el propósito de restablecer el poder perdido para las clases tradicionales, uno del que habían quedado huérfanas tras la llegada de la figura del general Gustavo Rojas Pinilla. En la historia de democracia formal y oligárquica de un país como Colombia, la figura de Rojas Pinilla, representaba el segundo intento de dictadura en medio de tradición democrática formalista de larga data⁶³. Este personaje, llega al poder en 1953, en un contexto nacional donde la exclusión de intereses sobre todo de las élites liberales, la insensibilidad ante la situación de altos mandos de las Fuerzas armadas y el recrudecimiento de la violencia en las zonas de los Llanos y el Tolima, están saturando la escena política.

Siendo Rojas Pinilla, comandante de las Fuerzas Armadas del gobierno del conservador Laureano Gómez, le declara un golpe de Estado a éste, ante la anuencia de los liberales que se sentían excluidos, de la Iglesia que ya no veía con buenos ojos los excesos del conservatismo laureanista y de los gremios que percibían en jaque sus intereses económicos. Encuentra, no obstante, una tenue oposición del Partido Comunista (el cual sería proscrito durante el mandato de Rojas) y algunos laureanistas fieles (Palacios, 2003: 210). En esencia su golpe de estado fue un cuartelazo pacífico, pactado por los demócratas y en medio de las formalidades institucionales. Un cuartelazo que viene a ofrecer por arriba soluciones políticas de pacificación y negociación en un país que demanda soluciones en las bases sociales. Un cuartelazo que tiene además la misión de conjurar muy posiblemente el peligro de que la resistencia campesina escape al control

⁶³El primero había sido a comienzos del siglo XX en la figura del líder militar Rafael Reyes, quien gobernó en el país entre 1904 y 1909. Aunque en estricto sentido, los dos únicos gobiernos militares del siglo XX en Colombia, serían los del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y la Junta Militar (1957-1958) (Leal, 2002:36).

de las élites tradicionales, lo que hace que cuente con el apoyo de las élites (Pécaut, 1987; Sánchez y Meertens, 1983). Ahora bien, sus primeras medidas son ofertar indulto y amnistía a los guerrilleros liberales de los Llanos Orientales y a los que operan en algunas zonas de los departamentos de Antioquia y Tolima⁶⁴. Esta medida cobija también a los presos políticos. Luego ofrece restaurar la libertad de prensa, que había sido objeto de ostracismo durante los gobiernos de Ospina Pérez y Laureano Gómez. El clima por entonces, es básicamente de restauración del orden y de reconciliación bipartidista.

En apariencia, con esto parece “cerrarse el capítulo de la violencia sectaria” (Palacios, 2002: 640). Y los primeros logros fueron indudables en esa dirección. En su primer año de gobierno, tras varias giras políticas por el país y el logro de varios consensos políticos con los alzados en armas, se disminuye la cifra de muertos por la violencia, que pasó de 22.000 en 1952-53 a 1.900 en 1954-55 (Palacios, 2003: 211); además se ataca la corrupción del poder judicial. A la pacificación de la región del Llano, se sumó la bonanza cafetera, la estabilidad monetaria, el flujo de capitales, la llegada de la televisión y el voto femenino. Sin embargo, medidas como mantener el estado de sitio, clausurar los diarios *El Tiempo* y *el Espectador*⁶⁵, su cruzada anticomunista y el asesinato de ocho personas y más de un centenar de heridos, a manos de detectives y policías vestidos de civil en la plaza de Toros de Bogotá que arremeten contra la población por abuchear a la hija del General, son instrumentados por las clases políticas, como episodios detonantes para su caída. A esto se suma el lanzamiento del partido *La Tercera Fuerza* con la que Rojas Pinilla pretendía seguir gobernando; también la coalición con ciertos sectores del conservatismo, y el aumento de la violencia para el año de 1956, especialmente la ejercida por bandoleros y pájaros en el Norte del departamento del Valle y en el Departamento de Caldas. Todo esto haría que este régimen, que había comenzado como de pacificación, hiciera prever en varios sectores

⁶⁴ Sobre el tema de los indultos y amnistías en el caso colombiano no profundizamos en esta tesis, pese a su importancia para entender las políticas de justicia, memoria y olvido en contextos de conflicto. En este tema se recomienda el trabajo del historiador Mario Aguilera.

⁶⁵ Fueron cerrados en 1955, reaparecieron como el *Intermedio* y *El independiente*. En 1953, habían sido cerrados los periódicos conservadores *El siglo* y *El Diario Gráfico* (Cfr. Melo, 2002; Rodríguez, 2008).

de la opinión pública una vuelta a los peores años de la *Violencia*. El partido liberal con cuya anuencia había logrado gobernar Rojas Pinilla, comienza entonces a tejer y a legitimar a través de los medios de comunicación a partir 1956, la hipótesis de que Rojas busca perpetuarse en el poder y con ello violentar el pacto democrático de larga data que existía en el país.

La solución que encuentran los partidos, frente al *Frankenstein* que ellos mismos ayudaron a fabricar políticamente y pese a las diferencias en apariencia irreconciliables entre ellos, será nuevamente pactar. La idea de restaurar la institucionalidad bipartidista, bajo el ropaje democrático está al orden del día. El acuerdo de élites, del cual estuvieron excluidas otras fuerzas políticas, tendrá al menos dos orígenes institucionales, uno previo a la caída de Rojas Pinilla y el otro posterior. El primero fue la *declaración de Benidorm* (España) firmada el 24 de julio de 1956 por el principal jefe conservador de entonces, Laureano Gómez y el jefe liberal, Alberto Lleras Camargo, que luego sería el primer presidente del Frente. En ese pacto se extendió una recomendación a las dos colectividades para trabajar juntas en función de la recuperación de las “formas institucionales de la vida política” (Cámara de Representantes, 1956: 13). Un año después, el 20 de julio de 1957, se firma el otro pacto, en Sitges (España). Previo a este pacto, en el mes de mayo, había renunciado Rojas Pinilla, antecedido por cierres de fábricas, protestas estudiantiles y un gran paro del transporte urbano en Bogotá, Cali y Medellín. El mandato será cedido a una Junta Militar de cinco generales de su gabinete⁶⁶. Con el nuevo pacto firmado en julio, Lleras Camargo y Laureano Gómez, generan nuevas recomendaciones para el “regreso a las instituciones republicanas” (Cámara de Representantes, 1956: 32). La idea de ambos es el retorno del poder de las manos de la Junta Militar, a las huestes de los civiles. La Junta se siente impelida entonces a convocar un Plebiscito para el 1 de diciembre de ese año, donde van a legalizar su mandato hasta el 7 de agosto de 1958, cuando retornarían el poder a los civiles. Las elecciones se celebran de nuevo en mayo del 58 resultando electo el primer

⁶⁶Los generales que hicieron parte de esta junta fueron: Mayor General París, ministro de defensa; Mayor General Fonseca, director de la Policía; Contraalmirante Piedrahita, comandante del Ejército; Brigadier general Navas, ministro de obras públicas y el Brigadier General Ordoñez, director del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC).

presidente del Frente, el liberal Lleras Camargo.

En retrospectiva, esta estrategia de pacificación y rehabilitación fabricada por el bipartidismo implicó varias cosas. Leído desde hoy, estaría uno tentado a afirmar que las élites pactaron silencios, especialmente porque en los discursos de la época siempre se privilegiaron las herramientas de la prudencia y la conciliación para “dejar atrás el pasado y abandonar la venganza” con la idea de que *“el altísimo precio que tenía que pagar Colombia por su paz era el olvido”*⁶⁷. Y ello es explicable, en tanto son las élites conservadoras y liberales las que deciden concertar unas reglas de juego y las que abogan por la manufacturación de una narrativa donde debe imperar más “el salto hacia delante, que una vuelta hacia atrás”, hacia la adjudicación de responsabilidades históricas y penales. Desde esta óptica, la refundación de la política conlleva el cierre de lo pasado. Es como si el Frente Nacional se hubiera dado a la tarea de sostener que en tanto pacto de caballeros no habría porque abrir heridas y juicios innecesarios. El juez de lo ocurrido sería la historia. A las élites les correspondía reorganizar el país para afrontar el futuro. Como se dijo en su momento, a través de los principales diarios del país que fueron también vehículos de la política del silencio frentenacionalista, la principal apuesta fue dejar *“el juicio sobre lo ocurrido a una generación menos angustiada y comprometida”* (Rodríguez, 2008: 45). Esto queda expuesto de manera tajante por el ex presidente Mariano Ospina Pérez a raíz de la publicación del libro *La Violencia en Colombia* en el año 62, al afirmar que es *“mucho más honrado, varonil y constructivo, aceptar que todos nos hemos equivocado”*⁶⁸.

De todas formas, el Frente Nacional se había instaurado para detener la violencia y en eso sería bastante útil. Es cierto que generó control del pasado por las élites, donde se diseminaron culpas y donde gran parte de los acuerdos se tejieron y construyeron desde la capital, el centro del poder administrativo, llevándose luego hacia todas las regiones (Rodríguez, 2008: 45). Pero también es cierto que el Frente era un pacto político, y cómo todo arreglo institucional tenía la posibilidad de revelar y ocultar. Y esto lo

⁶⁷ Revista Semana del 9 al 15 de diciembre de 1958.

⁶⁸ La República, 6 de agosto de 1962.

cumplió a cabalidad. Por arriba concertó al máximo qué debía decirse y qué se callaría, a quién se responsabilizaría y a quién no; a quién se castigaría y a quien se le otorgaría amnistía. Por abajo, el máximo logro del Frente Nacional sería quizá el de la creación de la *Investigadora*. El mundo nacional que ayudó a construir el pacto político, estaba escindido entre dos grandes destinos: de un lado el de la “civilización” el universo de las élites cultas, de los políticos que estaban pactando y que pretendían saber cuál era el mejor futuro para el país; de otro lado, el de la barbaridad que según ellos, producía la *Violencia* y los violentos, especialmente aquellos campesinos seducidos por la sangre y la infamia. Recordar sería retornar de nuevo a la barbarie, inmovilizar además la política de concertación. Olvidar sería avanzar, estar del lado del progreso. Visto desde hoy el asunto, uno estaría tentado a invalidar totalmente esta postura como contraria a la necesidad de establecimiento de responsabilidades. Sin embargo, no se le podía pedir más a los políticos y a la historia de ese momento. Además el discurso de las políticas contra el olvido y los relatos humanitarios y las narrativas de transición no estaban de moda aún. Una de las claras muestras de cómo se pactó por entonces el olvido de los años aciagos de la *Violencia*, sin prever realmente el costo de esa decisión, tiene su correlato en los manuales escolares de la época, donde éste período desaparece, convirtiéndose en una época “entre paréntesis” (Sánchez, 2003; Rodríguez, 2008).

La institucionalidad democrática se restaura nuevamente sobre la base de éste pacto que funcionará durante dieciséis años. Aunque habrá algunos resquicios para el ejercicio democrático, por ejemplo, elecciones continuas, lo cierto es que grandes capas de la sociedad serían excluidas de un pronunciamiento sobre lo pasó. A propósito, Sánchez (1988), ha señalado que a la población en general le será arrebatada la posibilidad de construir su propia versión de lo sucedido, al punto de haberse “*matado la memoria de este período*”⁶⁹. Nosotros somos del parecer que aunque es cierta que esta posibilidad les

⁶⁹Según Sánchez, al menos eso se deduce de una “Orden Administrativa del Ministerio de Gobierno, que el 4 de enero de 1967 declara como “archivo muerto” un conjunto de “79 sacos que contienen el archivo de los años de 1949 a 1958”. Seguramente se había sostenido a través del Ministerio que el problema era el “ambiente de olor insoportable” y el estado “horrible” de la oficina que albergaba dichos documentos, sin embargo, estaba de fondo la preocupación de ciertos sectores por destapar la “*pestilencia de una época que debía ser a todas costas suprimida*”. En ese orden de ideas, si en el período previo al Frente Nacional florecen las memorias del desangre, en el período frenenacionalista esas memorias serán las grandes ausentes.

fue amputada, un pacto concebido y legitimado por las élites no podía ofrecer más. El pacto desde el momento que nació fue extremadamente limitado, era un acuerdo político para devolver poder y retornar estabilidad por arriba, no una plataforma para generar revoluciones sociales y menos memoriales, aunque por algunos momentos, vendiera en el papel la idea de la gran revolución social, la restauración y la modernización. De hecho a lo largo del Frente, los cuatro presidentes que tuvo dejaron consignados en sus programas de gobierno estos “iderarios”. Así Alberto Lleras Camargo (1958-1962) llamó a su período *"el gobierno de la restauración"*, Guillermo León Valencia (1962-1966) lo nombró el “gobierno de la pacificación, Carlos Lleras Resptrepo (1966-1970) sería *"el gobierno de la modernización económica"* y Misael Pastrana Borrero (1970-1974) se denominaría *"el gobierno de las cuatro estrategias"* (Palacios, 1999; Acevedo y Castaño, 2001).

Aún así, lo cierto es que las reformas sociales fueron tímidas frente a todo lo que su hubiera podido lograr. Para Palacios (1999), el progresismo del Frente Nacional quedaría eclipsado por el ritual electoral y la clientelización. Para Pécaut, durante estos años, *"no se hizo mayor cosa para satisfacer las demandas de justicia o, incluso las de reparación social"* (2002c: 48). De otra parte, es un período en el que asistimos a una combinación de estrategias de amnistía y reinserción a la vida civil de bandas de civiles armados, pero también a un perdón instrumentalizado en función del gran pacto político nacional. Esto será evidente con la *Comisión de Rehabilitación* creada en septiembre de 1958, como se verá un poco más adelante. Por su parte, las víctimas de la *Violencia*, de las cuales no se habla mucho por entonces, en medio de un gran acuerdo, quedan sometidas y confinadas a un sentimiento de vergüenza colectiva (Sánchez, 2003; Rodríguez, 2008). Por su parte, Rodríguez (2008) ha señalado cómo la prensa escrita durante el Frente Nacional, se encarga de despolitizar a los victimarios y a las víctimas. Constantemente, se llama a no idealizarlos. Incluso, desde uno de los ministros de la época (Charry Lara), se insiste en que no importan tanto las causas ni los responsables y agregaríamos aquí “las víctimas”, lo que importan son las medidas hacia delante para acabar con el cáncer de la violencia.

Pero el Frente Nacional estará lejos de borrar todas las secuelas de la *Violencia*. Durante su funcionamiento, si bien se frena el desangre entre los partidos, se avanza también hacia una mutación de las lógicas del ejercicio de la violencia. Así, entre 1957 y 1962, muere un estimado de 17.323 personas (Oquist, 1979, citado por Rodríguez, 2008: 44). Ya no estamos sólo frente a una tecnología de exterminio provocada por la animadversión bipartidista de finales de los años cuarenta o comienzos de los cincuenta, sino ante una “empresa” que opera mediante redes partidistas y gamonalistas, con un claro objetivo de incidir depredatoriamente sobre el café y las tierras, especialmente en el período de cosechas. Esta nueva etapa de la *Violencia*, se localizaría básicamente en las vertientes de las Cordillera Occidental del territorio nacional, especialmente al norte de los departamentos del Valle del Cauca y el Viejo Caldas. Se acompañará a su vez de una confrontación armada de tono agrarista y comunista sobre todo en el sur del departamento del Tolima y en el macizo de la región del Sumapaz. Será en estas zonas, donde germine la lucha guerrillera y donde se produzca el nacimiento de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) la guerrilla más antigua de Colombia (Sánchez, 1990; Pizarro, 1989).

2.1.3 El Frente Nacional y el tránsito a la Doctrina de la Seguridad Nacional

Si bien el Frente Nacional no sirvió para profundizar la democracia real en el país, si fue efectivo a los partidos “con miras a afianzar la burocratización y el clientelismo”, alejando el fantasma del sectarismo de épocas anteriores, “como fuente principal de la reproducción partidista” (Leal, 2002: 35). En su momento también sería claramente efectivo para “subordinar”, al menos en el papel, a los militares colombianos a las instituciones democráticas. Aunque paradójicamente con ello se les otorgaría más “autonomía” en ciertos temas, como el manejo del orden público nacional. De hecho, el presidente Lleras Camargo, en un discurso bastante famoso y citado⁷⁰ afirmaría que en tanto la política era “el arte de la controversia” y la milicia “el arte de la obediencia”, los

⁷⁰Discurso pronunciado frente de la oficialidad de la guarnición de Bogotá en el *Teatro Patria* en mayo de 1958. Cfr. Lleras (s.f). Revisar a propósito (Leal, 2002).

militares colombianos deberían estar subordinados al orden constitucional. De esa manera, ni las Fuerzas Armadas decidirían como gobernar a la nación, ni los políticos decidirían como manejar a las Fuerzas Armadas. Y eso lo enfatizaba específicamente sobre la base del antecedente del golpe militar de Rojas Pinilla y también del fallido golpe el 2 de mayo de 1958 que quizó restaurar el poder militar en el país. Lo significativo aquí, es que a partir de ese presupuesto, Lleras Camargo no sólo estaba llamando al orden a los militares, sino que estaba anunciando lo que sería una política diseminada a lo largo del Frente Nacional: a los políticos les quedaría la misión de gobernar, administrar y civilizar la nación en adelante; a los militares les correspondería disciplinar, controlar y normalizar el territorio nacional.

Es decir, Lleras Camargo, si bien llamaba a la subordinación de los militares, lo que provocó ello fue una mayor “autonomización” de las instituciones castrenses, particularmente en el manejo del orden público y la adquisición de prerrogativas institucionales. Este manejo se volvió supremamente estratégico en el país, a medida que avanzó la confrontación armada entre las guerrillas y las Fuerzas Militares, y se ampliaron y diversificaron las violencias y aparecieron los “disidentes políticos” (Leal, 2002: 39). Esto derivó en una consecuencia no menor para el país, dado que mientras los políticos estaban dedicados a la burocracia y a la civilización de la nación, fueron descuidando como una labor de Estado revisar y actualizar las escasas directrices políticas del papel militar en la sociedad. En ese escenario, los altos mandos castrenses asumieron entonces el diseño de la política militar, en *“forma improvisada, de acuerdo con sus percepciones de las situaciones de orden público, orientadas por los planteamientos anticomunistas, la concepción político-militar norteamericana y la Doctrina de Seguridad Nacional”* (Leal, 2002: 39). A partir de esa política, toda protesta social se convirtió en “asunto orden público”, las guerrillas se convirtieron al comienzo en enemigos potenciales del sistema y con el tiempo en los principales enemigos reales, y a los bandoleros que quedaban de la otrora *Violencia*, se les exterminaría o confinaría a medidas de extrañamiento social. Como ha señalado Leal, todo ello en su momento, estuvo influenciado por varios factores entre los cuales estaban “las ideologías político-militares provenientes del exterior y las vivencias profesionales

de muchos militares tales como la participación, en la guerra de Corea del Batallón Colombia, en la violencia bipartidista y en los problemas sociales del país” (Leal, 2002:40).

En ese marco, es bien interesante hacer notar que las “estrategias de reconciliación nacional” del Frente Nacional defendidas por Lleras Camargo, se fueron conjugando cada vez mas con “dosis de represión”, sobre todo a partir del gobierno de Guillermo León Valencia, el “gobierno de la pacificación”, y el “gobierno de los pobres, como el mismo se denominó, pero donde se va acentuar uno de los mayores crecimientos del ejército nacional (Gilhodes, 2009: 307). En ese orden de ideas, el Frente Nacional, por un lado, arguyó en el discurso una política de concertación, pero a la par también posicionó en la práctica una gran cantidad de decretos de urgencia y control militar del territorio nacional. Estas medidas legalizadas por el gobierno, iban desde el “extrañamiento de antisociales” y “congelación de prescripciones de tierras adquiridas en tiempos y zonas de violencia”, hasta los bombardeos en zonas de guerrillas. Algunas de ellas, como la prohibición a ciertas personas de residir en algunos lugares, portar armas, ofrecer o prometer dinero⁷¹, pretendían “devolver” profilácticamente a la vida civil, a todos aquellos elementos por fuera de la ley que se rindieran y aceptaran el Estado. Varias de estas medidas fueron de urgencia y desaparecieron con el tiempo.

Aún así, el asunto más problemático fue que si bien varias de estas medidas estaban aún cubiertas en clave de salvaguarda de la soberanía nacional, muchas de ellas fueron con el tiempo, derivando hacia medidas normalizadoras de la excepcionalidad para combatir problemas sociales. Siguiendo en esto a Leal (2002), diríamos entonces que dentro de la coyuntura crítica del Frente Nacional, esto se puede traducir en un desplazamiento de la *Doctrina de la Defensa nacional* hacia la *Doctrina de la Seguridad Nacional*. Esta última suponía que los países de América Latina, estaban bajo una permanente amenaza de fuerzas nacionales e internacionales vinculadas al comunismo. No olvidemos aquí, que la *Doctrina de la Seguridad Nacional* había sido alimentada legal y

⁷¹ Periódico El Espectador, octubre 8 de 1958.

económicamente en Estados Unidos desde la época de Truman⁷², que decidió proponer una unificación militar continental para luchar contra el comunismo. Durante los años cincuenta y sesenta, sería fuertemente practicada y sedimentada en países como Brasil y Argentina, siendo luego reformulada en los setenta en Chile, Perú, Paraguay y los países centroamericanos⁷³. Ella partía de la premisa de que los estados, en casos que así lo ameritara la geopolítica del mundo y el contexto interno, deberían acudir al control militar del poder. La principal fuente que ameritaba la aplicación de esta política era en el marco de la Guerra Fría, el comunismo internacional. Este enemigo tenía como epicentro la Unión Soviética, cobrando luego vida en Cuba. En los países de América Latina, el gran enemigo interno estaría representado en las guerrillas, y en cualquier persona, grupo o institución nacional que tuviera ideas opuestas a las de los gobiernos militares (Leal, 2003).

En algunos países, tal es el caso de Colombia, esta doctrina tuvo una clara impronta de lo que se ha denominado el “militarismo desarrollista”, que entraba en tensión con el viejo esquema militarista, más de corte prusiano, donde lo más importante era la disciplina y la lealtad al orden constitucional (Leal, 2002)⁷⁴. Bajo el desarrollismo militar iba a hacer carrera fuertemente la ideología del anticomunismo entre los militares colombianos. En Colombia uno de los grandes defensores del desarrollismo fue el general Ruiz Novoa, quien había participado en la Guerra de Corea siendo Comandante del Batallón Colombia y además había recibido formación militar en Chile. A esta corriente también se le conoció con el nombre de los “Coreanos” (Gilhodes, 2009: 307).

⁷²A esto contribuyeron varios elementos, si seguimos a Leal: “la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948 que proporcionó el piso jurídico-político para que otros organismos, como la Junta Interamericana de Defensa –creada en 1942– y el Colegio Interamericano de Defensa pudieran articularse en forma plena a la orientación estadounidense... en 1950, el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense aprobó el Memorando 68, que formuló la estrategia militar internacional de los Estados Unidos. Dada su vinculación institucional con el país del Norte, América Latina quedaba cobijada por lo aprobado en ese documento. Los programas de ayuda militar bilaterales (MAP), ejecutados entre 1952 y 1958, serían el punto de partida para que los ejércitos latinoamericanos se afincaran en la órbita tecnológica y operativa de Estados Unidos” (2003: 78).

⁷³Brasil fue el primer país del continente en elaborar un concepto sobre seguridad nacional en América Latina con una ley de 1935, y luego, en los años cincuenta, con el general Golbery do Couto e Silva. Esta doctrina le permitió preparar y justificar el golpe militar de 1964 contra el gobierno populista de João Goulart. Luego, en Argentina sirvió para justificar el derrocamiento de un gobierno radical en 1966 y otro peronista en 1976, y para enfrentar a la guerrilla urbana de los Montoneros. En Chile, sirvió para justificar el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende (Cfr. Leal, 2003: 81).

⁷⁴El ala tradicional del ejército estará representada en los generales Revéiz Pizarro y Fajardo Pinzón y la desarrollista por Valencia Tovar y Fernando Landazabal, entre otros (Cfr. Gilhodes, 2009).

Este militar será uno de los principales gestores de la estrategia conocida con el nombre de *Plan Lazo*, “diseñada para la pacificación del país” y aplicada siendo ministro de Guerra al iniciar el mandato el presidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966). Bajo esta doctrina, se partía de la idea de “quitarle el agua al pez”, es decir, el apoyo campesino a la guerrilla (Gilhodes, 2009: 305). La consecuencia directa de esta estrategia, sería la legitimación de medidas de ingeniería social que acabarían con la pobreza, y ello con la finalidad de acabar con las guerrillas en las zonas donde esta tenía presencia, lo cual motivó las operaciones de Marquetalia, El Pato y Guayabero. Se creía que acabando el caldo de cultivo desaparecería el mal, visión que estaba muy conectada al famoso esquema de la época sobre las etapas del desarrollo de W. W. Rostow (Leal, 2002: 45). Aunque eso significó para el general Ruíz Novoa su retiro voluntario del ejército en 1965, debido a presiones políticas y de las elites económicas, dado que se consideró que había una intervención política de su proyecto, el Plan sería definitivo para reformar la lucha insurgente del ejército colombiano⁷⁵.

Ahora bien, en medio de las luces y sombras de este macroproyecto de concertación y represión desarrollista que representará el Frente Nacional, aparecerán varios mecanismos de trámite de las secuelas de la *Violencia*. En su época eran ya un tímido avance en medio de tanta incertidumbre nacional. Quizá leídos hoy, embargados por toda la lógica transicional, esté uno tentado a evaluarlos como dispositivos funcionales a la política de concertación elitista, o a considerar que su creación haya sido motivada y reforzada por el imaginario de lo políticamente correcto, de que con ello se lograrían saldar cuentas con el antiguo régimen y construir más legitimidad. Lo único cierto es que todos ellos son recurrentes durante el Frente Nacional. Ya mencionamos uno de ellos, el “Plan Lazo”, que funcionó como una estrategia cívico militar de gran impacto. Pero también nos vamos a topar con la creación de una *Comisión Nacional de*

⁷⁵Este Plan contribuyó a estrategias de contraguerrilla como el conocido “Plan Soberanía”, empleado con éxito en diversas regiones del país por los militares de reconocido prestigio como José Joaquín Matallana y Álvaro Valencia Tovar (Leal, 2002: 46). Será también muy importante en la consolidación del Decreto-Ley 3398 o “Estatuto para la Defensa Nacional de diciembre de 1965” que va a introducir reformas cruciales y problemáticas para el país. Por ejemplo, se arguye que la idea de que la seguridad nacional es cuestión de todos los colombianos y de todas las personas naturales y jurídicas, y en esa medida los civiles se pueden armar para garantizar la defensa civil. Esto último será una justificación para los grupos de autodefensa y paramilitares (Leal, 2002: 47 – 48; Romero, 2009).

Instrucción Criminal encargada de investigar los delitos que hubieran podido cometer altos funcionarios del Estado durante la dictadura militar, la cual sólo terminaría abriendo expedientes a Rojas Pinilla⁷⁶, principal “chivo expiatorio” de una época, caracterizada por manufacturar amañadamente las responsabilidades para unos y no para otros. Además, como se verá más adelante, surgirán comisiones departamentales de rehabilitación y una gran *Oficina de Rehabilitación* para hacer operativos los planes de ayuda del Gobierno de Lleras Camargo en las zonas afectadas. En este marco también surgirá la *Comisión Investigadora*, pieza clave de nuestra investigación.

2.2. El clima operativo y pos operativo

La *Investigadora* fue creada por decreto gubernamental y controlada al inicio de sus labores por los gestores del pacto frentenacionalista. Sin embargo, se caracterizó en sus ocho meses de funcionamiento, por la presencia de los comisionados en un sinnúmero de zonas afectadas por el desangre, donde escucharon a las autoridades, recogieron testimonios de los afectados y negociaron y renegociaron pactos de convivencia, con los directorios de los partidos y los grupos alzados en armas. Ella allanaría el camino para el diseño de planes y estrategias de reingeniería social y modernización, prometidas por el Frente Nacional para estas zonas. Generaría con el tiempo, una serie de expectativas desde las lecturas a favor o en contra de su labor, rastreables en su mayoría en la prensa escrita.

2.2.1 Su conformación y funcionamiento

La Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la violencia en el Territorio Nacional, comenzará sus labores en el contexto de una Junta Militar de Gobierno que asume el poder tras la renuncia pactada de Rojas Pinilla en mayo de 1957. Será esta Junta la que se encargue de nombrarla mediante el decreto 0165

⁷⁶Al respecto el artículo de Valencia (2010) y su tesis doctoral (2011) abordan de manera amplia el papel de esta Comisión y toda la artesanía y maquillaje político del juicio realizado a Rojas Pinilla en el Congreso de la República.

del 21 mayo de 1958⁷⁷. Según este decreto, su nombramiento fue parte de las recomendaciones que otra Comisión de consulta política y jurídica había hecho previamente al gobierno nacional, específicamente en materia de estudio de la *Violencia* en sus diversos aspectos y con la pretensión de facilitar la “*Recuperación de la República*”. Según se había sugerido por parte de este organismo de consulta, la labor de la que sería la *Comisión Investigadora*, debería estar integrada por “*eminentes representantes de la vida política*”. Valga aclarar aquí, que el organismo de consulta había surgido a los inicios del gobierno de la Junta que a su vez había nombrado a varios Ministros del despacho para que hicieran una averiguación al respecto y produjeran unas recomendaciones. Sin que el informe de este organismo de consulta se conociera públicamente, el periódico *El Siglo* en uno de sus editoriales, consideró en su momento, la labor de esta *Comisión de consulta*, como decisiva en las determinaciones que se tomaron respecto de la creación de la *Investigadora*⁷⁸.

A través de las pesquisas realizadas para esta tesis, no hay una “versión unánime” sobre quiénes fueron los verdaderos gestores de la *Investigadora*. Sin embargo, según lo reconocieron en público los mismos miembros de esta Junta, serían Lleras Camargo y Gómez Hurtado, los gestores y gendarmes del pacto frentenacionalista, los que la impulsarían, tratando de buscar “*soluciones humanas y justas a la Violencia*”⁷⁹. Para Otto Morales Benítez, en cambio, fue más el espíritu de civilidad y patriotismo de Lleras Camargo, y su ideario de “*unidad nacional, de respeto y atracción a la gente...de donde surgió la comisión...porque siempre fue del parecer que la paz no se podía hacer sino atrayendo a la gente*”⁸⁰. En el periódico *El Siglo*, se llegó a afirmar que el ministro de gobierno Rodrigo Noguera Laborde, habría propuesto la creación de una Comisión de expertos en las diferentes disciplinas sociales, para conocer las verdaderas causas de cómo opera la Violencia en el país.⁸¹ Más allá de quién o quiénes haya (n) sido los promotores de la idea, lo cierto es que la *Comisión* surgió del seno mismo de un pacto

⁷⁷En el libro *La Violencia en Colombia* aparece señalado por Guzmán Campos, otro decreto expedido por la Junta Militar, el no. 0942 del 27 de mayo. En nuestro caso conservamos el decreto publicado por la prensa de la época.

⁷⁸*El Siglo*, Mayo 23 de 1958.

⁷⁹Periódico *El Espectador*, 25 de junio de 1958.

⁸⁰Fragmento de entrevista realizada por Andrea Arboleda, 2009 (Utilizada con autorización).

⁸¹*El Siglo*, 20 de mayo de 1958.

que se pretendía como un sistema civilizador entre partidos que liberaría de los prejuicios y sectarismos a la nación. En un periódico de la época, la Comisión fue leída como la “*gran operación de paz*” al servicio de una fórmula política acordada e ideada por caballeros educados, que sobrepuestos al sectarismo y barbarie de las masas campesinas liderarían la gran cruzada de la salvación nacional. Bajo ese marco de sentido y representación, la misión de la Investigadora pasaría por diseñar e implementar mecanismos racionales y razonables de procesamiento, en medio del “gigantesco cadáver de locura”⁸² en el que había devenido la *Violencia*.

De otra parte, en el decreto de creación, se especificará que esta *Comisión de Paz*, el otro nombre con el que se le conoció, tendría un mandato de 60 días, luego de ser instalada, para rendir un informe a Lleras Camargo sobre “*la situación de violencia en el país y ofrecer soluciones prácticas*”. Aún así, ese período sería ampliado por treinta días más en el mes de julio, para un tiempo de tres meses⁸³. Más tarde se informó, que aunque el 28 de agosto debería terminar funciones la *Investigadora*, su mandato se extendería hasta que los comisionados terminarían su “*labor patriótica*”⁸⁴. Su período irá entonces hasta comienzos de enero de 1959. Aunque para esta fecha ya había entregado al gobierno de Lleras Camargo, informes detallados sobre la situación de violencia en las regiones, ella seguía actuando en el occidente de Caldas y del Quindío, donde no se había logrado aún la pacificación⁸⁵. Esto último refleja que aunque la *Comisión* fue integrada para dar cuenta de las causas y situaciones presentes, su misión terminó siendo de mayor alcance, al facilitar la generación de micropactos de paz en las regiones donde estuvo presente, lo que estaba también en consonancia con esa idea de la normalización descrita arriba. Es posible que también la Comisión fuera una plataforma de entrada para la aplicación de planes cívico – militares como “el Plan Lazo” en las zonas más sensibles, en algunas de las cuales nacería también la insurgencia moderna. Algunas de estas zonas fueron el Quindío y el norte del Tolima. En la primera, se crearía la VIII Brigada y en la segunda funcionaría el Batallón Colombia, este último comandado por el

⁸² Revista Semana, Diciembre 9 al 15 de 1958.

⁸³ Periódico El Tiempo, 17 de julio de 1958.

⁸⁴ Periódico El Tiempo, 21 de agosto de 1958.

⁸⁵ Periódico El Tiempo, 29 de enero de 1959.

coronel Matallana (Gilhodes, 2009: 305)⁸⁶. Tanto la brigada como el Batallón cumplirían un papel importante en la ofensiva contra Marquetalia, en el sur del Tolima, foco de las guerrillas agraristas.

Ahora bien, en el decreto de constitución de la Comisión, se ordenaba que el informe o informes fueran reservados, lo que implicaba que sólo al gobierno central le correspondería reproducirlo (s) parcial o totalmente, de acuerdo a los intereses del país y la paz pública, intereses que estaban en directa consonancia con los de la concertación diseñada por las élites. A través de este decreto, se le dio vía libre a los comisionados para tener acceso a todas las dependencias, informes oficiales, tanto los de carácter público como reservado, así como a los sumarios y expedientes que cursaban en contra de implicados. No obstante, se consideró que las funciones de la Comisión eran de carácter sólo informativo al gobierno y no cumplían ninguna función judicial o administrativa.

Figura 1. Extracto del decreto gubernamental de creación de la Investigadora



Fuente: El Espectador, 1958.

El decreto además estableció que sus miembros devengarían una suma de 3.000 pesos colombianos (390 dólares para la época) por sus labores, con viáticos de 100 pesos

⁸⁶ Según Leal, en el Quindío, “se crearía el Destacamento Operacional donde habrían de converger la jurisdicción de tres de las siete brigadas con que contaba el Ejército en su organización operativa: la VI al oriente, con comando en Ibagué, la III al suroccidente, con dirección en Cali, y la IV al norte, con jefatura en Medellín. Este Destacamento sería luego la VIII Brigada” (2002: 44-45).

diarios (un aproximado de 13 dólares) durante el tiempo que estuvieran en las zonas afectadas, pudiendo contar con auxiliares de campo. Este valor representaba una suma bastante cómoda para la realización del trabajo, si se tiene en cuenta que el salario mínimo de un colombiano por aquel entonces se aproximaba a los 160 pesos. De igual forma, en el mandato, si bien se hablaba de efectuar un estudio en aquellos departamentos más afectados por el desorden y la delincuencia, localizando los móviles determinantes y generando recomendaciones para su solución metódica, se daba prelación a aquellas recomendaciones que estuvieran avocadas a la solución de las injusticias creadas por la intimidación y la fuerza, las relativas al despojo de bienes, las medidas para la rehabilitación económica y social y el apoyo a las víctimas. De esa manera, se dejaba constancia en ese decreto que la radiografía de la *Violencia* pasaría también por toda una terapéutica y profilaxis de sus secuelas.

La elección de sus integrantes demuestra también de qué forma fue leída en su momento la *Investigadora* como parte del sistema civilizador del Frente Nacional. Quiénes la van a integrar son parte constitutiva de ese sistema, por fuera del mismo no caben otras personas, no son necesarios, ni serán tampoco consultadas para hacer parte. El mismo Guzmán Campos, integrante de la Comisión, reconocería años más tarde al realizar un balance sobre su participación en esta experiencia, el carácter “clasista y oligárquico” en su conformación (Guzmán, 2009). De ella terminarían excluidos los campesinos, principales víctimas de la violencia. No entrarían sencillamente porque para la época, tampoco eran parte de los cánones civilizatorios del pacto de élites. Había la impresión en el ambiente, de que los campesinos representaban la cuota bárbara del país. A ellos se les responsabilizaba, incluso desde pensadores liberales y líderes de opinión, del “ciclón del desangre y la barbarie”. Incluso, otros grupos que no fueron contemplados y relegados dentro de esa política de caballeros fueron los del partido comunista y las mujeres. Los primeros, de hecho estaban saliendo de la proscripción y clandestinidad a la que los había confinado la Violencia y Rojas Pinilla y las disposiciones constitucionales del pacto les limitaban el espacio de participación, aunque una parte de sus miembros luego encuentre participación a través del MRL (Movimiento Revolucionario Liberal) (Pécaut, 2003c). Por su parte, las mujeres reclamaban su

participación en la *Comisión Investigadora*, pero no eran cualquier tipo de mujeres, eran mujeres vinculadas a los hombres de partido. Un grupo de ellas, así lo hizo saber a través de la Convención Bipartidista Femenina que a propósito de la constitución de la *Unión de Ciudadanas Colombianas o Liga de mujeres votantes*, van a argüir “*que el elemento femenino puede cooperar [a la comisión] con patriotismo y a la altura de las circunstancias*”⁸⁷. Las que reclamaban su inclusión, lo hacían luego de que con el gobierno de Rojas Pinilla, lograran acceder a las urnas políticas. Su posición provenía de una demanda de clase, en tanto ellas pertenecían a las élites bogotanas y antioqueñas. No demandaban su inclusión desde su condición de marginalidad, no estaban representando a la mujer campesina que sufría en carne propia el desangre⁸⁸.

Para la integración de la *Investigadora*, el decreto establecía un equipo conformado por ocho eminentes representantes de los partidos liberal (2), del conservador (2), de la Iglesia Católica (2) y de las Fuerzas Armadas (2). La Comisión quedaría, luego de varios tropiezos, conformada entonces por el partido liberal en las figuras de Otto Morales Benítez (quien hizo las veces de coordinador) y Absalón Fernández de Soto; por el partido conservador, estaría Augusto Ramírez Moreno; por las Fuerzas Armadas, sus representantes serían los generales en actividad, Ernesto Caicedo López y en retiro Hernando Mora Angueira; por la Iglesia, los sacerdotes Fabio Martínez y Germán Guzmán Campos. Pero ¿qué fue lo que pesó en el nombramiento de estas personas? ¿Por qué el partido conservador no se integró a la comisión sino con un sólo miembro? ¿Cómo se articularon entre sí sectores en los que había desconfianzas mutuas? Según Otto Morales Benítez,

“Lleras Camargo, tuvo siempre cuidado de involucrar a todos los grupos, y aunque sabía que era muy difícil hacer un informe sobre todo por la presencia del Ejército, los conservadores y la Iglesia... confiaba en que la gente que se estaba nombrando fuera a las regiones y le dijera: está pasando esto en el Valle

⁸⁷ Periódico, El Espectador, junio 10 de 1958.

⁸⁸ Como dato curioso, el día que propusieron esa idea que al parecer fue efímera en sus alcances, concurren a la reunión Berta Puga de Lleras, esposa de Alberto Lleras Camargo y María Hurtado de Gómez, esposa de Laureano Gómez los dos gestores del *Frente y de la Investigadora*. Cfr. Periódico, El Siglo, junio 10 de 1958.

del Cauca, tal cosa, en Caldas, tal otra en Tolima... y que le trajeran soluciones”⁸⁹

Ese ideario de involucrar a todos los grupos desde luego no obedecía a una política incluyente para amplios sectores. Se refería básicamente a los elementos más representativos de las élites. Representaba la visión diplomática frentenacionalista, es decir, había mucho de prudencia política, muy propia de las formulas y rituales del pacto caballeresco. La manera de perpetuar la prudencia, fue nombrando personalidades ilustres que al decir del mismo Lleras, representarían “lo mejor del país”, “de la actividad patriótica y del abnegado compromiso” que se necesitaban para salir de los “cascarones del trauma”⁹⁰. Sin embargo, de dicha integración resultó una mezcla de varias cosas. Por ejemplo, confluyeron pasados biográficos y conexiones con el gobierno de turno o con los principios tácitos acordados por la política del Frente Nacional. Había que nombrar personas que compartieran el ideario de la concertación y que no resultaran con el tiempo oponiéndose o resistiéndose a sus principios; también confluyó el conocimiento específico que sus integrantes tuvieran de las regiones y las zonas que se visitarían; por si fuera poco, algunas biografías de estos personajes estaban cruzadas por el sectarismo político y las desconfianzas por pasados no muy loables. En el caso de Otto Morales Benítez, se trataba de un escritor prolífico, Senador por el Departamento de Caldas y Secretario General de la Dirección Liberal Nacional. No había lugar a dudas con este nombramiento, si se tiene en cuenta la confianza que inspiraba en Lleras Camargo y la resistencia que había liderado alrededor del gobierno de Rojas Pinilla; también su trabajo político y su conocimiento del departamento de Caldas lo hacían una ficha clave, en una de las zonas donde más se habían presentado hechos graves de violencia a partir de los años cincuenta. Era reconocido además, por su “capacidad de trabajo y organización”.

⁸⁹ Entrevistas realizadas por Indepaz y por Andrea Arboleda.

⁹⁰ **Revista Semana, Junio 21 – 27 de 1958.**

Por su parte, Absalón Fernández de Soto⁹¹, tenía credenciales políticas de alto nivel. Había sido Ex ministro de Gobierno en dos ocasiones, una en el año 34 y otra en el período 45-46. Era también, representante a la Cámara y poco tiempo después de estar vinculado a la Comisión, sería nombrado Gobernador del Departamento del Valle. Era lo que se puede decir un notable de los ministerios. Quizá haya pasado lo mismo con los nombramientos por las Fuerzas Armadas, de Ernesto Caicedo, Brigadier general y Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; y Hernando Mora, Ex jefe del Estado Mayor y Ex director de la Marina. Sin embargo, los nombramientos de los representantes de la Iglesia tuvieron otro carácter, más aún cuando esta institución estaba tan cuestionada por su participación, ya fuera por omisión o acción en el desangre. Al ser nombrados Germán Guzmán Campos, cura párroco del Líbano (departamento del Tolima) y Fabio Martínez⁹², quien había sido párroco de Quinchía (Caldas), posiblemente se estaba enviando el mensaje de que la Iglesia podía acercar y no separar, especialmente por lo incendiario de los discursos de ciertos sacerdotes y obispos.

Es posible sospechar, por los alcances que tuvieron las “múltiples giras de conversión”⁹³ de estos curas por el país, que en ese momento se tenía confianza en que su labor podría llegar a ser fructífera para apaciguar los ánimos, no sólo en el terreno de la prédica, sino en el de la facilitación de la deliberación. Además, esos curas harían de la confesión una herramienta importante para recabar testimonios que bajo otra lógica no hubiera podido darse. Ellos sabían cómo hablarle a la gente, cómo llegarle al campesino, cómo ablandar sensibilidades políticas. Mucho del material de campo recogido bajo esta forma, le serviría luego a Guzmán Campos, como “archivo” para la elaboración del libro *La Violencia en Colombia*. A lo anterior se suma, que años más tarde, este mismo personaje, reconocería que tuvo que acometer casi que un “ejercicio de convencimiento” a varios de los miembros de la Comisión para que salieran de sus escritorios en Bogotá y se enfrentaran al terreno. Su experiencia pastoral le había

⁹¹Quien entraría a reemplazar a Germán Zea Hernández (senador por Cundinamarca) Cfr. El Siglo, mayo 26 de 1958.

⁹²Fue nombrado en reemplazo de otro sacerdote, Jorge Rojas, cura párroco de Silvania en el Departamento de Cundinamarca, el cual renunciaría, al ser llamado luego por el obispo de Girardot para ocupar un cargo en una parroquia.

⁹³Eso dijo el periódico **El Tiempo**, el 22 de junio de 1958, refiriéndose a la labor de Fabio Martínez.

enseñado que “*la violencia no debe indagarse solamente en las salas de los gerentes, ni en el despacho de los gobernadores... para cazar tigres es necesario ir a donde haya tigres*” (Guzmán, 2005: 48).

En cuanto al nombramiento de los conservadores, las tensiones fueron latentes desde el comienzo. De una parte, el partido dilató la integración de la Comisión a través de la negativa recurrente a que ciertos nombramientos se hicieran efectivos. En el lapso de un mes fueron nombrados al menos cinco representantes del conservatismo, que declinaron el ofrecimiento aduciendo en unos casos, razones personales y en otras razones políticas⁹⁴. Esto dificultó, tener representación de esta colectividad en la *Comisión* y comenzar las tareas investigativas en forma⁹⁵. De otra parte, hubo dilatación y falta de consulta previa por parte del gobierno, en la medida en que se anunciaba recurrentemente el nombramiento de los dos representantes conservadores, pero ello no se hacía efectivo⁹⁶. Además se nombraba a personas sin consultarles previamente. A propósito de esto, la *Revista Semana*, informaba a mediados de junio del “*empantanamiento de la comisión*” debido a la “*renuncia de algunos de los nombrados por el gobierno y al anclaje de los otros en sus escritorios de Bogotá*”. El columnista se preguntaba “*¿si es tan vasto el problema de la violencia que una comisión nombrada de emergencia y en concreto para ello, no sabe por dónde comenzar o nadie quiere comprometerse?*”⁹⁷. De otra parte, dos de las personas nombradas eran reconocidas por sus pasados sectarios y su pertenencia al grupo político *Los Leopardos*⁹⁸. Una de ellas,

⁹⁴El primero en renunciar fue Guillermo Amaya Ramírez, rector por entonces de la Universidad Nacional de Colombia. (Cfr. *El Siglo*, mayo 26 de 1958). Según informó este periódico, dimitió porque no podía hacer frente a los dos cargos. Luego estarían Hernando Carrizosa (Ex gobernador del Departamento de Cundinamarca) y el Senador Eliseo Arango (Ex ministro de Relaciones Exteriores y Ex diplomático) que también declinaron. El turno sería más tarde para Rafael Delgado Barreneche y Antonio Álvarez Restrepo, pero ambos también rechazaron el nombramiento. Se dijo en su momento, que habían sido también contemplados los nombres de Belisario Betancur (sería presidente de la República entre 1982-1984), Diego Tovar Concha, Enrique Gutiérrez Anzola, Bernardo Gaitán Mahecha (decano del Instituto de Derecho Penal de la Universidad Nacional, ex alcalde de Bogotá y hoy profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá) y Misael Pastrana Borrero (presidente entre 1970-1974) (Cfr. *El Siglo*, mayo 26 de 1958).

⁹⁵Ramírez Moreno se integra a los trabajos del equipo, el 15 de julio, cuando la comisión está de gira por el Valle del Cauca, luego de haber visitado la zona de Caldas y Quindío.

⁹⁶ *El Siglo*, 22 de Junio de 1958

⁹⁷ *Revista Semana*, 21-27 de junio de 1958.

⁹⁸Este grupo fue fundado por cinco intelectuales conservadores en la década de los años veinte, dos de esos intelectuales eran Eliseo Arango y Augusto Ramírez Moreno. Se constituyeron en admiradores y seguidores de las ideas fascistas. Figuró en la escena pública por sus acalorados debates en la prensa escrita, especialmente desde diarios como “El nuevo tiempo”, “El debate”, “La Patria” y “Los Nuevos”. Dentro de este grupo también destacaría la

Eliseo Arango, renunció. La otra persona, Augusto Ramírez Moreno, había sido Ex embajador, dirigente del Partido Conservador y fundador de ese grupo. Según Morales Benítez, había preconizado la violencia en el Departamento de Boyacá, lo que hacía que frente a él, al menos de parte de los integrantes liberales, se esgrimieran ciertas desconfianzas por sus posiciones radicales e intransigentes.

Figura 2. El político, el cura y el militar: los notables del pacto y de la *Comisión Investigadora*



Fuente: Periódico El tiempo, 1958.

Antes de creada la *Comisión Investigadora*, la Junta militar había por su parte conformado cinco comisiones más, que debían rendir informes específicos sobre los departamentos de Cundinamarca (Sumapaz), Tolima, Huila, Caldas y Valle del Cauca, los considerados afectados y “más sensibles” por las situaciones de orden público que se presentaban. Esos informes, además de facilitar una descripción de la situación de violencia en esas zonas, contenían una radiografía cuantativa y cualitativa de la guerra, a partir de estadísticas de los predios rurales afectados por la violencia, censo de los propietarios y de quienes ocupaban los terrenos de hecho, valor catastral y valor comercial, enumeración de causas de situaciones violentas y soluciones aconsejables.

facción de los “Alzatistas” partidarios de Gilberto Álzate Avendaño, contendor de Laureano Gómez. Practicaban por igual una política sectaria y nacionalista Cfr. [Trujillo \(2007\)](#), [Vásquez \(2004\)](#).

Las *Comisiones departamentales* como se les conoció, eran organismos eminentemente técnicos, sus equipos de trabajo estaban conformados por representantes de las Fuerzas Armadas, dos abogados y dos peritos de la Caja Agraria. Rendían informes a la *Comisión Investigadora* y al Ministro de Gobierno⁹⁹. Inicialmente fueron nombradas por un período de 90 días que luego sería ampliado a 120 días. Este trabajo sería importante como antesala y preparación del terreno al quehacer menos técnico y más etnográfico de la *Comisión de Paz*. De todas formas, si bien estas comisiones eran organismos técnicos, con el tiempo llegarían a ocuparse, junto con la *Comisión de Rehabilitación*, de una diversidad de temáticas, más parecidas a oficinas de asuntos varios en tiempos de guerra. Por ahí pasaría, según Sánchez (1988), “*la solicitud de una viuda o un huérfano, víctimas de la Violencia; se tramitaría la petición de un equipo de transmisiones para la policía de alguno de los departamentos; o se abordarían temas, como la niñez abandonada o los despojos*”.

Ahora bien, para llevar a cabo su labor, la *Comisión Investigadora*, decidió inicialmente formar dos equipos de trabajo, uno que se encargara de solicitar a la entonces *Secretaría de Asistencia Social (SAS)*¹⁰⁰, la información disponible sobre violencia en las regiones; el otro encargado de leer y revisar las conclusiones y recomendaciones del informe económico y social sobre Colombia, que el sacerdote Louis Joseph Lebret, había elaborado bajo el nombre *Misión de Economía y Humanismo*, por sugerencia del Comité Nacional de Planeación (CNP)¹⁰¹. Este informe, había sido entregado a Lleras Camargo recientemente y básicamente presentaba un diagnóstico de las condiciones de desarrollo colombiano, privilegiando una perspectiva sociológica¹⁰². El mismo venía a subrayar “*el*

⁹⁹ Periódico El Espectador, 23 de junio de 1958.

¹⁰⁰ Entró a reemplazar a SENDAS (Secretaría Nacional de Asistencia Social) que fue creada durante el gobierno de Rojas Pinilla. Fue la pionera de lo que hoy en día es el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), encargado de la educación técnica en Colombia.

¹⁰¹ El Análisis de Lebret junto con el del economista norteamericano Lauchlin Currie (*Bases de un programa de fomento para Colombia* (1950) fueron claves para tomar decisiones sociales y económicas en ese momento. Además, la oficina de Planeación Nacional sería organizada sobre la base de la asesoría del economista Albert Hirschman (Melo, 2008).

¹⁰² La misión había sido contratada en 1955 y contó con la colaboración de los padres Birou (sociólogo) y Viau (especialista en pedagogía) y de los expertos Delprat (especialista en coyuntura) y Labasse (especialista financiero). Como representantes colombianos estaban Beltrán (arquitecto urbanista), Morales (experto agrícola) y como funcionarios del CP están Nagy (economista, agrónomo) y Célestin, quien pertenecía al Instituto de Economía y Humanismo pero había sido contratado como técnico por el CNP. El informe es entregado en 1958. Cfr. Misión de Economía y Humanismo. *Estudio sobre las condiciones del desarrollo de Colombia*. Bogotá, Aedita-Cromos, octubre

espíritu antieconómico de los colombianos...que de no conllevar grandes cambios en las costumbres y mentalidad, así como de un desarrollo orientado por estudios precisos y una firmeza capaz de romper las resistencias atrasadas o egoístas, el país estaría condenado al fracaso” (Arévalo, 1997). Los comisionados tomaron atenta nota de su contenido, y es posible sospechar que quizá fue uno de los más influyentes para que uno de los ejes centrales de discusión fueran las reformas de tipo agrícola que habrían de realizarse en las zonas afectadas por la violencia. Se establecía con ello una relación entre pobreza y violencia, que aunque útil para el momento, luego monografías regionales confirmarían que no era del todo cierta. Especialmente a través del célebre trabajo de Ortiz (1985) sobre la violencia en el Quindío en los años 50, que mostrará cómo el terror cobra la forma de una gran empresa económica, activándose y expandiéndose especialmente en períodos de cosecha en las zonas cafeteras. Estas dos tareas de los comisionados se acompañaron, en paralelo, con la recolección de informes del SIC (Servicio de Inteligencia Colombiano), de los Ministerios de Guerra, Justicia y Gobierno, de la lectura y discusión de los informes presentados por las comisiones departamentales mencionadas antes, y de la información recogida en los juzgados y en la Contraloría Nacional.

En comienzo, la actividad de los comisionados fue sólo de recolección de información, labor que hicieron desde sus escritorios en Bogotá. Quizá eso produjo una reacción de algunos medios de la época, que consideraban que eso era un primer síntoma de que ella *“se encontraba estancada y quizá era una comisión inútil”*¹⁰³. Aquí se conjugaban una serie de factores explicativos. Por una parte, la falta de los nombramientos de los conservadores, de otra, la incapacidad para lograr armar un plan de acción para el trabajo en las zonas afectadas y también el escepticismo de ciertos comisionados de que el tiempo señalado para las labores fuera suficiente. Quizá el punto más preocupante estaba en que en algunos de sus miembros aun no existía una claridad sobre lo que irían a hacer. Para algunos se trataba de generar un informe técnico en el que no establecerían

de 1958. En su momento se consideró el informe más completo de diagnóstico de la situación del país (Cfr. Arévalo, 1997).

¹⁰³ El Siglo, 4 de Junio de 1958.

responsabilidades sobre quién inició el desangre o en qué zonas. Para otros se buscaba generar recomendaciones rápidas, que por sí solas podrían provocar “la extinción de la violencia en ciertos sectores”. Para algunos más se trataba de una tarea de recristianización. Como se verá a continuación, las cosas para la Comisión comenzarán a cambiar cuando entren a terreno luego de mes y medio de estar en Bogotá. A este tema dedicaremos los siguientes apartados.

2.2.2 El trabajo en terreno: llegar y escuchar

Mientras el acuerdo frentenacionalista se encarga de imaginar la concertación desde arriba, desde el centro, desde la capital, la Investigadora actúa en las regiones, es decir, piensa y enfrenta el problema de la pacificación y la rehabilitación localmente. Desde nuestra óptica, el trabajo de los comisionados luego de salir de la capital se va a concentrar en varios aspectos decisivos. Lo primero es la llegada a las zonas afectadas por la *Violencia*. Lo que va implicar desplazamientos desde Bogotá hacia las principales capitales de los departamentos y de allí hacia las zonas consideradas más críticas. El mapeo de estas zonas se va determinando precisamente en las reuniones que van a sostener en las capitales. De estos mapas también se puede deducir en que lugares colocaron los comisionados el acento y que otros quedaron por fuera de su radar. Como se verá luego, en algunas de las zonas visitadas serán participes de recibimientos multitudinarios y encuentros calurosos con autoridades y campesinos; en otras, encontrarán resistencias y desconfianzas de las comunidades o de ciertos sectores políticos y eclesiásticos. Recibimientos que van a ser producto del imaginario que se tiene a favor del Frente Nacional como una especie de nuevo comienzo para el país. Pero también, resistencias que se pueden explicar por la acumulación y reciclaje de problemas sociales y políticos o de desconfianzas de los habitantes locales frente a los poderes centrales y a los emisarios del régimen. Estas resistencias, en algunas zonas lograrán romperse y, en otras, simplemente tendrán que aceptar su incapacidad para desbloquearlas y seguir.

Lo segundo, es la estrategia de escucha de informes y memorandos oficiales, provenientes de autoridades y pobladores. Durante varios días, incluso semanas, los comisionados se van a reunir con Gobernadores, Alcaldes, Concejales, Diputados, directorios de partidos políticos, autoridades eclesiásticas, campesinos, personas desplazadas por la violencia y guerrilleros, entre otros. De todas estas personas, escucharán demandas diversas, producto de la lectura de las realidades locales que ellos hacen de zonas que parecen estar en una guerra sin cuartel. Se hablará de la situación de impunidad, de la precariedad de los sistemas de salud y educación, del sectarismo, del desplazamiento. A su vez los comisionados realizarán una labor de resignificación de este diagnóstico y de allí saldrán los informes verbales al gobierno de Lleras Camargo en la capital.

En esta segunda estrategia será de crucial importancia, la recolección de testimonios directos en las zonas críticas. Sería parte de una política privilegiada por la *Investigadora* para “lograr un contacto directo con los hombres y mujeres de todas las corrientes políticas”¹⁰⁴. Además la comisión sería reconocida, precisamente por dar prioridad a la voz de las víctimas. En un diario de la época se mencionó a propósito, “es la primera vez, decían los campesinos, que vienen a preguntarnos que nos pasó; a hablarnos de paz sin echarnos balas después”¹⁰⁵. De todas formas, frente al riesgo que acarrea en tiempos de guerra recoger la voz de estos protagonistas de excepción, los comisionados tendrán que dejar en claro que cualquier información que reciban no será revelada, ni tampoco las identidades de los informantes. Este es un elemento que aparecerá también en la comisión de 2007, a propósito de las denominadas salvaguardas” y que luego entraremos a explicitar. Es probable que para lograr que la gente hablara sobre lo ocurrido, en medio de un desangre que aún continuaba y que muy posiblemente dejaría a los testigos, expuestos a sus verdugos después que los comisionados se marcharan, la figura de los sacerdotes fuera absolutamente clave. Nuestra impresión es que ellos lograron camuflar la recolección del testimonio con el ropaje de la confesión o de la asesoría espiritual. Ahora bien, para darnos, una idea de la

¹⁰⁴ Periódico, El Espectador, 21 de junio de 1958.

¹⁰⁵ Periódico, El Tiempo, noviembre 26 de 1958.

magnitud de este trabajo, en el libro *La Violencia en Colombia*, se habló de que la *Investigadora* logró recolectar más de 20.000 testimonios, los cuales fueron recabados de forma individual o colectiva. Leído hoy ese dato de los testimonios recolectados, podríamos quizá argüir que esta comisión sería pionera en el país, en la configuración de una “industria extractiva”¹⁰⁶ de relatos que después se haría notoria en otras comisiones de estudios o en experiencias de campo lideradas por los científicos sociales nacionales. Industria incipiente, por supuesto, que por una parte permitió nutrir el libro *La Violencia en Colombia*, pero que también ayudaría a alimentar en gran parte la institucionalización de la ciencia social en el país en los años cincuenta y sesenta, donde uno de los imperativos será precisamente “salir al terreno y hablar con la gente”, como requisito para legitimar bajo los cánones científicos los saberes sociales. Lamentablemente con el tiempo, esta industria terminaría colonizando el espacio de comprensión del dolor de la víctima, olvidando su impronta como escenario fenomenológico o experiencial. En esta industria, como ya anotábamos anteriormente, expertos de toda extirpe, sociólogos, historiadores, antropólogos, trabajadores sociales, terapeutas sociales y psicólogos, jugarían un papel central. A continuación desagregaremos un poco el asunto por departamentos y municipios para darnos una idea las características y naturaleza del trabajo realizado.

2.2.2.1 La visita a las zonas de Caldas, Quindío y Risaralda

¿Por dónde comenzar el trabajo en terreno? Lo más lógico para muchos sectores, hubiera sido comenzar por el departamento de El Tolima, el más azotado por la violencia bipartidista y uno de los responsables de acumular problemas que después otros departamentos tendrán que afrontar, sobre todo en las zonas limítrofes con el Quindío, Valle, Huila y la región de El Sumapaz cundinamarqués (Sánchez, 1998). Sin embargo, se informa en la prensa de la época, que la *Comisión* no comenzará por este departamento, para no “*interferir con la labor ya emprendida por Darío Echandía en esa región*”, trabajo que estaba adelantando junto al gobernador Manuel Coronado¹⁰⁷.

¹⁰⁶ El termino lo apropio y resignifico de [Castillejo \(2009\)](#).

¹⁰⁷ [El Tiempo, 25 de junio de 1958](#).

Las tareas iniciaron entonces por el departamento de Caldas, el día 25 de junio. Donde visitará en total unos seis municipios. Las tareas comenzaban por la zona cafetera, paradójicamente una de las más ricas y con una clase media rural, pero también una de las más azotas por la violencia bandolera que era motivada por los fines económicos. Como reconoció el libro *La Violencia en Colombia*, “*la confrontación en esa zona se desató alrededor del café, bajo la égida de tres jefes: Roberto González, el Sargento García y “Venganza”*” (Guzmán, Fals y Umaña, 2005: 148).

De entrada el enlace de los comisionados con las zonas afectadas será la figura del Gobernador, Coronel Ayerbe Chaux, que había sido nombrado para pacificar la zona y que luego durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, será ministro de Defensa. Este militar, brindará un mapeo de la región y ayudará a los comisionados en el diagnóstico de la situación de orden público. Durante los siguientes días, sus visitas transcurren entre los municipios más críticos como Anserma, Ríosucio y Quinchía, en el departamento de Caldas; Pijao en el departamento del Quindío y Pereira en el departamento de Risaralda. Las visitas implican para los comisionados largas jornadas de trabajo en las que reciben declaraciones individuales o colectivas de campesinos, desplazados y viudas. Estas informaciones se triangulan con informes puntuales de las autoridades municipales y departamentales. Además, se generan contactos con las autoridades eclesiásticas. A finales de junio, la *Investigadora* entrevista en la cárcel del distrito de Manizales a Pedro Brincos quien estaba acusado de organizar el grupo de guerrillas en Quinchía. Asisten también a reuniones con miembros de comités, como por ejemplo el comité ejecutivo pro - departamento del Quindío, que buscaba demandar ante el gobierno nacional la creación de esta unidad administrativa y así solucionar el problema de violencia en la región. Este comité hace llegar a los comisionados memorandos con caracterizaciones de aquello que pasa en la zona y lo que sería para ellos su propia génesis de la guerra a nivel local. Para ellos, en la región son cuatro tipos de violencia los que hacen presencia: la ejecutada por los bandoleros y que tiene una clara muestra de sevicia y crueldad, la de

las cuadrillas de trabajadores en tiempos de cosecha, la violencia económica, ligada al despojo de tierras y la política desencadenada por el sectarismo¹⁰⁸.

Entre honores, aunque también con incredulidades y sospechas, será recibida la *Investigadora* en las regiones. Quizá ello refleja el impacto que tenía su creación en medio de un agotamiento generalizado producto del desangre y la confrontación; pero además al posicionamiento de cierto imaginario proveniente de las élites, especialmente de que con la llegada de la comisión “se acabaría con la violencia”¹⁰⁹. Además la llegada de la comisión implicaba también el traslado del Frente Nacional a zonas donde nunca los políticos y personalidades de la capital hacían presencia. Las visitas a los municipios de Pereira y Quinchía son una muestra de ello. En el primer caso, se congregan autoridades civiles y militares para recibir a sus miembros con honores militares en el aeropuerto. Por su parte, en el municipio de Quinchía, su llegada fue precedida de un multitudinario despliegue popular en la plaza principal, de no menos de 10.000 personas¹¹⁰.

Figura 3. Concentración popular con motivo de la visita de los miembros de la Investigadora en Quinchía –Caldas



Fuente: Periódico *El Espectador*, 1958.

¹⁰⁸ El Tiempo, 25 de junio de 1958.

¹⁰⁹ El Espectador, 8 de julio de 1958.

¹¹⁰ El Espectador, 2 de julio de 1958.

Los periódicos de la época relatan cómo algunos campesinos les hicieron guardia de honor y saludaron a los comisionados en su labor de pacificación. Era como si con la *Comisión* llegara para quedarse el ideario del nuevo comienzo. No faltarían en esos recibimientos, “los prestantes ciudadanos y las hermosas muchachas portando banderas blancas y nacionales”¹¹¹, tratando con ello de dar la bienvenida al evangelio de la reconciliación nacional. Sin embargo, no todo es bienvenida calurosa. En algunas zonas, como Pereira, los diarios de la época señalan que en el “*ambiente popular existe una visible incredulidad*” dado que diez años antes se habían intentado comisiones gubernamentales para investigar causas, desarrollo y consecuencias de la violencia, sin haberse logrado nada¹¹². No es de extrañar, que ante esta manifestación de reticencia con la política de concertación, se le preste a este municipio una especial atención, sobre todo por ser un epicentro de recepción de desplazados forzados, provenientes del occidente de Caldas, del Quindío y del Norte del Valle¹¹³. De muchos de estos desplazados, la *Comisión* recibirá minuciosas declaraciones sobre su situación de precariedad en el casco urbano de Pereira.

2.2.2.2 La visita al Valle del Cauca

Luego de su travesía por Caldas y Quindío, la *Investigadora* se trasladará al departamento del Valle del Cauca a comienzos de julio. En este departamento visitarán cerca de 15 municipios. Será, junto con el departamento de El Tolima, los lugares donde la comisión realice más visitas. Concentrarán su trabajo especialmente en el norte, en los municipios de El Cairo, Toro, Roldanillo, El Dovio, Ceilán, Argelia, Versalles, Sevilla, Caicedonia, Cartago, Ansermanuevo y Tuluá. La mayoría, zonas cafeteras, donde la violencia la ejercen los denominados pájaros y bandoleros. Los primeros, asesinos a sueldo, de los cuales el más famoso y respetado será León María Lozano, conocido como *El Cóndor* y que se hará célebre en la obra del escritor Gustavo Álvarez Gardeazabal, *Cóndores no entierran todos los días*. Los segundos, actuando por su

¹¹¹ El Espectador, 11 de julio de 1958

¹¹² El Espectador, 27 de junio de 1958.

¹¹³ El Tiempo, 27 de julio de 1958.

propia cuenta y utilizando la maquinaria del terror para amedrentar y eliminar, como fue el caso de *El Vampiro* y *Lamparilla*, tristemente célebres por sus matanzas. A su llegada, los comisionados se encontrarán con una violencia que hace presencia no sólo en los campos sino también en las zonas urbanas. Por lo menos 24 municipios de los 40 que tiene el departamento, sufrirán su impacto (Guzmán, Fals y Umaña, 2005: 149). Al igual que en Caldas y en el Quindío, se entrevistan con personalidades políticas que incluyen Senadores, Diputados, Comandantes de Policía y el Gobernador. En algunos municipios como Sevilla, serán recibidos por los habitantes, el Alcalde, los oficiales de las Fuerzas Armadas, el cura párroco y los jefes de los directorios políticos. También por una delegación de parlamentarios y concejales, quienes manifiestan su total confianza en la política de concertación y presentan una serie de recomendaciones dirigidas al gobierno nacional a través de los comisionados, con miras a pacificar el territorio. En este sentido, los comisionados más que investigadores, lo que realizan es una tarea de “oidores” de necesidades básicas. Además porque la gente encuentra que a través de ellos se le pueden hacer extensibles las solicitudes a los gendarmes del pacto frentenacionalista en Bogotá.

Así, los memorandos de solicitudes serán comunes en todas las zonas donde estuvo presente la *Investigadora* y reflejarán en el fondo las demandas propias de sociedades excluidas y ausentes históricas de los planes de desarrollo del Estado central. En algunos casos, son medidas puntuales como la construcción de una escuela, la dotación de un matadero¹¹⁴ o el suministro de un carro de prisiones; en otros casos es todo un plan integral para superar la violencia o eliminar los focos de perturbadores de la paz pública, como llamará la prensa de la época a los bandoleros y pájaros. Éste plan incluye el reemplazo de alcaldes e inspectores de algunas zonas críticas, el incremento de fuerza policial y ejército, la creación de comisiones de paz locales, la presencia de la Federación Nacional de Cafeteros en las zonas donde nunca había llegado, la facilidad de crédito agrícola, la apertura de carreteras, el servicio de energía para los municipios, y el suministro de un carro de prisiones para transportar a los reos¹¹⁵.

¹¹⁴ Un sitio especializado en el sacrificio de animales

¹¹⁵ El Tiempo, 8 de julio de 1958.

Figura 4. Noticia de Balance de las visitas al Quindío y el Valle del Cauca

<h2>Esperanzas y Obstáculos para la Paz</h2>	
<p>La Comisión de Rehabilitación, que acaba de visitar regiones del país azotadas por la violencia, principalmente el Quindío y parte del Valle del Cauca, encontró una decidida voluntad de paz de parte de todo mundo, nublada sin embargo por los recelos y los temores, más o menos justificables por la tremenda situación que han pasado en los últimos años, pero que carecen totalmente de base en lo que respecta a la política del Frente Nacional, sobre la cual pueden guardar dudas algunas buenas gentes desprevenidas a quienes engaña cierto grupo de políticos profesionales que con diversos nombres y banderas siembran la cizaña en un campo que apenas acabamos de abonar con buena voluntad todos los colombianos.</p> <p>Los comisionados han encontrado los fenómenos comunes a todas las regiones del país, pacificadas o no, como la falta de vías de comunicación, las faltas en la higiene pública y en la educación, los problemas sociales y económicos. Es obvio que la solución de los problemas urgentes no puede supeditarse a la apertura de nuevas carreteras ni a la construcción de grandes centros materno-infantiles. Hay medidas inmediatas que probablemente no se han tomado por deficiencias de personal, y que han anotado los comisionados, concretamente en lo que se refiere al control de orden público. A pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades, dicen los informantes, es imposible atender a todos los frentes por falta de recursos y de ciertos servicios adicionales indispensables.</p> <p>La voluntad de paz es el primer elemento para la normalización. Y ese elemento existe, con frutos que ya alcanzan a palparse. Pero es evidente que la buena voluntad no es bastante. Tiene que disponer de medios y estímulos para manifestarse. En Cali asistieron los comisio-</p>	<p>nados a una reunión en la cual estuvieron presentes todas las organizaciones, sociales, y gremiales que suelen promover los movimientos de servicio común. Así está ocurriendo en Cartago, y en Marizales, y en Pereira, y en Armenia, con la asistencia de las autoridades. Pero la Comisión ha dicho también, con toda franqueza, que existen obstáculos que se oponen a esas fuerzas positivas y que operan un poco en la sombra, en forma a veces intangible, como la dañada consigna de que los postulados de gobierno nacional no se realizarán bajo un gobierno presidido por el antiguo director del partido liberal.</p> <p>Contra ese mal espíritu hay que luchar decididamente y a ello tienen que contribuir sin reticencias los órganos políticos y los vehículos que tienen influencia en la opinión pública, sin tratar de combinar habilidosamente las ambiciones de grupo con la presión de una violencia que no condensa sino literariamente, arrojando por otro lado la leña que la mantiene vivaz. Es clarísimo para el más obtuso que, por ejemplo, la propaganda basada en la "tenaza liberal-laureanista" es un excelente manera de fomentar los celos de que habla la Comisión de Rehabilitación, y acaso una nueva excusa para disfrazar la violencia con pretextos políticos.</p> <p>La ayuda económica que ha prometido la Junta Militar, con planes racionales y operantes, será una base esencial para lograr un mínimo de equilibrio y minar una de las causas del desorden. Pero resultará poco menos que inocua si por otro lado se fomenta el espíritu de discordia, la desconfianza en el gobierno y el escepticismo de la gente sobre la realidad de un gobierno verdaderamente nacional, reforzado por toda la autoridad de la Carta, y no como graciosa concepción que se pueda desfigurar en favor o en contra de una parte de los colombianos.</p>

Fuente: El Tiempo, 1958

En algunas zonas, como en el municipio Caicedonia, la *Comisión* enfrentará algunos problemas que son parte del retrato local de la guerra y de sus secuelas críticas. Por ejemplo, se van a encontrar con que las víctimas se nieguen a hablar y proporcionar

datos concretos por miedo a represalias. El mismo Otto Morrales Benítez relata que en este municipio, a diferencia de otros donde el recibimiento fue toda una fiesta y hubo comitivas amplias, aquí, la bienvenida tuvo como antesala, un

“desfile de viudas... mil, dos mil, mujeres de negro que fueron a conversar con la Comisión, comentando... mataron a mi marido, mataron mi hijo,...aquí todo el mundo sabe... pero ni una sola vez dijeron quién fue...el miedo, el terror... sólo nos decían... si nosotras revelamos quién fue nos pueden matar...si conversamos con ustedes...”¹¹⁶

En Ansermanuevo, observan que la ausencia de un directorio liberal hace nueve años y la voz única del *Comité Unionista Conservador*, dificulta la labor de pacificación, así como las tareas de la *Comisión*. Dos datos dicientes sobre el asunto son, de una parte, la asimetría en la población entre conservadores y liberales, y de otra, el silencio rotundo de los pobladores a hablar con la *Investigadora*, silencio que se ve controlado por la presión de la curia local que amedrenta por la fuerza a sus feligreses, para evitar que se expresen. En el primer caso, los datos arrojan para 1958, la existencia de 5.700 conservadores por 43 liberales, y eso que estos últimos hasta 1949, luego de los eventos del 9 de abril, eran cerca de 7.000 en esta población. Además, de doscientas a trescientas fincas estarían “en poder de personas diferentes a sus legítimos dueños”¹¹⁷. En el segundo caso, el relato de Morales Benítez habla por sí solo, de las condiciones liminales que tuvieron que enfrentar en esta zona los comisionados:

Luego de llegar...esperamos por cuatro horas, ni una sola persona se acercó y eso que la violencia allá había sido monstruosa. Nosotros dijimos, seguramente la gente no sabe y entonces mandamos timbrar hojas, conseguimos una avioneta, las arrojamos por todas las veredas del municipio. Las radiodifusoras del municipio de Cartago las contratamos, eran tres o cuatro, para pasar un aviso cada cuarto de hora, de que el sábado estaríamos allá. Llegamos, era la reunión

¹¹⁶ Entrevista de Andrea Arboleda con Morales Benítez

¹¹⁷ El Tiempo, 28 de julio de 1958.

en una escuela. De nuevo, no apareció nadie. Guzmán Campos, dijo ¡Carajo!... busquemos al cura, para que nos ayude, que predique y diga que tienen que venir a hablar. Fuimos, pero cuando nos vio, nos recibió diciendo: 'Yo aquí no hablo ni una palabra'. Yo no existo. Guzmán Campos le explicó que había un mandato del Cardenal, que había una política de pacificación para ayudar a la gente, para tener servicios de salud, de escuela, de carretera...le explicó todo lo de la Rehabilitación. Luego le dijo el cura: "Monseñor Germán, ¿terminó?" "Sí". Le dijo: "¡No sea pendejo! Esto se arregla con esto", señalando todos los fusiles que había entregado Ospina Pérez a las guerrillas de paz, porque el gobierno armó una cosa que llamó Guerrillas de Paz. Repartió fusiles por todo el país. Eso no lo cuentan. Ahí estaban todos los fusiles... ¡esto se arregla con esto, a esos hijueputas liberales!", dijo el cura. Germán muy tranquilo, muy sereno, le dijo hasta luego. Luego hablamos con el Alcalde, con el Personero, entonces nos dijeron... no, la gente no va a venir, porque los matan a la salida... además los matan con el apoyo del cura¹¹⁸.

En el municipio de El Dovio van a recibir información de que a los liberales se les “mata con serenata”. Según Morales Benítez, “ese era el método que utilizaban los Pájaros y la Policía para saber quiénes eran liberales, dado que no los conocían...ellos contrataban entonces unos músicos y estos llegaban y tocaban, los que se asomaban, se le pegaba un balazo por liberales”¹¹⁹. En Ceilán, relata como el Alcalde los recibe “con dos metralletas...recostado en la pared, quien les dice... 'excúsenme que no me mueva, pero si me muevo, me matan... aquí dicen que yo soy liberal, entonces me matan los conservadores”¹²⁰. Pero las situaciones límites no paran allí. Ellos tendrán que escuchar y recabar datos, en medio de una guerra que no da tregua con las masacres. En Cartago, mientras dialogan con los presidentes de los directorios políticos y las autoridades municipales, se presenta ante ellos, “Tocayo Ocampo, un campesino de la zona El Colorado, malherido, quien cuenta cómo logro escapar de una masacre y solicita

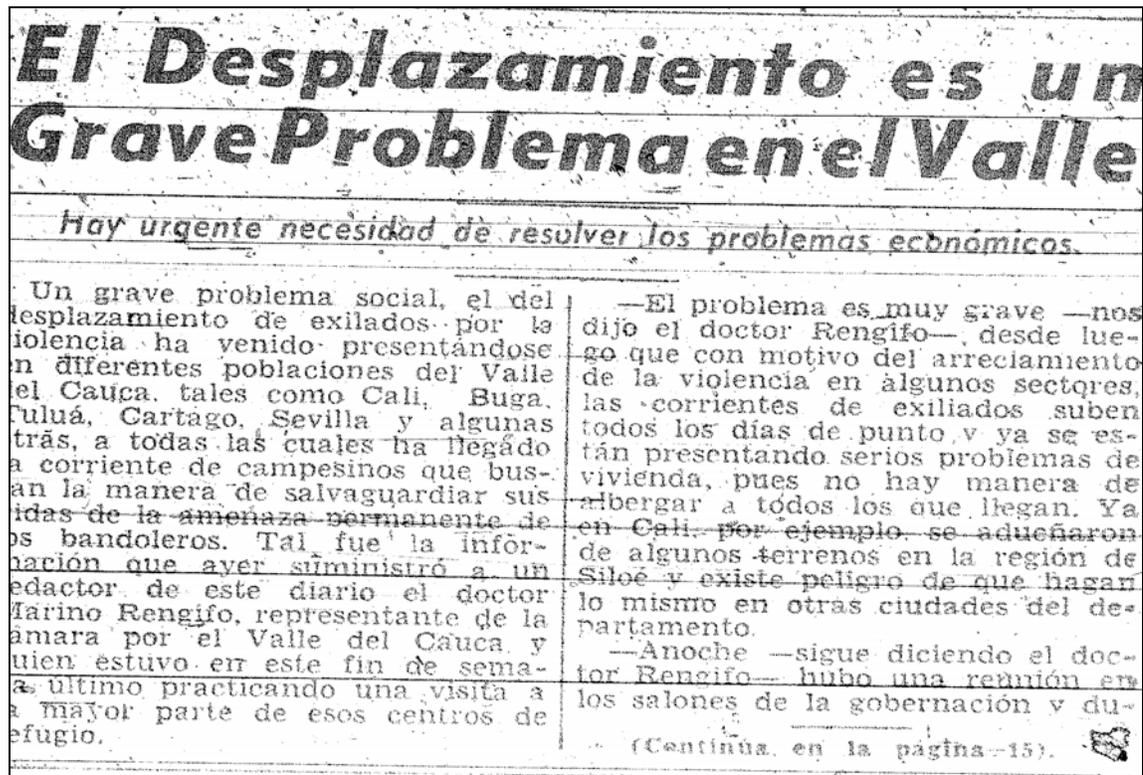
¹¹⁸ Fragmento de entrevista realizada por Andrea Arboleda a Morales Benítez.

¹¹⁹ Ibidem.

¹²⁰ Ibidem.

urgente protección”. No faltarán tampoco quienes, en medio de la narración desgarradora de los hechos, propongan de forma un tanto macondiana ante los comisionados, la supresión de los “sancochos de gallina¹²¹” para agasajar a los alcaldes recién electos, ya que los directorios se congraciaban con los alcaldes electos y después estos se parcializaban a favor de uno de los partidos. Se dice por entonces, que “*el sancocho debería de dárseles a los alcaldes luego de que estos fueran removidos de sus cargos si para entonces la población todavía tenía ganas de hacerlos*”.¹²²

Figura 5. Tema de urgencia para la Comisión Investigadora



Fuente: El Tiempo, 1958

Al igual que en el municipio de Pereira, la *Investigadora* tendrá que enfrentar en los municipios de Cali, Buga, Cartago y Sevilla el problema del desplazamiento forzado. Al punto de que algunos comparan la situación, igual o peor a la que sucede en el departamento de El Tolima, donde el tema es uno de los más críticos. Se dice además

¹²¹ Plato típico colombiano, muy común en celebraciones familiares.

¹²² El Tiempo, 4 de agosto de 1958.

que aunque las causas de la violencia en esta zona han sido expuestas por políticos, por la Iglesia y por la Comisión, “*conviene conocerlas de quienes han sufrido la violencia, más aún cuando lo que se descubre es la impunidad, la falta de crédito, las venganzas, la compra inescrupulosa de tierras, la actitud tolerante de los jefes políticos frente a la violencia y la exaltación de los ánimos*”¹²³. Finalmente, en la zona de Alcalá, los ciudadanos pedirán por intermedio de la *Comisión*, más eficacia de la policía para acabar con el bandidaje. Los pobladores, aunque con cierto recelo de hablar ante los comisionados por el temor a perder la vida, califican a la policía de parcial, sobre todo en las veredas de San Felipe y La Polonia¹²⁴. También tendrán que enfrentar en Tuluá, especialmente en los corregimientos de San Rafael, La Moralia y Barragán, situaciones críticas muy similares.

2.2.2.3 La visita al Departamento del Cauca

Hacia finales de julio, la *Investigadora* se traslada al Departamento del Cauca, que históricamente había tenido un fuerte componente de población indígena y una élite blanca en los cargos de poder. Luego de ser objeto de todo tipo de agasajos por las autoridades, se les informará de parte del gobernador de la situación por la que atraviesa un departamento al que llegan “*los violentos que son obligados por la fuerza pública a huir de los departamentos de Huila, Valle del Cauca y Tolima*”. A diferencia de los otros departamentos, donde los gobernadores realizan un diagnóstico crítico de la situación, para el gobernador del Cauca, la condición no es tan preocupante como la del Norte del Valle, que describimos arriba. Aduce ante los comisionados que “*no hay violencia generalizada, el principal problema es la carencia de vías para facilitar la labor del ejército y la policía*”. Sin embargo, los municipios más críticos de la región, son los más pobres, aspecto que contrasta también con lo observado por los comisionados en Caldas y Valle. Las zonas críticas son Miranda, especialmente las veredas de Potrerillo, Caraqueño y Monterredondo; Caloto, Tierradentro y Corinto,

¹²³ El Tiempo, 28 de julio de 1958.

¹²⁴ El Tiempo, 30 de julio de 1958.

específicamente las veredas de Medianaranja y Rionegro; y Jambaló, Silvia y Toribío en particular, las veredas de Santo Domingo y Tacueyó.

A través de Diputados y Concejales lograrán percibir también que en estas zonas se encuentra un campo propicio para el bandidaje, por la carencia de unidades de policía y de ejército. Desde la óptica de las autoridades, los problemas que se destacan ante los comisionados, conciernen más a situaciones de orden público, que a problemas sociales estructurales. Además se habla de que los municipios de Corinto y Caloto, los más productivos, están quedando desocupados. Se menciona la importancia de que los municipios del Cauca cuenten con carreteras para permitir el desplazamiento de tropas a las zonas más alejadas. En este departamento, la Investigadora será informada de que en las zonas de Miranda y Corinto, *“los partidos políticos se comprometen delante de ella a firmar un pacto para conservar la paz, restablecer el orden y fomentar el progreso”*. Además, se considera que su presencia puede resultar crucial, dado que del informe que resulte pueden derivarse fondos necesarios y urgentes¹²⁵. Esta confianza depositada en un informe que ha de provocar mayores recursos desde el centro, proviene no obstante de unas élites locales más ligadas al gamonalismo tradicional y no precisamente de las personas más afectadas.

La *Comisión* visitará cerca de 4 municipios importantes en este departamento, aunque el esfuerzo principal se concentrará en particular en la región de Tierradentro, donde el gobernador informa de la organización de una autodefensa campesina de 400 hombres. A diferencia de otros departamentos, el problema central aquí es el de la disputa por la tierra. La prensa de la época, relata como a la llegada de los comisionados se encuentran ellos con condiciones de vida primitiva¹²⁶, especialmente, por la carencia de vías de comunicación, puestos sanitarios, ayuda económica y técnica. En Popayán, capital del departamento, conversarán con el Tribunal Superior de esta ciudad, donde se les exponen temas trascendentales para combatir la impunidad: nombramiento de jueces investigadores de hechos violentos, creación de una policía judicial que proteja a los

¹²⁵ El Tiempo, 11 de agosto de 1958.

¹²⁶ El Tiempo, 22 de agosto de 1958.

investigadores y testigos y el nombramiento de los directores de las cárceles por los gobernadores.

El gobernador del Cauca, Jaime Paredes Pardo colocará también en manos de la Comisión un informe sobre la situación de violencia en el Cauca y las recomendaciones para la Rehabilitación. Entre estas recomendaciones se encuentra la creación de una Junta Nacional de Rehabilitación, con ramificaciones en los departamentos más afectados. En su propuesta, el Congreso debería destinar fondos especiales y suficientes para la defensa y rehabilitación de las zonas afectadas; así como facultades para el ejecutivo para que combata la emergencia nacional con medidas de emergencia en lo militar, lo fiscal y lo legal¹²⁷. Según, Morales Benítez ésta sería una fórmula práctica y viable para los fines que perseguía la *Comisión Investigadora*, comprometiéndose a elevar la solicitud al gobierno central. Esta idea se concretará en septiembre, con la creación de la *Oficina de Rehabilitación*.

Pero las demandas hacia la Comisión se harán incluso luego de que ella ha salido de las zonas visitadas. Así por ejemplo, en la región de San Luis, en Tierradentro, hacia el mes de octubre y a través de un comunicado de un grupo de guerrilleros, se exigirá nuevamente su presencia. En esta región operaban cuatro grandes grupos armados a las órdenes de Ciro Castaño, Laurentino Perdomo, Jairo Ramírez y Jorge Arboleda, considerados como los principales responsables de la zozobra en la zona. Según se informó, a finales del mes de diciembre, a través de la mediación del gobernador Jaime Paredes Pardo, y la *Investigadora*, se había logrado que estos cuatro jefes “*firmaran una declaración de paz*”¹²⁸.

2.2.2.4 Visita al departamento de Santander

A mediados de Agosto, la *Comisión* se concentra en la región del Carare y Barbosa. Los comisionados van a encontrarse con una zona de colonización y refugio, donde según

¹²⁷ El Tiempo, 31 de agosto de 1958.

¹²⁸ Revista Semana, Noviembre 25 de 1958.

Sánchez (1990) las fronteras entre guerras civiles y Violencia son particularmente borrosas en la historia. Y lo son, especialmente por la *Guerra de los Mil Días* (1899-1902); los enfrentamientos entre conservadores y liberales entre el 30 y el 34 y el despunte temprano de la Violencia hacia 1944-45. En su trabajo de campo, los comisionados encontrarán en la provincia de Vélez, pese a la situación de violencia provocada por bandas de forajidos, un ambiente donde según se reseña en la prensa de la época, “renace la confianza y el optimismo” porque se cree que el gobierno de Lleras Camargo aplicará medidas para esta rica región. Allí la comisión hace las veces de emisario del Frente Nacional en las localidades más críticas, donde encuentra que la mayor parte de la gente demanda al gobierno central, destinación de recursos para terminación de carreteras, ampliación de crédito, suministro de maquinaria agrícola, campañas de salubridad y educación. Los periódicos de la época van a concebir además la visita de la Investigadora, como una “gran cruzada por la Paz” en zonas ricas pero olvidadas. Visita que será además antecedida por la conformación de una Junta Cívica permanente en Cimitarra, de donde saldrá un “pliego de demandas y peticiones” que describe la situación de los colonos y cómo su labor viene siendo impedida por los bandoleros. A través de dicho pliego los pobladores esperan que la *Investigadora* luche por el mejoramiento económico y social de Cimitarra y permita “*extirpar para siempre los brotes de violencia*”¹²⁹.

2.2.2.5 Visita al departamento del Tolima

Finalmente, la *Comisión* se trasladará el 21 de agosto al departamento más complejo de todos durante el período de su mandato: el Tolima¹³⁰. En este departamento las actividades de los comisionados van a concentrarse específicamente en 17 municipios. Según lo consignó el libro *La Violencia en Colombia*, por entonces “40 de los 42 municipios tolimenses recibieron el impacto brutal de la violencia sea por la acción de grupos partidistas, por la Policía o por las fuerzas comandadas por los jefes

¹²⁹El Tiempo, 19 de agosto de 1958.

¹³⁰La violencia del Tolima fue documentada como la más aguda por el historiador norteamericano Henderson (1984). Sánchez (1992) considera que este departamento fue expresión durante mucho tiempo de la “síntesis” entre una gran historia de violencia y una de negociaciones.

guerrilleros” (Guzmán, Fals y Umaña, 2005: 139). La *Investigadora* comenzará actividades, como en los casos anteriores, por la capital del departamento y desde allí trazará el mapa de zonas a visitar. En Ibagué, de todas formas, y a diferencia de los otros departamentos, van a encontrar ya un terreno abonado, debido al trabajo liderado por el recién electo gobernador liberal Darío Echandía, quien había sido previamente comisionado por Lleras Camargo para adelantar investigaciones sobre la situación crítica y liderar procesos de pacificación. Como se reconoció en su momento, éste político será crucial en la zona para lograr neutralizar la violencia en el departamento, pero sobre todo servirá de enlace entre la clase política local, el gobierno central y los alzados en armas, que ven en él un representante digno de los ideales frentenacionalistas. Las zonas donde concentrará la comisión su atención serán básicamente las de presencia liberal, es decir los territorios del sur del departamento, lo que muestra también la impronta del gobierno de Lleras Camargo y la decisiva figura de Echandía en ellas. Así, visitarán Chaparral, Limón, Río Blanco, Herrera, Planadas, Gaitania, Dolores, Alpujarra, Chaparral, Cunday, Villarrica, Icononzo, Roncesvalles, Rovira, Herbeo, Líbano y Fresno. En varias de ellas, los comisionados tendrán que hacer frente a los numerosos exguerrilleros (al menos 33 jefes) que prometerán antes ellos, “paz y adhesión insobornable” a los postulados del Frente Nacional.

Vale destacar que en la zona sur de este departamento los comisionados deben dialogar y concertar con varios de los integrantes del *Movimiento Revolucionario del Suroeste del Tolima*. Conformado por Gerardo Loaiza que manda en la región de Río Blanco; Leopoldo García, conocido como el *General Peligro*¹³¹, Silvestre Bermúdez, conocido como el *Mayor Media Vida*, Aristóbulo Gómez, apodado el *General Santander*; Ignacio Parra, nombrado el *General Revolución* que manda en La Herrera; Hermógenes Vargas, *General Vencedor* que tiene su centro de operaciones en La Profunda y Marquetalia; Jesús María Oviedo, alias *Mariachi* que actúa en Planadas y Jacob Prías, alias *Charro*

¹³¹Casi desde el comienzo de la *Violencia* apareció la costumbre de utilizar “remoquetes” de distintos significados para calificar o autocalificar la condición de estos personajes dentro de los grupos mismos o dentro de sus comunidades. Posiblemente se debía a la necesidad de mantenerse en anonimato y evitar represalias contra ellos o sus familias por parte de la justicia y de otros grupos. Algunos de estos alias indicaban ciertas características personales de sus portadores, por ejemplo *Peligro* o *Revolución*; otros daban cuenta de sus aficiones, por ejemplo *Mariachi*; otros mostraban sus actos atroces, tal es el caso de *Venganza* o de *Sangre Negra*. (Cfr. Guzmán, Fals y Umaña, 2005: 236).

Negro, cuyo foco estratégico se encuentra en la Gaitania. Allí los comisionados se encuentran con un movimiento plagado de divergencias, las cuales obedecen entre otras cosas, a que unos liberales son denominados más limpios (puros) y otros comunes (con ciertos vínculos con dirigentes comunistas)¹³²; aunque de fondo existen otras razones, como por ejemplo, los métodos empleados, los ideales revolucionarios y las rivalidades por el mando. Los comisionados reconocen que en esas zonas, a falta de Estado, los guerrilleros han terminado por imponer su propia ley y su reglamento moral. Por ejemplo, *la ley seca* para evitar abusos en estado de alicoramiento. Una evidencia de esto, quizá se encuentre en la zona de La Herrera, “*donde para la época conviven 74 conservadores con 10.000 liberales y se afirma que la única muerte que ha ocurrido fue por el alcohol*”¹³³. Según Morales Benítez, quien compartió con el *General Revolución* y el *General Peligro* y quien va a representar como ningún otro de la comisión el discurso del frentenacionalismo, se trataba de “*tipos elementales, pero con un respeto a la Constitución, al orden legal, al sentido de la justicia. Personajes, que tenían confianza en el gobierno de Lleras Camargo y en la actividad de la Investigadora para arreglar el país*”¹³⁴.

De todas formas, estos cánones morales y reglas de hecho tienen relación con el tipo de naturaleza de guerrillas que para la época tienen que enfrentar los comisionados. Así, como lo ha señalado Sánchez (1990), se trataba de grupos que cumplían una gran variedad de funciones, por ejemplo, actuar como sustituto de movimientos previamente destruidos (sindicatos agrarios, ligas campesinas, organizaciones indígenas); como portavoces de ciertas identidades partidistas (liberales, comunistas), o como intérpretes de algunas comunidades y necesidades locales o regionales, más allá de cualquier identidad de clase o partido, por ejemplo, en torno a demandas de crédito, vías, control al despotismo de determinadas autoridades. Algunas de estas guerrillas que no se parecen en nada a las burocracias armadas de los años ochentas, confiaban básicamente en los iderios del Frente Nacional.

¹³² Para una ampliación del tema se recomienda el trabajo de [González y Marulanda \(1990\)](#) y de [Pizarro \(1989\)](#).

¹³³ [El Tiempo](#), 10 de noviembre de 1958.

¹³⁴ [El Tiempo](#), 3 de septiembre de 1958.

Figura 6. Otto Morales Benítez (miembro de la comisión) con el “General Peligro” y el “General Santander” en La Herrera, Tolima.



Fuente: El Espectador, 1958

A su paso por este departamento, la *Investigadora* será catalogada como una comisión de Patriotas que tiene por objetivo recuperar un Tolima “martirizado y arruinado”. El traslado a las regiones más lejanas se hace en helicópteros de la Fuerza Aérea y al igual que en otros departamentos serán recibidos con calurosas bienvenidas. Los periódicos de la época relatan como en La Herrera, son recibidos por los jefes guerrilleros, por el jefe conservador, una maestra pagada por los guerrilleros, un rico ganadero y una niña de ocho años, quienes enuncian sendos discursos ratificando su voluntad de trabajo y adhiriendo al proyecto de pacificación del gobierno nacional. En este sentido, puede observarse que realmente en este departamento quienes reciben a los comisionados no son las víctimas, sino los victimarios, con los cuales se espera hacer acuerdos mínimos para enfrentar el desangre.

En esa zona, los comisionados enfrentarán también largas jornadas de trabajo, especialmente las relacionadas con las conferencias con los exguerrilleros *General Peligro*, *General Revolución*, *General Santander* y el *Mayor Mediavida*. Ante ellos, los comisionados aseguran que su misión es escucharlos, estudiar sobre el terreno los

problemas del movimiento y elevar sus demandas ante el gobierno central. En el municipio de La Dolores, la comisión será objeto de ovaciones y los directorios liberal y conservador suscriben un documento en el que se considera que el Frente Nacional contiene una política salvadora a la cual ellos son fieles. Allí los comisionados son testigos de cómo la población llama a Darío Echandía y Alberto Lleras Camargo “cumbres de moral y patriotismo”. Lo mismo les sucederá en Cunday y Villarrica, dos poblaciones separadas por años por el sectarismo político, pero donde los comisionados serán recibidos con agasajos, solicitándoles intercedan por los pobladores ante el gobierno nacional para la construcción de carreteras, escuelas y crédito para el campesino. Es crucial comprender que solamente en estos dos municipios, se estimaba “en más de cinco mil muertos mutilados y desaparecidos en las vendettas en los últimos seis años”. Precisamente, uno de los logros más significativos de la *Investigadora* tendrá lugar en esta zona, donde logran la firma de un “pacto histórico” entre los liberales de Villarrica y los conservadores de Cunday. Como parte de ese pacto, los liberales propondrán “olvidar el pasado y abandonar la venganza”¹³⁵.

En la zona de Planadas logran reunirse con el general *Mariachi*, que ejerce control sobre toda la población. A su llegada, *Mariachi* ofrece “una serenata a los comisionados, acompañado por dos tipleros, que interpretan bundes tolimenses y rancheras”¹³⁶. Del general *Mariachi* es reconocida su pasión por la música de cuerda. Uno de los periódicos de la época relata que ante los comisionados, este personaje reconoció que “*ojalá no tenga que tocar cosa distinta a ése aparato...refiriendo su pasado de combatiente*”¹³⁷. Luego de la bienvenida, los comisionados serán informados de los problemas que existen entre los habitantes de Planadas, los grupos conservadores de Casa Verde y el movimiento comunista de la Gaitania. Este jefe guerrillero expone ante ellos que una posible solución a las situaciones de litigio en la región, sería la creación del municipio

¹³⁵ *Revista Semana*, 18-24 de noviembre de 1958. Este pacto aparece documentado también en *Sánchez y Meertens (1989)* y *Sánchez (1990)*, para quienes “la pretendida declaración de paz sería en realidad una declaración de guerra, la tercera guerra del Sumapaz, una guerra sorda, que no decía su nombre, pero cuyo blanco era claramente identificable: el movimiento agrario de Juan de la Cruz Varela, inmigrante que había llegado a la zona en los años veinte, admirador de Gaitán y cooptado por el partido comunista en los años cincuenta. Varela proyectaba un perfil tan decididamente agrarista que a fines de 1959 se le habría comparado a Emiliano Zapata”.

¹³⁶ Ritmos típicos de la región.

¹³⁷ *El Tiempo*, 3 de Septiembre de 1958.

de Planadas, para evitar roces cuando los pobladores viajen a Ataco cabecera del municipio. A esto se añade la demanda de dotación de escuelas, creación de un colegio de secundaria, dotación de planta eléctrica, creación de una agencia de la Caja Agraria y cedulación, entre otras cosas. En esa reunión, delegaciones del Pole, Polecito, Casa de Zinc, San Antonio y Praga también tendrán la oportunidad de expresar sus preocupaciones por las acciones violentas de personas de Casa Verde. En suma, parecería que ante la presencia de los comisionados no se necesita conocer la verdad de lo ocurrido, sino que se viabilicen rápidamente las obras que necesitan las localidades.

Figura 7. Noticia sobre el alegre recibimiento a la Comisión por un reconocido victimario

PLANADAS. — Jesús María Oviedo "Mariachi", ofreció anoche en esta vereda tollmense donde reside una añorada serenata. Oviedo toca el violín de oidas y ayer acompañado de los tipleteros ejecutó bundes tollmenses y rancheras en honor de los miembros de la comisión que antes habían conferenciado con él por espacio de largas horas. La serenata se prolongó hasta la media noche y contó con la

Fuente: El Tiempo, 1958.

Será en este departamento donde los comisionados también logren el mayor número de micropactos entre las facciones rebeldes (véase cuadro 1). Por ejemplo, el 3 de septiembre, en la ciudad de Ibagué y en presencia del gobernador Darío Echandía, de autoridades civiles, militares y de la *Investigadora*, los representantes de Planadas y Casaverde lograrían firmar un acuerdo de paz, en el que se comprometían cesar las hostilidades entre liberales y conservadores. El acuerdo sería firmado entre *Mariachi* y Marcos Olivera. La firma de pactos también se dará en varias veredas de los municipios de Natagaima, donde la situación de la población indígena es realmente crítica. Al igual

que les ocurrió en la región del Eje Cafetero, estando en esta zona, los comisionados van a registrar con desconcierto, una masacre de 24 campesinos en la zona de Guaguarco.

Finalmente, tras el trabajo de la *Investigadora*, en este departamento, especialmente en el Sur, el gobierno de Lleras Camargo generará el mayor número de inversiones. Aquí, el plan de rehabilitación diseñado para los cinco departamentos más críticos logrará articularse de forma programática en materia de construcción de carreteras de penetración, dotación de puestos de salud, construcción de puentes que comuniquen las zonas agrícolas con los grandes centros y construcción de escuelas rurales.

2.2.3 Negociar y renegociar pactos

Pero no sólo la *Investigadora* basó toda su estrategia en la visita a los lugares más críticos de la Violencia y en la recolección de testimonios a personas afectadas. Hubo de trascender su carácter extractivo y convertirse en un espacio para propiciar ceses parciales al fuego en medio del enfrentamiento bipartidista. Y lo llevó a cabo a través de la firma de convenios, manifiestos y declaraciones. Su labor se puede de alguna manera repartir entre la recuperación de relatos, la negociación y renegociación de pactos y la construcción de alianzas entre las facciones enfrentadas. Desde luego esta tarea se correspondía también en gran parte con la apuesta que los gestores del Frente Nacional habían previsto para la *Comisión*, entre ellos los ex presidentes Darío Echandía, Alberto Lleras y Laureano Gómez para quienes de alguna forma, de lo que se trataba era de detener a toda costa la sangría. La triada investigar, recomendar y normalizar, tenía aquí su punto culmen a través de estos micropactos. Si bien en comienzo implicó que la *Investigadora* conociera lo sucedido y desnudara la magnitud de las necesidades locales, su misión de fondo era desplegar en las regiones, localidades, municipios y veredas la “operación de paz” de la cual, las élites hablaban desde la capital¹³⁸. No bastaba hablar de la paz por arriba, si esta no tenía su correlato por abajo, en las zonas afectas. En el libro *La Violencia en Colombia*, se dijo que esta *Comisión* había logrado la firma de

¹³⁸ El Espectador, Noviembre 12 de 1958.

cerca de 50 pactos entre fracciones, grupos, pueblos y caseríos (Guzmán, Fals y Umaña, 2005: 130). Estos pactos eran firmados por uno o varios guerrilleros o directorios políticos. Comprometían la palabra de los firmantes y el deber del gobierno de mantener los acuerdos. Algunos pactos iban desde un compromiso serio de los alzados al trabajo, hasta respetar la vida, honra y bienes de las personas, cooperar en el castigo a delincuentes, aceptar incondicionalmente la política de paz del gobierno y destinar de parte del gobierno central, recursos y obras de infraestructura para las zonas afectadas.

Figura 8. El cura, el abogado y el militar reunidos con los “alzados en armas” en algún lugar del Tolima, para firmar un micropacto



Fuente: El Tiempo (1958).

Algunos acuerdos fueron duraderos, aunque la gran mayoría resultaron frágiles. Incluso, en el año 63, a raíz de la publicación del segundo tomo del libro *La Violencia en Colombia*, se decía que en muchas regiones rurales existía una “paz insegura”, que se soportaba sobre la base de un “silencio cómplice”¹³⁹. En ese sentido, como ha reconocido Sánchez (1990), se trató de acuerdos de paz muy ceremoniales, donde el abrazo y la firma primaron, y donde importó mucho menos las dimensiones programáticas de lo firmado. En el papel hubo “exhortación a la paz” como titulaba un

¹³⁹ Introducción de Orlando Fals Borda al Tomo II de diciembre de 1963 (Cfr. Guzmán, Fals y Umaña, 2005: 24)

periódico de la época, pero en la práctica se trató de una “paz insegura”, producto de acuerdos que no lograron sedimentarse, precisamente porque a pesar que las élites frentenacionalistas ofrecían en el discurso una política de entendimiento, estaban muy lejos aún de entender las lógicas locales, las comunidades políticas regionales, las disputas tradicionales entre facciones y la eclosión de las guerrillas agraristas.

Figura 9. Noticia sobre la exhortación a la paz de los comandos guerrilleros en el marco de la visita de la Comisión Investigadora.

El Alto Comando Guerrillero Condena Actos Delictuosos Y Hace Fervorosa Exhortación a la Paz

<p>HERRERA, 2. — (De nuestro enviado especial Ramón Andrade). — Los comandantes máximos de los cuervos del suroeste del Tolima, en una trascendental reunión verificada aquí, suscribieron un documento desautorizando cualquier desafuero del personal de excombatientes bajo sus órdenes y haciendo un fervorosa llamamiento a la paz.</p> <p>El texto de la importante declaración es el siguiente:</p> <p>Los suscritos comandantes, ex-combatientes guerrilleros liberales del suroeste del Tolima: Leopoldo García P., Ignacio Antonio Parra Hernández, Silvestre Bermúdez T., Aristóbulo Gómez y otros combatientes del movimiento, en la presente forma enérgica para el conocimiento de los exguerrilleros auténticamente liberales:</p> <p>1. Desautorizamos cualquier acción contra la vida, honra y bienes de la ciudadanía en general, sin distinción políticas, o contra las autoridades legítimamente constituidas.</p> <p>2. Toda acción que constituya anomalía en contra los intereses de la Patria y del liberalismo, y contra el logro de la paz objetivo básico del movimiento.</p> <p>3. Los suscritos comandantes no hemos dado or-</p>	<p>den alguna que contrarie los propósitos de paz que nos animan, en ninguna zona del Tolima o del país.</p> <p>Rechazamos las aseveraciones hechas de que patrocinamos o intervinimos, en hechos que afectan el orden público y advertimos a los ex-combatientes que solamente deben atender las órdenes emanadas directamente de este comando.</p> <p>Estaremos firmemente a nuestros copartidarios a luchar por la paz, a trabajar por la recuperación de los territorios afectados por la violencia, ya que de no ser así quedarán de hecho bajo la acción de la justicia y habrán de ser sancionados la autoridad de los comandantes responsables.</p> <p>Hérrera agosto 28 de 1958. Leopoldo García "General Peligro"; Ignacio Parra "Revolucion"; secretario general; Aristóbulo Gómez "General Santander"; Silvestre Bermúdez "Mapo"; Medavida"; Gerardo Loayza "General Loayza"; Hermógenes Vargas "Vencedor"; Jesús María Oviedo "General Mariachi"; Germán Durán "Mayor Santander"; Efraim Valencia "General Arbolado"; Zoilo Oviedo "Coronel Brillante"</p>
--	---

Fuente: El Tiempo, 1958.

Esa paz insegura y poco programática, conllevó a una reactivación de bandas rivales en el Quindío, y en general en el Viejo Caldas. Así, para algunos ministros de la época, tal es el caso del de Educación, Abel Naranjo Villegas, "el Estado colombiano había fracasado en el campo y era necesario responder a una situación anormal con un procedimiento de emergencia". Entre esas situaciones normales estaba, por ejemplo, el incumplimiento de Venganza de compromisos adquiridos con la *Investigadora*. Se planteaba entonces trascender el ámbito de la rehabilitación, que había sido la principal apuesta de Lleras Camargo y de la *Investigadora* y emprender una verdadera operación de "limpieza" en la región de Quinchía (Sánchez, 1988). De hecho, nunca durante el

Frente Nacional a pesar de todo el discurso reconciliador, esta alternativa fue excluida. Lo que existió fue una tensión permanente entre la “operación de paz” de los comisionados y la “operación de limpieza” de los militares y de ciertas autoridades.

Cuadro 5. Algunos de los micropactos firmados a raíz de la intervención de la Comisión Investigadora

Lugar del pacto y fecha de firma	
Ceilán (30 de julio) (Valle del Cauca)	Manifiesto de Miranda (3 de agosto) (Cauca)
Pacto de Corinto (3 de agosto) (Cauca)	Declaración de los excombatientes del sur del Tolima 28 de agosto (Tolima)
Adhesión de los guerrilleros de Río Blanco (29 de agosto) (Tolima)	Pacto en las veredas de Copete y Totumo (Chaparral) (2 de septiembre) (Tolima)
Declaración de Ataco (2 de septiembre) (Tolima)	Declaración de Planadas y Casaverde (3 de Septiembre) (Tolima)
Declaración de Pacharco y Tamirco (Natagaima) (12 de septiembre) (Tolima)	Declaraciones de Teodoro Tacumá (Natagaima) (12 de septiembre) (Tolima)
Declaración de Jeremías Ortigoza (Dolores, Alpujarra) (13 de septiembre) (Tolima)	Pacto de Colombia - (14 de septiembre) (Huila)
Manifiesto del Valle de San Juan (25 de septiembre) (Tolima)	Declaración de Dolores y Alpujarra (28 de septiembre) (Tolima)
Declaración de Falán y Casablanca (28 de septiembre) (Tolima)	Declaración de San Andrés (30 de septiembre) (Huila)
La Gran Jornada de Rovira (2 de octubre) (Tolima)	Declaración de San Felipe Armero (8 de octubre) (Tolima)
Declaración de Fresno (Tolima)	Pacto del Norte del Cauca (18 de octubre) (Cauca)
Pacto del Líbano (10 de octubre) (Tolima)	Manifiesto de Cunday (6 de noviembre) (Tolima)
Manifiesto de Villarrica (7 de noviembre) (Tolima)	Pactos de Chaparral y San Antonio (Tolima)
Declaración de Valencia (7 de noviembre) (Tolima)	

Fuente: El Tiempo 26 de Noviembre de 1958

2.2.4 La ingeniería social tras la comisión

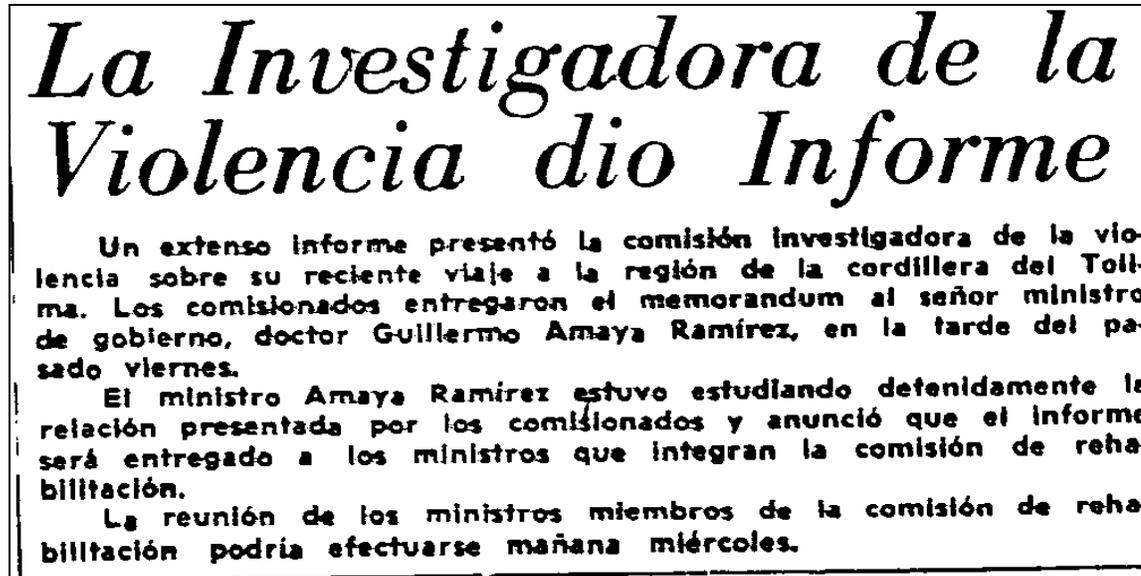
A la tensión entre “operaciones de paz” y “operaciones de limpieza” se sumó un equilibrio problemático entre la pacificación y la rehabilitación. En el fondo no era más que el conflicto declarado, entre una paz ideada y diseñada desde los políticos de centro y la planificación y rehabilitación de largo plazo que consideraban varios sectores había que llevar a cabo. La lucha era entre políticos y técnicos. Estos últimos eran del parecer que La *Violencia* exigía una gran ingeniería social y proyectos desarrollistas, a través de inversiones en las regiones afectadas; sin embargo, los defensores de la lógica pacificadora, en su mayoría militares y gobernadores, se empeñaban en considerar que el

problema era más de orden público, sobre todo porque como ya lo hicimos notar arriba, ciertas zonas del país estaban todavía a merced de los bandoleros. Nuestra hipótesis es que ninguna de estas dos visiones estaba pensando en las víctimas, sino en las zonas violentas. Se trataba, o bien de pacificar los territorios o de modernizarlos. Había que limpiar a los violentos con bala o desactivar la violencia mediante obras de cemento e infraestructura. En ninguna de las dos lecturas se contemplaba un programa integral de atención a las víctimas de la violencia.

El gobierno de Lleras Camargo, caballero conciliador en todo el sentido de la palabra, seguía insistiendo en que había que realizar una gran operación de paz, aunque ciertos ministros eran partidarios de verdaderas operaciones de limpieza social. Mientras tanto, los comisionados seguían entregando informes al gobierno de Lleras Camargo y a los ministros de su gabinete sobre la situación crítica en el occidente del departamento de Caldas, en el norte de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, enfatizando en los que consideraban los principales problemas a resolver. En algunos casos, se revelaba una grave impunidad en materia de justicia que incidía en el mantenimiento de un clima de pugnacidad. Esta impunidad estaba relacionada con las deficiencias en la aplicación de medidas penales, el pésimo estado de las cárceles y las delicadas situaciones que tenían que afrontar los jueces de instrucción. En otros casos, los problemas que se evidenciaban estaban asociados con la situación de hacinamiento de los desplazados en los cascos urbanos, el despojo de las haciendas, la revisión de títulos de propiedad. Otros informes tenían más relación con las dificultades para llevar a cabo los planes de colonización que el gobierno pensaba delinear para favorecer a las personas víctimas de la violencia. Otros informes enfatizaban más en las reformas sociales y morales. La *Investigadora* por su parte, sobre todo el ala de los curas con vocación sociológica, recomendaría avanzar en una terapéutica del dolor generado por la Violencia. Guzmán Campos, sería clave para impulsar esta labor. La misma que debería incluir abordajes en el trabajo con las víctimas, los familiares, las escuelas, el ejército, las instituciones privadas y la iglesia. Al parecer, y repito es nuestra percepción, era el único miembro de la comisión al que al parecer le preocupaba más este asunto, dado que otros de los

miembros, por ejemplo, Otto Morales Benítez, tal y como lo revelan algunas fotografías de la época, estaba más preocupado de los pactos con los victimarios.

Figura 10. Noticia sobre el informe presentado al Ministro de gobierno por la Investigadora



Fuente: El Espectador, 1958

Ahora bien, de los informes que van a generar los comisionados, van a salir varios de los insumos necesarios para emprender estrategias de reingeniería social en las regiones. En ese orden de ideas, poco más de tres meses de creada la *Comisión Investigadora*, y como respuesta a ellos y a ciertas presiones de algunos sectores políticos y sociales, el gobierno organiza en septiembre la que se conoció como *Oficina Nacional de Rehabilitación* que tendrá como labor “contener los estragos de la violencia en los cinco departamentos en los que se mantenía el estado de sitio”¹⁴⁰. A esta oficina se le sumó con el tiempo, la creación de un Comité Ministerial de Orden Público, Tribunales de Conciliación y amnistía condicionada. De todas formas, es necesario reconocer que ya desde Junio de 1958, se había solicitado la creación de esta oficina. Esta propuesta había surgido ante la incapacidad de arranque de la *Investigadora*, ya que recordemos que tardó cerca de mes y medio en lograr el pleno de sus funciones. Algunos habían propuesto que fuera cesada y que en su lugar asumiera un *Ministerio de Rehabilitación* y

¹⁴⁰Prólogo de Orlando Fals Borda de 1962 en Guzmán, Fals y Umaña (2005: 30).

Socorro que le diera facultades a los partidos para promover acciones a favor de la pacificación en las regiones más azotadas por la violencia¹⁴¹. Laureano Gómez sería uno de los que propondría la creación de este Ministerio conformado básicamente por dos ministros, liberal y conservador. Sin embargo, el gobierno de Lleras Camargo, argumentaría que con la sola *Comisión Investigadora* era más que suficiente. Esta oficina estuvo integrada por los Ministros de Gobierno, Justicia, Guerra, Salud Pública, Educación y Obras Públicas, su coordinador sería José Gómez Pinzón, un arquitecto que había sido rector de la Universidad Nacional. El actuó como asesor del presidente Lleras Camargo en temas de rehabilitación y coordinador del ente.

Si bien, la impronta de Gómez Pinzón, fue significativa para liderar esa estrategia de reingeniería social¹⁴², leído su nombramiento hoy, daría la impresión de que para la época el problema de la violencia era de infraestructura no de atención directa a los sujetos. En ese sentido, nuestra impresión es que su nombramiento ratificaba aún más el carácter mismo de las alternativas ideadas para atender el problema de la violencia: antes que nada ladrillo y cemento, luego lo demás, es decir, la atención psicosocial y los programas de reparación. De todas formas, repito, es la lectura que podemos dar desde el hoy, dado que para su época, su trayectoria como ingeniero, iba a dejar huella grande en la proyección que se hacía de este organismo y de los ideales frentenacionalistas en las regiones. Así, los planes del gobierno para las zonas afectadas incluían la aprobación de una partida de 25 millones de pesos, suma que se destinará para cinco frentes: educación, salud, crédito agrario, obras públicas y justicia (véase cuadro 7). Estos frentes se consideraban los más críticos. Al parecer, en el año 58 se habrían destinado, cerca de 40 millones, de los cuales 18.5 millones correspondieron al gobierno nacional y el resto a fondos de los gobiernos municipales y departamento y otras entidades oficiales (véase cuadro 6)¹⁴³. En el año 59 el plan de inversiones sería de más de 70 millones de pesos. Estos planes incluían designación de abogados de pobres en las

¹⁴¹ Espectador, 14 de Junio de 1958.

¹⁴² En dos entrevistas que sostuve en Bogotá, se comentó que sobre este personaje siempre se tejió un manto de duda y de sospecha. Según se me dijo, la logia masónica donde militó y alcanzó un alto grado, era una de las alas más conservadoras de este grupo, conocida como la “mano negra”, con un claro matiz anti-comunista. A esa logia se le adjudicaban tareas de “limpieza social” en el país.

¹⁴³ El Tiempo, 23 de Octubre de 1958.

regiones azotadas, asistir de oficio a los sindicatos y facilitar la expedición de títulos de propiedad. Además, estos recursos se distribuirían entre los cinco departamentos bajo estado de sitio, tal y como se puede observar en el cuadro 6. El plan de esta comisión comprendió medidas de emergencia y algunas pocas medidas de rehabilitación. Leído hoy el impacto de esta oficina, podríamos decir que su significado radicó no tanto en los resultados que podía mostrar sino en el cúmulo de problemas que contribuyó a revelar (Sánchez, 1988).

Cuadro 6. Presupuesto por regiones destinado para labores de rehabilitación (1958-1959)

Departamentos	Departamento 1958 (millones de pesos colombianos)	1959 (millones de pesos colombianos)
Tolima	5	20
Valle	4	16
Caldas	4	16
Cauca	3	10
Huila	2.5	10
Total	18.5	72

Fuente: Acta No. 4 de la Oficina Nacional de Rehabilitación, septiembre 18 de 1958 (Citado en Sánchez, 1988)

Cuadro 7. Presupuesto por Rubros (1958)

Rubro	Valor rubro (millones de pesos colombianos)
Obras Públicas (Carreteras, pistas de aterrizaje)	10.500.000
Educación (Alfabetización, escuelas vocacionales agrícolas y escuelas)	2.000.000
Salud (Puestos de salud, unidades móviles, instituciones asistenciales)	4.000.000
Justicia (Cárceles, casas de rehabilitación infantil).	3.500.000
Caja Agraria (Créditos en zonas afectadas)	5.000.000
Total	25.000.000

Fuente: Acta No. 2 de la Oficina Nacional de Rehabilitación, septiembre 11 de 1958 (Citado en Sánchez, 1988)

Esta *Oficina de Rehabilitación*, como argumenta Sánchez (1988), dio siempre la impresión de ir descubriendo a su paso el objeto sobre el cual trabajar, en medio de una violencia que no llegó nunca a su fin por más que se expusiera a viva voz su terminación, en varios sectores del gobierno. De hecho si comparamos lo que sucede en la realidad hoy con la denominada *Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación*

(*CNRR*), la historia parece de nuevo repetirse de forma tragicómica, es decir, asistimos de nuevo a una experiencia que hace y rehace todo en el camino, precisamente por las dificultades mismas de lograr una transición de la guerra a la paz. De hecho, para su momento, no fue solo la Oficina, sino en sí toda la estrategia de rehabilitación frentenacionalista, la que tuvo fuertes opositores a lo largo de su aplicación. El gobierno, de todas formas, defendería esta política como parte de la acción estatal necesaria que habría de emprenderse en dos vías: el de la asistencia social a los damnificados de la Violencia (las víctimas no eran sujetos vulnerados por entonces, sino elementos damnificados por el “ciclón de la guerra”) y el de la reincorporación de los excombatientes a la vida ciudadana y al trabajo productivo. Aún así las críticas provenían de aquellos que veían que con ella se podían favorecer en ciertas zonas aún no pacificadas, a los propios agentes de la *Violencia*, premiando a los infractores de la ley no sólo con la suspensión de las acciones penales (amnistía) sino con préstamos y adjudicación de tierras; a esto se sumarían las prácticas gamonales porque los recursos destinados a las regiones debían ser manejados por las autoridades municipales. De manera interesante, en esa época, como puede repetirse hoy frente a los beneficios penales para los desmovilizados del paramilitarismo, se cuestionó mucho la adjudicación de amnistías, la entrega de tierras y préstamos a excombatientes desmovilizados como *Charronegro*, Pedro Brincos, Teófilo Rojas alias *Chispas*, y al bandolero Octavio Isaza Rendón, alias *El mico*. Los victimarios eran el primer frente de atención, las víctimas quedaban en segundo lugar.

La *Comisión Investigadora* finalizaría labores en enero del año 59 por decisión del gobierno de Lleras Camargo. Tres serían los argumentos que en su momento se esgrimieron para colocarle fin: a. que ya había cumplido su cometido; b. que había dejado de ser necesaria; y c. que se advertía una ostensible fatiga de los miembros que la integraban. Sin embargo, en el mismo decreto de disolución quedó expreso que se designara por un período adicional a Germán Guzmán como *Coordinador de Paz* para que continuara en la meritoria labor de propiciar la reconciliación. A nuestro juicio, esta coordinación será una de las antecesoras de las Consejerías de Paz tan comunes a partir de los años ochenta en Colombia. Esta labor la continuaría el cura Guzmán , en enlace

directo con la *Oficina de Rehabilitación* que seguiría funcionando hasta diciembre de 1960. Según lo ha reconocido Sánchez (1988) las discusiones sobre la legalidad, la institucionalidad o la viabilidad de los planes de rehabilitación hubieran podido evitarse o atenuarse si no hubiera existido tanto afán en suprimir, en lugar de reestructurar la *Investigadora*, que había actuado “hombro a hombro con la de Rehabilitación”. Su final fue más bien lánguido y de absoluto desgaste para los comisionados y para las zonas afectadas. Uno de los argumentos que se planteó para su final sería precisamente la duplicación de funciones entre los distintos ministerios y las de la Oficina. Sin embargo, había un tema más de fondo para su terminación y era que a medida que avanzaba el Frente Nacional se reemplazaba el ideal de rehabilitación por una política de represión militar, en aquellos territorios donde la *Violencia* había vuelto a recrudecerse, y donde además se habían generado el mayor número de inversiones, como fue el caso del departamento del Tolima. Según Sánchez (1988), a esto también contribuyó la incongruencia entre “diagnóstico y soluciones”, puesto que la Rehabilitación había sido diseñada como un programa para “después” de la *Violencia*, y la *Violencia*, en verdad, no había terminado. Para el historiador Fernán González, en el fondo

*“las reformas del Frente Nacional, especialmente las de estrategias de rehabilitación, no funcionaron en las zonas donde no estaba establecido el bipartidismo. Las reformas serían hechas donde no se necesitaban realmente. Ellas debían hacerse donde estaban las guerrillas comunistas y allá no llegaron porque no había estructura bipartidista y el comunismo era el gran mal para el bipartidismo”*¹⁴⁴.

La rehabilitación quedaría subordinada bajo esa lógica a los andamiajes institucionales tradicionales, pero sobre todo a los pareceres de los gobiernos locales y a las redes clientelares que canalizarían entonces los recursos. Mientras desde la capital se esgrimía un discurso de rehabilitación y de apoyo a los damnificados, las zonas golpeadas por la violencia, los sujetos vulnerados y las condiciones de precariedad institucional eran

¹⁴⁴Entrevista con Fernán González, julio de 2010, realizada en Bogotá.

abandonas a su suerte y con ello la oportunidad histórica que una estrategia de largo alcance y programática lograra darse efectivamente donde más se necesitaba.

A la larga, la precariedad e inconsistencia de este ejercicio de rehabilitación económica y social de las áreas afectadas por la violencia, implicó el renacer de la lucha armada. Algo que también reconocería el mismo General Valencia Tovar quién tuvo a su cargo las operaciones militares en las que pereció el cura revolucionario Camilo Torres (1966) y del cual ya mencionamos que hizo parte de la línea del militarismo desarrollista. Para él, hubo principalmente dos razones, una militar, al no entender el establecimiento la lógica de las guerrillas, que ya no serían sólo escuadras de bandoleros, y otra, la razón política, la incapacidad para acometer reformas estructurales y quitarle “el agua al pez”. Con esas dos razones, según lo comentaba el general en el *periódico El Tiempo*, en el año 96, comenzó el gobierno a perder la guerra hace más de treinta años¹⁴⁵. Para Sánchez (2000), la no resolución de la vieja violencia, nos metería así, casi sin que lo advirtiéramos, en las violencias actuales.

2.2.5 Las expectativas políticas y las lecturas sociales de la prensa escrita

Diversas fueron las expectativas políticas y las lecturas sociales que desencadenó la *Investigadora* en su momento. La prensa escrita, en general buena aliada de la política de concertación elitista, fue la principal plataforma para dar cuenta de su lógica y del quehacer diario de la labor de esta empresa que durante los ocho meses de funcionamiento replicó y renegoció los imaginarios frentenacionalistas. Los periódicos de la época, harían las veces de medio de divulgación y procesamiento de los hallazgos y dificultades de la comisión, ante la imposibilidad de tener un informe público.

Lo que conocemos hoy de esa comisión es precisamente por la labor de divulgación que hizo este medio. Sin embargo, es importante reconocer que cuando hablamos de prensa escrita nos referimos a los periódicos de los partidos oficiales, liberales y conservadores

¹⁴⁵ *El Tiempo*, 13 de septiembre de 1996. Cfr. Sánchez (2002).

que expresan y legitiman en el país, posturas partidistas. La prensa independiente era casi inexistente o proscrita como lo será por ejemplo, *Voz Democrática* de los comunistas, que luego pasaría a ser *Voz Proletaria*¹⁴⁶. Son órganos que circulan en cada una de las ciudades grandes del país, difunden y diseminan la cosmovisión política de entonces. Además, si bien para los años veinte y quizá hasta los cuarenta del siglo XX, la prensa estuvo limitada geográfica y socialmente, concentrada en ciertos espacios y sujetos, en un país analfabeta, pobre y con deficiencias en las vías de comunicación, como ha mostrado Arias (2007), para los años cincuenta, la circulación, aunque restringida, ya no sólo se limita a los pequeños centros urbanos (Rodríguez, 2008: 63). Esto probablemente hizo que se conociera más del quehacer de lo que hacía la *Comisión*. Sin embargo, también es posible que la información se haya concentrado en las capitales de los departamentos, en una sociedad todavía sitiada y controlada bajo el imaginario del orden público turbado. Como ha sugerido Rodríguez, es probable que para mediados del siglo XX, pese a una mayor circulación, “*no todos tengan acceso a ella de la misma forma, hay quienes pueden escribir y otros que no pueden leer, circula además con lentitud y se demora en llegar a los pueblos retirados, además se encuentra en asedio constante por la censura*” (Rodríguez, 2008: 64).

Ahora bien, a falta de la voz viva de lo que significó para la mayoría de las personas esta experiencia, contamos hoy con lo que los comisionados dijeron de ella y que a su vez la prensa consignó¹⁴⁷. Así por ejemplo para Absalón Fernández de Soto el representante liberal, la labor de la *Investigadora*, si bien no podía ser catalogada como de “*invención de medidas contra la violencia*”, de su presencia se derivó para las zonas afectadas, que “*las cosas tendieran al alivio*”, sobre todo porque a través de ella se había logrado romper el “*mutismo de la gente*” y que los campesinos hablaran, “*era ya suficiente*

¹⁴⁶Fue creado en el año 1957 y luego como *Voz Proletaria* reaparecería en el 64, cuando estuvo “proscrito” por unos meses y por eso tiene que cambiar de nombre. Se intentó consultar para esta tesis, pero se encontró que no había archivos digitales del mismo, sino desde el 61 y sólo del mes de abril. Estaba de junio del año 63 en adelante, pero no correspondía con el período de búsqueda que delimitamos.

¹⁴⁷Al menos en los diarios revisados, no se esgrimieron posiciones críticas de sus miembros. Lo que podría estar relacionado o bien con el “control” político que ejercía el ejecutivo sobre las opiniones de estos comisionados, o bien con el aparente convencimiento de sus miembros de los principios legisladores de la política frentenacionalista. Algunas visiones críticas vendrán años después de algunos de sus miembros como el sacerdote Guzmán Campos. Es posible que una lectura de diarios locales, que no se hizo en esta tesis por falta de recursos, podría arrojar una aproximación distinta al asunto.

demostración de que nadie como ellos anhelaban tanto la paz”¹⁴⁸. Para Otto Morales Benítez, dado que la dimensión de la *Violencia* era insospechable y lo que se sabía antes del Frente Nacional, era producto de una “visión fragmentaria del problema”, la labor de la *Investigadora* sería esencial para el “*acopio de material, para su organización y para la escucha de diversos sectores*”. La *Comisión* habría en ese sentido, reunido a lo largo de sus tareas de operación “*fuentes de información precisas, con la colaboración de los directorios políticos, los sacerdotes y la población*”¹⁴⁹. Su papel además, habría contribuido a despertar el “*interés cívico y patriótico*” del país, asegurando su “*reintegración*” y “*recuperación*” moral, económica y educativa.

Para los sacerdotes Germán Guzmán Campos y Fabio Martínez, la *Investigadora* habría trascendido su labor de investigación, provocando un “*verdadero fervor patriótico tras largas y agotadoras jornadas de trabajo*”. Desde su óptica, la comisión habría logrado un “*cristiano perdón y un patriótico entendimiento*” y casi que su labor habría sido la de “*recristianizar*” el territorio nacional. En esa medida la labor emprendida, habría devenido en una “*tarea misionera*”, sin reparar en tiempo, lugares o gentes. En la versión de estos sacerdotes, a través de la *Investigadora* se habrían pedagogizado los ideales frentenacionalistas, se habría avanzado en la aplicación de una terapéutica específica para los males de la violencia y sobre todo para “*el pueblo víctima*”. Además, si bien la campaña de “*paz no se habría ganado aún, [por medio de la comisión] se avizoraban signos inequívocos que se marcha en su consecución*”¹⁵⁰. A las visiones de los comisionados se sumarían un sinnúmero de calificativos que exaltaban sus cualidades desde la prensa escrita y que contribuirían desde luego a reforzar sus autopercepciones. Se habló de su “*imparcialidad*”, “*serenidad*”, “*espíritu de concordia*”, “*devoción*”, “*generosidad de espíritu*”, “*abnegación en el trabajo*” y “*espíritu corajudo*”. Se les catalogó como “*la síntesis de lo mejor de los colombianos, capaces de meterse al barro, soportar incomodidades y exponer sus vidas*”¹⁵¹. Incluso,

¹⁴⁸El Tiempo 22 de julio de 1958.

¹⁴⁹El Tiempo, 28 de Julio de 1958.

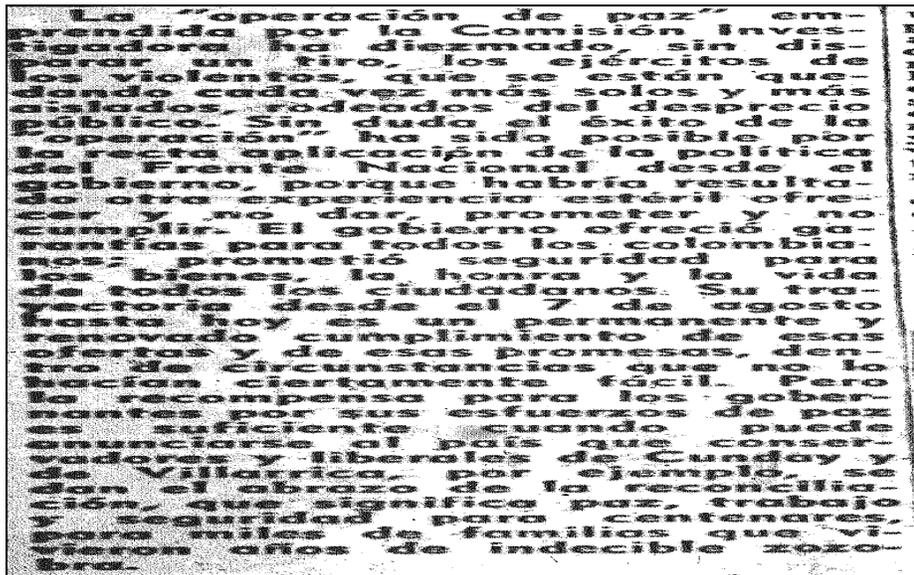
¹⁵⁰El Tiempo, 26 de Noviembre de 1958.

¹⁵¹El Tiempo, 27 de Agosto y 21 de Octubre de 1958.

uno de los diarios más críticos del gobierno, *La República*, reconocería su laboriosidad, paciencia y eficacia y afirmaría que “*nunca tantos debieron tanto a tan pocos*”¹⁵².

Pero no sólo las lecturas y expectativas se centraron en las cualidades de los miembros, también la prensa escrita contribuyó a reforzar distintas imágenes sobre la naturaleza, alcances y efectos a mediano plazo de la *Investigadora*, así como sobre los obstáculos que debió vencer en el camino. Quizá la imagen más poderosa que se tejió sobre la Comisión fue que ella representaba la “gran operación de paz”, que había iniciado el Frente Nacional a escala nacional y que en su trabajo de campo, reforzaría en las zonas donde el desangre se había sentido con más crudeza. Esta operación de paz, se decía, habría contribuido como nunca antes, a “*diezmar a los violentos sin dispar un solo tiro, provocando en aquellos que se han rehusado a la política de pacificación, al desprecio público*”¹⁵³. Así, el éxito de esa operación era descifrado en términos de una política que como la del Frente Nacional, acogía a los que la apoyaban y adherían a sus postulados, pero que también podía adjudicarse el derecho a la determinación del desprecio, el ostracismo e incluso la aniquilación sobre los que renegaban de ella o la rechazaban.

Figura 11. Fragmento del editorial “La operación de Paz”



Fuente: El Espectador, Noviembre de 1958

¹⁵² La República, 12 de Septiembre de 1958 (Citado en Guzmán, Fals y Umaña, 2005: 130).

¹⁵³ El Espectador, editorial “Operación de Paz”, 12 de noviembre de 1958

De ese imaginario derivaron todos los demás, que serían comunes para su momento. Por ejemplo, considerar que la *Investigadora* era un “*mecanismo revolucionario contra la violencia*”¹⁵⁴, “*encarnación de la voluntad pacificadora y restauradora del Frente Nacional*”, o espacio para “*lograr un compás de confianza con los grupos armados*”¹⁵⁵. Se leyó su propósito como parte de una “*gran cruzada contra la violencia*” o como expresión de un mecanismo profiláctico, de “*limpieza del cáncer del sectarismo*”¹⁵⁶. En relación con sus alcances, se asumió que la *Investigadora* redundaría en una “*gran campaña de fomento económico que traería alguna compensación para las regiones más desprotegidas*”¹⁵⁷ y como una “*planta democrática que retoñaría en el gigantesco cadáver de la locura*”¹⁵⁸. Finalmente, sobre sus efectos se dijo, que la comisión habría logrado una “*pacificación casi completa del territorio nacional*” y proporcionado, junto con el Frente Nacional, “*un sentido y una práctica de justicia nunca antes vistos*”. Si bien, estas lecturas en la mayoría de los casos resultaron esperanzadoras, también emergieron en su momento algunos de los obstáculos a vencer en su tarea. Así se consideró que ella podría verse limitada por los recelos partidistas frente a un gobierno de unidad nacional, sobre todo los provenientes de “*la propaganda derivada de la tenaza liberal – laureanista buena excusa para aumentar los recelos y disfrazar la violencia con pretextos políticos*”¹⁵⁹.

2.3 Los marcos de temporalización

En los anteriores acápites hemos intentando esbozar algunos de los elementos coyunturales y de clima operativo más relevantes frente al trabajo, el accionar y a la artesanía de la *Investigadora*. En lo que sigue de este nuevo apartado, trataremos de esbozar cómo desde la labor que acometió, se dio a la tarea de construir una génesis del pasado, generar un diagnóstico del presente y posicionar ciertos imaginarios de futuro

¹⁵⁴Revista Semana 31 de mayo a 6 de junio de 1958

¹⁵⁵Revista Semana 9 al 15 de diciembre de 1958

¹⁵⁶El Espectador, editorial “*Al fondo de la violencia*”, 29 de mayo de 1958.

¹⁵⁷El Espectador, Agosto 19 de 1958.

¹⁵⁸Revista Semana, 9 al 15 de diciembre de 1958.

¹⁵⁹El Espectador, editorial, “*Esperanzas y obstáculos para la Paz*”, 11 de agosto de 1958.

en el marco de una *Violencia* aparentemente controlada por la política de concertación y sus estrategias de pacificación y rehabilitación.

2.3.1 No hay comienzo claramente establecido para la *Violencia*

En un escenario de transformaciones radicales producido por ese “*Gran Sujeto Histórico, trascendente, exterior a los actores*” que representa la *Violencia*, según la interesante definición de Sánchez (2009c), no es extraño que distintos sectores sociales e institucionales decidan acometer la tarea de afrontar y tramitar institucionalmente algunas de sus secuelas. En el anterior apartado, observamos que así lo hacen el *Frente Nacional y la Investigadora*. Y para hacerlo, asumen una especie de “consenso mínimo” y es que están frente a una problemática que genera u opera una transformación radical en el orden de las representaciones sociales y políticas nacionales, transformación ya descrita en su anatomía básica. Aún así, la cuestión de fondo con la que han de lidiar es mucho más difícil de consensuar: ¿cuál es la génesis de la *Violencia*? Y es difícil de consensuar porque no existe algo así como “una génesis común diseminada”, o una “narrativa genética compacta” sobre ese período. De hecho, este tema sigue siendo hasta el día de hoy, sino el principal, sino uno de los más decisivos en la disputa del conflicto colombiano, como se verá en el último capítulo.

Ahora bien, al tratar de comprender retrospectivamente este periodo de nuestro pasado reciente, tendemos a encontrarnos con la existencia de narrativas muy disímiles unas de otras, aunque algunas veces unas sean más complementarias entre sí. Algunas de estas narrativas pueden estar diseminadas en aquellos a los que la génesis, en cuanto principio u origen, les tiene sin cuidado y apelan más bien a la búsqueda de explicaciones condensadoras de “procesos y lógicas” o a “contextos explicativos”.¹⁶⁰ Otras son movilizadas por diversos sujetos para los cuales el “origen” es decisivo y elemental, sobre todo en términos de cálculo político o de convicciones ideológicas. Lo llamativo aquí es que unos y otros, revelan que esta guerra, durable más allá de lo razonable, lo es

¹⁶⁰Según Sául Franco, el contexto explicativo “busca establecer relaciones, condiciones de posibilidad y explicaciones lógicas, sin desvelarse por la causalidad ni pretenderla sustituirla” (Franco, 2009:388).

también de narrativas, o como ya dijimos en el primer capítulo, expresión de un “duelo inacabado de relatos”. Detengamonos un momento en este asunto, para examinar cómo algunos estudiosos del período, construyen sus propias “génesis explicativas” del período.

Para Paul Oquist (1978) la *Violencia* se explica por un “derrumbe parcial del Estado”, lo cual ocurre debido al conflicto entre las élites de las dos subculturas políticas en las que se divide la clase dominante colombiana de entonces. Al llegar al climax este conflicto, el Estado colapsa en su funcionamiento. Así, en un Estado débil, la violencia política termina siendo la regla, fracturando la legitimidad y colonizando distintas escenas de la vida social. A partir de ese momento, ella asume diferentes características según las condiciones sociales y económicas de las regiones donde tiene lugar. Por su parte, el historiador Eric Hobsbawm (1985), interesado en el tema del bandolerismo, lee en la *Violencia* nacional una mezcla de varias cosas más o menos inéditas en la historia del mundo, entre ellas “*guerra civil, acciones guerrilleras, bandidaje y simples matanzas no menos catastróficas por ser virtualmente desconocidas en el mundo exterior*”. De esa lectura, se derivan connotaciones significativas para el análisis del país de entonces, por ejemplo, que la *Violencia* es básicamente “*una revolución social frustrada*”, o una especie de “*parto de nuevo mundo pronto a surgir, pero que no logra el nacimiento, o [...] de un viejo sistema que no logra por el momento hallar una forma de estabilidad burguesa*” (Hobsbawm, 2009: 69).

Para Sánchez (1990), quien complementa la visión del historiador británico, la *Violencia* puede ser leída como “*una guerra entre las clases dominantes y el movimiento popular*”, cuya característica especial, es la de estar *dominada, para ciertos períodos y regiones, por expresiones residuales próximas al vandalismo y al bandidismo, cuyos blancos y víctimas difícilmente se pueden adscribir a unos sectores sociales o partidistas con exclusión de otros*”. Por su parte, Malcolm Deas, es del parecer que para “*explicar la Violencia, hay que entrar en la más rigurosa descripción de todas sus etapas y de la tipología que adquiere para cada lugar y para cada época*” (2009: 85). Para Pécaut, sin duda, un elemento común a la *Violencia* es la división partidista, pero

aún así esta “*reviste formas variables y no puede ser considerada como evidente*” (2009: 229). Finalmente para Carlos Miguel Ortíz, “*la Violencia no es más que la modalidad que asume, en un período determinado, la articulación y ordenamiento de la vida social, y por ende la modalidad que asume la historia del Estado en esta etapa*” (2009: 240).

A partir de dichas lecturas de expertos, que aunque seleccionadas al azar son parte de las narrativas más canónicas sobre el período, bien se puede observar que lo común a todas ellas es que la *Violencia* no es simplemente un episodio en el tiempo y que tampoco puede ser enmarcada en la búsqueda de un “origen” único. Es básicamente un “proceso de procesos”, irregular en sus manifestaciones y desequilibrante en sus lógicas y actores. Es también una problemática que no se reduce a ser confinada como una fotografía en el tiempo, siendo más bien, un conjunto de etapas y lógicas con improntas regionales y nacionales. Además es un asunto que escapa a una sola explicación causalista – continuista y que debe ser examinado por los estudiosos, en sus múltiples discontinuidades, escenarios y tiempos.

Trasladémonos ahora al pensamiento de las élites políticas y técnicas del momento. A diferencia de los intelectuales, parece existir en ellas una gran disputa por la representación de lo que ocurrió, es decir, por cómo debe nombrarse lo sucedido y cuál sería la mejor forma de solución. La principal discrepancia radica en que para algunos, ese período representa una guerra civil, al punto de hablarse de genocidio¹⁶¹, mientras otros se inclinan por considerar que solo ha sido una desafortunada “ola de criminalidad”. Y esto no es simplemente un asunto de semántica respecto al origen, sino más bien una cuestión de “utilidad política” o de “cálculo estratégico de la situación”, dado que asumir una cosa u otra, redundaría en el tipo de soluciones barajadas para afrontar lo ocurrido. Si se trata de una guerra civil, el problema demanda mecanismos de persuasión, conciliación y posiblemente de amnistía. Si se acepta lo segundo, existen no pocos defensores de los dispositivos de represión y de las lógicas de excepcionalidad (Sánchez, 1988). Para los primeros lo mejor sería la ingeniería social y la pacificación

¹⁶¹ Revista Semana del 9 al 15 de diciembre de 1958.

desarrollista, para los segundos la única solución es una “paz violenta” y una persecución sin cuartel a los violentos. Aunque la pugna entre esas dos visiones no será tan fácilmente zanjada durante el Frente Nacional, la balanza terminará más inclinada por lo segundo.

Pero ¿por qué es importante mencionar lo anterior? Nuestra percepción aquí es que tanto de la lectura de los expertos interesados por el período, como de la representación emanada de los políticos y técnicos del momento, emerge una gran disputa no sólo alrededor de cómo se explica la violencia, sino de aquello que la detona. De hecho, Pécaut entiende que al día de hoy este detonante del período es incierto, dado que *“tampoco [existe] un acontecimiento que constituya su desenlace”* (2009: 229). En ese orden de ideas, lo que se tiene de ese período, por más delimitaciones analíticas y cronológicas que se hagan - y ya intentamos algo de ello acudiendo a otro experto como Marco Palacios al inicio de este capítulo – es un buen número de posibles inicios, todos ellos muy parciales, todos ellos relativamente editados y manufacturados también por condiciones experienciales y subjetividades políticas. Así, para algunos podría ser 1930, para otros 1945, 1946, 1947, para muchos más, 1948. Todos ellos serían *“años en los que según lo que el analista decida observar, bien puede encontrar un elemento que desata la Violencia”* (Rodríguez, 2008: 39).

Ahora bien, una expresión de cómo se articula cierta génesis de lo sucedido en ese período, ha quedado condensado en la literatura autobiográfica y novelesca de la época, especialmente la que se escribió a partir de 1948. En esa literatura, la génesis parece estar conectada ya no a un asunto de corte explicativo procesual o de cálculo estratégico sino de convicciones ideológicas. De ello da muestra, por ejemplo, Saúl Fajardo, guerrillero liberal, en sus *“Memorias de un pobre Diablo”* (s.f), quien destaca cómo en su corazón de joven, se abrió una herida tremenda y profunda *“el día que mataron a Gaitán”*, y a partir de allí la lucha fue a muerte con los conservadores y sus atropellos. Él, como muchos otros, cuyas ego-historias están atravesadas por la guerra, encuentra la génesis explicativa de este período en el asesinato del líder. El fatum que lo lleva a ser catalogado por el gobierno como un bandolero estará para siempre marcado por ese

acontecimiento fundacional.

Aparece también en la versión del cura guerrillero Blandón Berrío (1954), la “gangrena de la Violencia”, si bien habría operado a partir del 9 de abril de 1948, ella remite más atrás en la historia cuando en los años treinta, se desplegaron las teorías de la denominada *Revolución en marcha* del gobierno liberal de Alfonso López Michelsen. Con ello se allanó el camino a las reivindicaciones proletarias que calaron rápidamente en la medula social, creando el germen del comunismo. A ello se suma la versión del policía conservador Hilarión Sánchez, en su novela *Las balas de la Ley* (1953), para quien la *Violencia* inicia en los años treinta durante la liberalización de los departamentos de Boyacá y Santanderes¹⁶². Estos acontecimientos quedarían fijados en la memoria popular, provocando el deseo revanchista de los conservadores sobre los liberales.

Incluso, el mismo libro *La Violencia en Colombia*, que como se verá luego, supone un tránsito de una versión novelada del período a un esquema más descriptivo y menos partidista, sitúa su propio mojón genético en los años treinta, pero concentrándose más en los episodios que se desencadenan a finales de los cuarenta. Versión ésta que no escapará a los críticos del libro, quienes la consideran igual de parcializada que otras lecturas. Así, el sacerdote jesuita Miguel Ángel González, quien realiza una reseña del libro en 1962, arguye en su momento, que mientras los autores le dedican unas tres páginas a los sucesos de los años 30, a los hechos de violencia a partir de 1946 les concederán unas 232 páginas. Ello más allá de ser un simple dato, lo que demuestra, según este cura, es una visión absolutamente tendenciosa en sus autores que son fieles a los ideales liberales.

Nos encontramos entonces de cara a un período donde no sólo parece un imposible empírico situar un mojón de inicio, sino también frente a una sobreabundancia de versiones de los hechos, de momentos detonantes y lógicas explicativas. Así, para los

¹⁶²Un buen acercamiento a esta literatura bipartidista en cabeza de Hilarión Sánchez y Saúl Fajardo, se encuentra en [Delgado \(2005\)](#). Sobre la violencia en Boyacá se recomienda [Guerrero \(1991\)](#).

expertos que se interesan por la comprensión del período, más que el origen y la causa inicial, lo que importa es el análisis del proceso y de sus lógicas contextuales y diferenciadas. Para los políticos de la época, es claro que el origen sí importa porque de ello va a depender la solución que se adopte. Para los autores de las biografías y las novelas del período, el origen va a estar subordinado siempre al bando desde donde se escriba (liberal o conservador) o de la postura analítica o visceral que se asuma. Pareciera entonces que frente al tema, una de las grandes dificultades que enfrenta el analista y el profano, es precisamente tratar de establecer, más allá de las ediciones y manufacturaciones políticas y académicas que se hagan, una narrativa genética compacta del período. Dificultad que de nuevo estará presente en las preocupaciones de la subcomisión de Memoria Histórica, y que analizaremos luego.

Ahora bien, en un intento de respuesta a esa dificultad, algunos son del parecer que la existencia de muchas versiones sobre lo sucedido, obedece a que no hay para el período una “única memoria”. En ese sentido, como ha sostenido Rodríguez (2008: 38) cada “*experiencia [del período] es en sí misma una memoria... no hay memoria de la Violencia, hay memorias de la misma*”. De ello puede colegirse entonces que no hay una sola génesis, sino varias génesis enmarcadas en dichas memorias. Respecto a lo anterior, Daniel Pécaut (2002a; 2002d) ha sugerido, algo que ya más o menos esbozamos en el primer capítulo, que este período se sustrae a un relato global precisamente porque hay demasiados hechos que son susceptibles de ser recuperados. A ello se añade que también existe en quien lo narra, la manía de adicionar hechos constantemente en el ejercicio de narración, de completar lo incompleto, y de volver sobre lo mismo.

Pero más allá de esta discusión que podría tornarse interminable si decidieramos profundizar en ella, lo que nos interesa interrogar aquí es ¿cuál fue el camino asumido por la *Investigadora* frente a la génesis del pasado de la *Violencia*? Nuestra percepción, a partir de lo que ya hemos mostrado en el apartado anterior, es que a pesar que en el nombre mismo de la comisión estaba contenida una tarea genética fundamental “*estudiar las causas o situaciones presentes de la violencia*”, enfrentar este asunto generó un gran dilema en su momento, a quienes hicieron parte de la experiencia y a quienes la

movilizaron como dispositivo de trámite. Este dilema giró básicamente entre: investigar y escudriñar el pasado o simplemente recomendar medidas para la superación de lo ocurrido.

Si se trata exclusivamente de lo primero, los comisionados saben, al igual que sus críticos, que su misión es servir de escenario público para revelar y comprender las dimensiones del horror de lo sucedido, adjudicar responsabilidades y nombrar situaciones detonantes, en una época en la que poco a poco ciertos olvidos y silencios, iban ganando cada vez más terreno. Y por supuesto, frente a los cuales no pocos defensores del Frente Nacional apuestan con denuedo. Si por el contrario se persigue únicamente lo segundo, la *Comisión* antes que fungir como la gran anatomista de la violencia debe ser un escenario profiláctico, de revelaciones higiénicas, controladas por los partidos, donde el pacto histórico debía concentrarse en olvidar el pasado y abandonar la venganza y proyectar el futuro a partir de un “borrón y cuenta nueva”. Así, la *Comisión* no tiene más finalidad que buscarle un fin razonable a las situaciones presentes y lanzar el país hacia delante, pero no escudriñar en ¿quién comenzó la violencia?, o ¿quien la detonó?

Respecto al desenlace del dilema, creemos que la posición adoptada por la *Comisión* fue la de funcionar, con cierto equilibrio precario, entre esos dos marcos de lectura del pasado. Es decir, la comisión reveló cosas hasta donde los límites del pacto se lo permitió y con ello, manufacturó el presente lo más que se pudo generando estrategias de superación cuando las condiciones así lo ameritaron. Y este equilibrio precario condujo al final a que la *Investigadora*, pudiendo revelar o hacer mucho más de lo que podía no lo hiciera, o que la labor acometida, interesante desde todo punto de vista para la época en la que funcionó, se llevara a cabo de forma muy precavida sobre todo con un sector importante de las élites. Aún así, el equilibrio precario obedecía también a que la Comisión funcionaba en zonas donde la *Violencia* aún estaba viva y donde los actores y factores detonantes estaban latentes.

Así, al emprender una tarea etnográfico – terapéutica tras salir de los escritorios de

Bogotá, los comisionados fueron dándose cuenta que en las regiones más afectadas, por ejemplo, los departamentos del Valle del Cauca, del Tolima y del Eje cafetero, había demasiadas cosas enrevesadas y mezcladas, limitando una narrativa genética. Por ejemplo, no todos los actores de la *Violencia* que ellos habían detectado en sus correrías, participaban en los mismos escenarios visitados. Unas veces aparecían chulavitas, otras pájaros, y otras guerrillas de autodefensa como gestores y artífices del desangre. ¿A quién o quienes entre ellos, adjudicar plenamente lo sucedido? ¿Cómo saber que la lucha de unos era más o menos legítima que la de otros? De igual forma, la *Investigadora* revelaba que estos actores no actuaban al mismo tiempo, siguiendo el mismo patrón de victimización en las mismas zonas o bajo los mismos intereses. En algunos casos, a los alzados en armas o a los bandoleros, los movilizaba la ideología, en otros el zaqueo, o en no pocos casos una mezcla de intereses políticos, económicos, morales y sociales. Por doquier se encontraban perpetradores que se reclamaban como víctimas, o víctimas que decidían asumir la venganza por sus propias manos. Por si fuera poco, su trabajo de campo, fue dando cuenta que la *Violencia* tampoco se desataba al mismo tiempo y por los mismos motivos en todas las partes, más allá de que se reafirmara permanentemente en los relatos de viudas, victimarios o amnistiados, dependiendo del bando político, la idea de que estaba arrancaba con el asesinato de Gaitán en el año 48 o detonaba en los años treinta con la violencia liberal.

La salida de la *Investigadora* será entonces considerar, simple y llanamente, que “no hay un comienzo claramente definido en la *Violencia*”. Decir lo contrario, le hubiera ocasionado demasiado problemas a los comisionados, y de paso habría conllevado a que el Frente Nacional abortara esta estrategia, más rápido de lo que realmente ocurrió. Decir lo contrario, era colocar en evidencia a personas específicas en uno u otro partido y esto podía resultar demasiado caro al ideario de unidad nacional del momento. En ese sentido, la impresión luego de revisar el material de prensa nacional es que más que revelar un “origen”, la *Investigadora* lo que hace es evidenciar la “magnitud de una problemática”. Además no son expertos los que la integran y no tienen la pretensión de producir una génesis explicativa. Tampoco están los campesinos y las víctimas. Los que hacen parte de ella, son básicamente “notables de la vida política” actuando en medio de

una política de concertación que no quiere hacer historia del desangre y de una gran estrategia de que quiere mirar más hacia delante y menos hacia atrás. En ese sentido, la edición del pasado realizado por la Comisión está determinada por la coyuntura crítica en la que se sucede y el tipo de personas que finalmente la integran.

La Investigadora entonces lo que hace es realizar una autopsia muy controlada del pasado. Pero a la par que se acomete esa autopsia, van proponiendo mecanismos profilácticos para la superación de lo que se ha revelado. Que por cierto, si se revisa detenidamente la prensa de la época está más en consonancia con necesidades materiales de las poblaciones, por ejemplo, una escuela, un matadero, un puesto de salud, una carretera, que con las violaciones extremas a las víctimas. Las víctimas aparecen como “damnificados” que deben ser devueltos a su estado de normalidad a través de proyectos de ingeniería social, como ya se observó en el apartado anterior. Es decir, nuestra impresión y puede ser que esté impregnada de una visión muy desde el presente, es que la *Investigadora* o al menos el Frente Nacional que la promueve, están mas preocupados de las zonas violentas que de los sujetos victimizados.

Y aunque puede que esta visión no sea compartida unánimemente por todos los miembros de la comisión, en esto posiblemente el cura Guzmán Campos se distancia de sus compañeros, lo cierto es que esta lectura fue la que terminó primando. Es decir, la Comisión fue creada básicamente y así terminó funcionando, para generar un diagnóstico de las necesidades materiales de las poblaciones más afectadas y no desenterrar abiertamente el pasado- reciente. Algo de esto último hizo, pero siempre se cuidó que ello no tocara llagas profundas. A propósito de esto, un editorial del periódico conservador *El Siglo*, resumiría claramente la finalidad que habían descargado los gendarmes del Frente Nacional sobre ella, “ser el punto de partida para la acción política y menos para el análisis, puesto que se reconoce que existe ya un buen cúmulo de literatura al respecto”. La comisión quedaría entonces en su función de “oir necesidades”

e informarlas al gobierno de Lleras Camargo, produciendo de paso una serie de recomendaciones que podrían redundar en extirpar el flagelo de la violencia¹⁶³.

En ese sentido, aunque no se expresó tácitamente, siempre se quiso dejar en claro que la *Investigadora* no sería bajo ninguna forma, un tribunal de justicia. Aunque en el decreto de creación, apareciera el mandato de investigar, recomendar y contribuir a la normalización, el que no fuera un tribunal de la justicia, hacía que las élites se blindaran ante cualquier juicio de responsabilidades. No habría recriminaciones políticas, ni procesos judiciales. De hacerlo, eso significaría desatar la violencia y encender el país de nuevo. El camino tomado por la Comisión de considerar la imposibilidad de construcción de una génesis clara de la Violencia, se sostendrá y defenderá sobre la base de un significativo aglutinante ideado por las élites y soportado por los académicos, luego en el libro *La Violencia en Colombia: “todos somos responsables”* ya sea por acción o por omisión, por silencio complaciente o por cobardía, por tanto “Nadie específicamente es culpable por esta gran catástrofe nacional”.

2.3.2 Diagnóstico de un presente nacional en un orden históricamente turbado

En la creación de la *Investigadora* estuvieron en juego varias circunstancias históricas y algunas razones políticas de peso que marcaron el rumbo mismo de su labor y que a nuestro entender, moldean la construcción de un marco de temporalización sobre el presente. Ella surge en medio de una situación alarmante de violencia, no de transición, como son de hecho las condiciones de surgimiento de todas las comisiones que han existido en el país para tratar el tema de la violencia. Como antecedente a su formación se tiene que las secuelas históricas de la *Violencia* han sido pragmática y no programáticamente tramitadas por los gobiernos de turno, desde Mariano Ospina Pérez, pasando por Laureano Gómez hasta llegar a Rojas Pinilla. La principal herramienta utilizada para su solución han sido los decretos y medidas de emergencia. Así para acabar con el sectarismo político, se ensayan las amnistías generales e incondicionadas; para contrarrestar la violencia de las bandas, se privilegian las autodefensas campesinas

¹⁶³ El Siglo, 7 de junio de 1958

o las guerrillas de paz; para promover la captura de un bandolero, se legitima el uso de las recompensas; y para combatir los delitos menores se utilizan toda serie de medidas de extrañamiento social (Sánchez y Meertens, 1983). Además, estos gobiernos siempre tienen, como un as de manga, el denominado decreto de *orden público turbado*. Bajo ese marco, los principales problemas sociales y políticos acumulados durante años (pobreza, descomposición social, encadenamiento vengativo de los partidos, proliferación de bandas criminales) los cuales demandan soluciones programáticas, son “conjurados” bajo un ejercicio permanente y sostenido de instrumentos justicieros excepcionales.

Pero estas medidas no obedecen sólo a la época, han sido utilizadas con cierta recurrencia a lo largo de la historia nacional. En un país de violencias que se transforman y reciclan, los instrumentos excepcionales siempre resultan herramientas privilegiadas por los ejecutivos. Colombia por decirlo así, ha sido el país de las comisiones de estudio de la Violencia y los decretos de emergencia. Mediante las primeros se tramita el relato y el dolor, mediante los segundos se normaliza la excepcionalidad política. Y la excepcionalidad lo es bajo la figura del estado de sitio, que fue amparado históricamente con el artículo 121 de la Constitución de 1886. Al punto de que algunos autores han considerado que el país vivió desde entonces y sólo con cambios importantes hasta el año 91 del siglo XX cuando surge una nueva Constitución, en una suerte de “*excepcionalidad jurídica permanente*” (Uprimny y García, 2005). Este artículo, célebre y bizarro a la vez, les permitió a varios ejecutivos generar y posicionar en situaciones consideradas extremas para el orden nacional, una *política criminal* de emergencia. Con el 121 se acostumbró a los colombianos a la frase: “turbado el orden público en el territorio nacional por razones de seguridad”. Se hizo uso del mismo, cuando la situación de violencia arreciaba, pero también cuando la lógica de la coyuntura demandaba utilizar una herramienta rápida y nada reflexiva, para resolver situaciones incómodas con la oposición, con los rebeldes o con el denominado enemigo interno.

Existen muestras de este tipo de legislación desde el período conocido para la nación como *La Regeneración*, que inicia en 1886 y termina más o menos en 1910. Allí se

siente el impacto del estado de sitio, con las famosas disposiciones *K* y la *Ley 61 de 1888* o *Ley de los Caballos*. Estas autorizaban al Ejecutivo a reprimir administrativamente los abusos de la prensa, los delitos contra el orden público y las conspiraciones, entre otras cuestiones. Más tarde, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), se expidió la *Ley Heroica*, que otorgó tratamiento policial a las protestas sociales que surgían por el inicio de la industrialización (Uprimny y García, 2005). Al amparo de ella se legitimó la famosa matanza de las bananeras. Las implicaciones de la legislación de emergencia, se van a sentir con fuerza a raíz de los acontecimientos del 9 de abril del 48 tras la muerte de Gaitán y la ola de violencia que se desata en el país, de la cual ya hicimos alguna mención arriba¹⁶⁴. Resguardado en las facultades que le concedía el artículo 121 de la Constitución Política de 1886, el gobierno de Mariano Ospina Pérez va a expedir el decreto 3518 del 9 de noviembre de 1949, mediante el cual declaraba nuevamente “turbado el orden nacional”. La razón fue el trámite de acusación contra él, que los presidentes liberales del Senado y de la Cámara de Representantes cursarían en el Congreso por violar la Constitución¹⁶⁵. Con este

¹⁶⁴Este tipo de legislación se constituyó en una de las de más alto impacto en el orden social, jurídico y político nacional en el siglo XX en el país. Con ella se terminó desconociendo paulatina y sistemáticamente una serie de derechos y garantías constitucionales para ciertos grupos sociales o individuos calificados bajo la etiqueta de “enemigos internos”. La legislación colombiana sobre la excepción se sintió con fuerza en 1978 con el anuncio de la creación del *Estatuto de Seguridad*, a través del decreto 1923, que confería funciones de policía judicial a los miembros del Ejército para juzgar a los subversivos. Fue un período bajo el cual, so pretexto de defender las instituciones democráticas, se restringieron severamente las libertades ciudadanas. Con la Constitución de 1991, tanto el recurso al estado de sitio como a las normativas de excepcionalidad, cayeron progresivamente en desuso y se establecieron límites para su uso indiscriminado, al punto que, como reconoce Orozco (2009: 3), “dejaron de ser el mecanismo de soberanía mediante el cual se definieron y regularon las fronteras de lo delictivo y, con ello, también se definieron las enemistades, en situaciones de alta turbulencia política”. Entre las restricciones que previó la Constitución del 91, estaban que las normas que lo desarrollan deben guardar estrecha relación con las motivaciones generatrices y ser proporcionales a sus causas y *pro tempore*. Además se prohíbe la limitación de los derechos humanos contenidos en el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, el poder ejecutivo siguió haciendo uso de ellas. Así a lo largo de los noventa fue recuperada varias veces por algunos presidentes frente a coyunturas críticas. Recientemente el gobierno de Uribe Vélez recuperó la figura de los estados de excepción para conjurar el paro de la rama judicial, atender la crisis del sector salud y, aunque no lo hizo, estudió la posibilidad de decretar el estado de sitio para contener la posible salida de presos por vencimiento de términos en los procesos penales que se seguían contra la delincuencia organizada. Para una ampliación del tema, especialmente durante la *Violencia* se puede consultar el reciente libro de Cote (2010); también para los impactos jurídicos y políticos del estado de excepción en Colombia los trabajos de Aponte (1998) y Camargo (2002). También el trabajo de Aponte (2006), sobre la relación de este tipo de excepcionalidad en el marco del llamado *derecho penal del enemigo*, desarrollado por el jurista alemán Günther Jakobs.

¹⁶⁵En el Congreso las mayorías liberales habían impuesto una reforma electoral anticipando las elecciones presidenciales en siete meses, fijándolas para el 27 de noviembre de 1948. Ospina objetó la ley por inconstitucional, el Congreso insistió y las mayoría liberal de la Corte Suprema de Justicia terminó declarándola constitucional. En octubre, Ospina propuso aplazar las elecciones en cuatro años, lapso en el cual gobernaría una junta bipartidista (uno de los antecedentes del Frente Nacional) de cuatro miembros, y varias corporaciones serían paritarias. Su fórmula fue tildada por López Pumarejo y Lleras Camargo (dirigentes liberales) de “dictadura pactada”. Es a raíz de estos acontecimientos que se desata el trámite de acusación contra él en el Congreso. (Cfr. Palacios, 2003: 201-203).

decreto, vino la censura a la prensa y el cierre del Congreso. Los gobiernos de Álvaro Gómez y Rojas Pinilla, no levantarían la medida, sino que la reforzarían.

En uso de las atribuciones que confería ese artículo 121 y el decreto 3518 expedido por Ospina Pérez, entrará en funcionamiento el decreto de creación de la *Comisión Investigadora*, al que hicimos alusión en la segunda parte de este capítulo. Según afirmaba, “*para el establecimiento de la normalidad política y social en el país, era necesario estudiar las causas generadoras de la violencia y las formulas para su superación*”¹⁶⁶. Es decir, esta *Comisión* tendría como función, investigar el desangre bipartidista, recomendar soluciones para las regiones más azotadas y normalizar las condiciones políticas en el territorio. Ya observamos cómo, frente a la investigación del desangre, la *Comisión* opta por considerar que no hay una génesis clara y que todos somos responsables en el país. En ese orden de ideas, nuestra impresión es que a la *Investigadora* no le queda más que ser una especie de estrategia civilista – desarrollista con una misión normalizadora de situaciones críticas en el presente. Es decir, tiene la pretensión de acometer un diagnóstico de todas aquellas situaciones presentes dignas de ser observadas y evaluadas, que están turbando el orden nacional y frente a las cuales deberá generar recomendaciones prácticas para su solución. Lo que estamos sugiriendo aquí es que aunque ella acomete un ejercicio arqueológico sobre el pasado, este es limitado y editado por las condiciones restrictivas que le impone el pacto frentenacionalista. En esa medida se convierte en un mecanismo más expedito, para tramitar el presente de la confrontación que tampoco es nada fácil de procesar.

Y esto es así dado que la labor de la *Comisión* deberá efectuarse, dentro del desarrollo de un conflicto que parece no detenerse y dentro de un marco político y jurídico que seguirá por un buen tiempo bajo la égida de la medida de turbación del orden. Lo interesante, es que aunque es un recurso igualmente excepcional en una coyuntura crítica, no pretende conjurar lo que ocurre mediante la fuerza o el uso arbitrario de la violencia de estado, sino a través de la generación de una radiografía de lo que está ocurriendo. Entiéndase

¹⁶⁶Cfr. Periódicos “El Espectador” y “El Tiempo”, mayo 27 de 1958.

por ahora que no es aún una radiografía sociológica o una lectura de expertos, como la que generará el Libro *La Violencia en Colombia* o el informe del año 87 que describiremos luego, sino una que comienza a develar pequeñas parcelas del desangre presente, aunque repito de forma muy controlada y editada, con el propósito de proponer sobre la base de ello, soluciones inmediatas de ingeniería social y desarrollismo regional, que permitan fundamentalmente normalizar condiciones políticas y sociales.

Ahora bien, ¿cómo en medio de un pacto que a lo largo de sus diecisiete años de funcionamiento aboga por una política de prudencia frente al pasado reciente, pueden surgir mecanismos como éste, cuya tarea es precisamente realizar una autopsia y génesis de la violencia? Nuestra hipótesis, es que al momento de su creación la clase política no dimensionó realmente la magnitud y alcance que cobraría el trabajo de la *Investigadora* en los meses siguientes. Se previó y se confió que fuera un instrumento pasajero, que sólo daría cuenta de lo ocurrido en forma de un informe privado al gobierno de Lleras Camargo, pero quizá sólo eso. Se previó además que no tocaría llagas. Además, su creación se da en las etapas previas al inicio del Frente Nacional, donde todavía está flotando en el ambiente un “*espíritu pacifista, reformista y conciliador que le permite a las élites reacomodar las reglas de juego*” (Rodríguez, 2008: 42). Posiblemente, si la Comisión se crea poco después, cuando ya la retórica política sobre el cierre del pasado ha calado más, las estrategias de seguridad nacional se han profundizado y los partidos no quieren escuchar de responsabilidades particulares, su naturaleza y artesanía hubieran sido otras; muy posiblemente no se hubiera acometido dicha tarea, o al menos no de la forma en que se hizo. En ese sentido, en un escenario de reacomodo inicial de las posiciones de los actores, aún son posibles y viables instrumentos de este tipo, que a la vez que revelan también proponen soluciones. Incluso, esa retórica frentenacionalista inicial flota e impregna a algunos miembros de la Junta Militar, algunos de ellos reconocidos por sus posiciones férreas sobre el tratamiento que debería dársele a la *Violencia*. Así, el General y Ministro de guerra Alfonso Sainz Montoya, va a argüir a comienzos de junio de 1958 que “*la pacificación no se lograría con la fuerza*

*únicamente, sino atendiendo a la solución de las causas que crean la violencia*¹⁶⁷. Esta perspectiva será compartida también por otros militares, a los que ya hemos citado como Ruiz Novoa y Valencia Tovar y que enmarcan el espíritu de eso que se ha denominado “desarrollismo militar”¹⁶⁸.

De todas maneras, hay que comprender que el país de entonces estaba frente a un espacio de concertación inédito. La *Investigadora* es una de las formulas de ese pacto político, surgida en una coyuntura crítica que demanda mecanismos de trámite de algún tipo, dado que aunque se hablara desde Bogotá y desde los gendarmes del pacto, de la necesidad de encontrar soluciones que permitieran desactivar la guerra, no se había logrado aún ningún acuerdo mínimo en las regiones. Las regiones y las localidades más azotadas por la Violencia, lo requerían con urgencia. Aun así, en un escenario como estos, los cuestionamientos sobre las estrategias utilizadas no van a faltar, aunque tampoco serán muchos. Los que se hicieron provinieron no de movimientos organizados, inexistentes para la época, sino más bien de la prensa escrita que además centraba sus críticas a aspectos más de funcionamiento de la *Investigadora*, sobre todo por la demora que tuvo para iniciar su labor. De otra parte, algunos sectores políticos no estaban plenamente convencidos de su necesidad y eficacia. Pese a esto, la *Investigadora* va a funcionar durante cerca de ocho meses. Sus defensores siempre arguyeron por encima de las críticas, su imperiosa necesidad en procura de “recuperar la República” en un presente que no había que postergar mucho.

2.3.3 ¿Un nuevo comienzo para la nación?: la lectura de futuro de la *Investigadora*

La *Investigadora* terminaría siendo vista no sólo en su misión normalizadora, sino también redentora. Es decir, su labor de *no* fue sólo descriptiva del presente o de las causas de la violencia, sino esencialmente terapéutica y pastoral. De hecho se correspondía con la visión que el Frente Nacional se encargaba de vender al gran

¹⁶⁷El Espectador, 17 de junio de 1958.

¹⁶⁸Resultan cruciales, para entender estas visiones desarrollistas de los militares, los textos de Novoa (1965); Landazábal (1969); Matallana (1984) y Tovar (1992). También la Revista de las Fuerzas Armadas. Para un análisis del tema se recomienda el texto de Gilhodes (2009).

público en su objetivo de superar el desangre: una gran operación de paz y salvación nacional. Si bien esta era una estrategia diseñada por élites políticas pragmáticas, su lectura del país de entonces irradiaba, un aroma casi evangelizadora que buscaba atender a los damnificados pero también pastorearlos, reincorporar a los excombatientes a la vida ciudadana, pero también redimirlos de sus culpas históricas, generar amnistías pero también administrar institucionalmente el perdón político. La prensa ayudaba a diario a reforzar este imaginario mesiánico. Bajo ese imaginario, de la amarga lección del pasado, y sobre el cual no había que volver muchos los ojos, se levantaba hacia delante la necesidad de sobreponerse a los impulsos y pasiones. Ello sólo era posible si todos le apostaban a una Nueva República¹⁶⁹. La *Investigadora* aparecía por doquier, preconizando el evangelio del nuevo comienzo, posicionándose como “*empresa de salvación*”¹⁷⁰. El nuevo comienzo invocaba además la idea de que el pasado había que cerrarlo y sobre esos cierres construir algo nuevo.

El problema aquí, es que el nuevo comienzo estaba en el fondo alimentado por “dispositivos tácticos provisionales”¹⁷¹. Estos dos dispositivos como se ha insistido, eran la Rehabilitación y la Pacificación frente a los cuales había también pugnas y debates sobre cual debería primar. En parte también el gobierno nacional de Lleras Camargo, había visto que habían funcionado con relativo éxito en otros países, por ejemplo, el caso filipino. No hay que olvidar que la estrategia de Rehabilitación de comienzos del Frente Nacional, tenía como antecedente, la diseñada por el gobierno filipino para afrontar a los *Huks*, que decidieron combatir desde el monte, después de la Segunda Guerra Mundial; tras ser confrontados por el gobierno con una mezcla de autoritarismo, primero, y de reforma agraria después, a fines de los años cincuenta, entraron luego en un proceso de degradación y transformación (Cfr. Sánchez, 2000).

En el caso colombiano, dichas estrategias van a depender de una macropolítica acordada previamente por las élites con una gran dosis de legitimación de verdades a medias y

¹⁶⁹ El Espectador, noviembre 24 de 1958.

¹⁷⁰ Revista Semana, 9 al 15 de diciembre de 1958.

¹⁷¹ Retomo este concepto de Gómez – Muller (2008).

políticas pragmáticas frente al pasado. En esencia, menos pasado y más desarrollismo son las consignas de la época. Visto el asunto en retrospectiva, podríamos decir que la Comisión si bien había contribuido a un ejercicio de anatomía del desangre regional, con sus enormes limitaciones, lo que había hecho mejor era una especie de profilaxis de la violencia¹⁷². Es decir, revelaba ciertos problemas estructurales del país, aquellos que no tocaran llagas, pero le apostaba más a la terapéutica civilista que era “*devolver a un estado social, lo que estaba en una fase antisocial*”¹⁷³.

El trabajo si bien terminaría proyectando un nuevo futuro, este sería en parte controlado por las élites. Había nuevo futuro, el de la concertación, pero también se habían erigido nuevos problemas y quedaban deudas por saldar. Se podría incluso llegar a leer este momento como de canje concertado: futuro por silencio. Además, las distintas estrategias frentenacionalistas orientadas a la desactivación del desangre, no tocarían uno de los meollos centrales de la guerra en el país, y por ende uno de los innumerables históricos para las élites nacionales, y el caballo de batalla durante mucho tiempo de la izquierda y la insurgencia armada: la reforma agraria. Es decir, la pacificación y rehabilitación fueron ante todo estrategias de asistencia, de ingeniería social, de civilismo desarrollista, diseñada por planificadores, burócratas, ingenieros, e incluso militares, planeadas desde arriba y revertidas muchas veces por las mismas élites. Con el tiempo estas estrategias terminarían siendo sólo *parte de un paquete de “acciones cívico-militares, que permitieron acabar con los bandoleros pero no con las causas objetivas de la violencia”* (Comisión de estudios sobre la violencia, 1987; 2009: 47)¹⁷⁴. Para Pécaut, la gran dificultad que experimentó en el fondo esta comisión fue que “*intentó conciliar ánimos, pero en un sentido paternalista, de reparación cristiana y por ahí se fueron colando políticamente muchos silencios*”¹⁷⁵. Hoy, luego de 53 años de haber tenido lugar esta experiencia, podríamos atrevernos a especular que hubiera pasado si los resultados de la *Investigadora* se hubieran encadenado a revelaciones más aguda del desangre y sus responsables, y sobre todo a una propuesta programática de paz a través

¹⁷²Palabras de Orlando Fals Borda en la Introducción al Tomo II. Cfr. Guzmán, Fals y Umaña (2005: 65).

¹⁷³Palabras de Guzmán Campos, en Guzmán, Fals y Umaña (2005: 497).

¹⁷⁴ Utilizo aquí la edición de 2009 realizada por la Carreta Editores.

¹⁷⁵ Entrevista con Daniel Pécaut, 23 de julio de 2010.

de reformas estructurales de largo alcance, como la redistribución de la tierra, especialmente en las zonas más afectadas. Gran parte de la ciencia social que estaba emergiendo en el país en los años cincuenta, colocaría de relieve este nudo gordiano¹⁷⁶.

2.4. El Libro La Violencia en Colombia

Ante la imposibilidad de generar un informe final, años después de finalizada la experiencia de *la Investigadora*, el libro *La Violencia en Colombia*, permitió crear y legitimar en el imaginario nacional una especie de canon interpretativo de ese período, tristemente célebre en la memoria nacional. Este canon tuvo clara influencia durante varias décadas en la ciencia social criolla. Lo que no pudo hacer la Comisión en su momento ampliamente lo haría el libro cuatro años después. Es decir, el libro posibilitó un régimen de memoria que la Comisión no logró llevar a cabo. Además, del libro van a emerger tres lecturas de la realidad nacional, que resultaron decisivas para la institucionalización de la ciencia social en el país: una psicológica, otra sociológica y una sociojurídica.

2.4.1 La Comisión: ¿insumo remoto o conditio sine qua non? para el libro

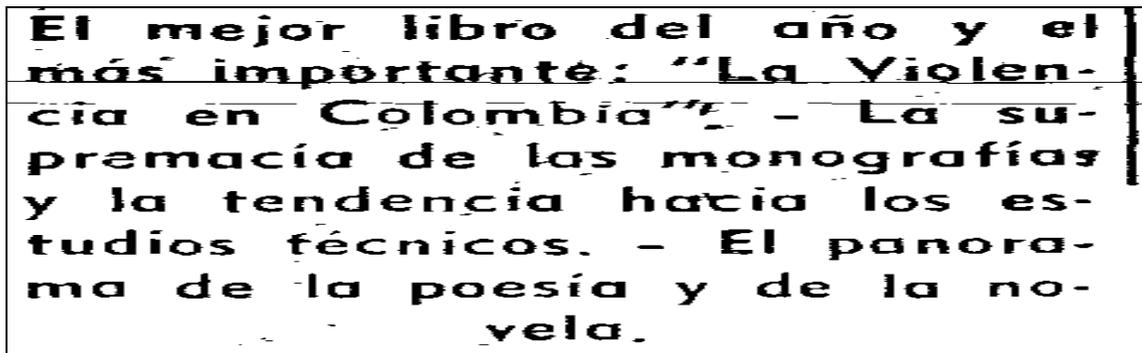
La *Comisión de Paz*, pese al acopio de un numeroso material testimonial en las zonas afectadas, nunca generó un informe oficial, dada la “*enorme heterogeneidad de su composición y la poca credibilidad que había en las instituciones representadas por las personas que integraban la comisión*”¹⁷⁷. Sin embargo, allanó el camino para el libro – memoria más editado, vendido y discutido en su género en el país, *La Violencia en*

¹⁷⁶En este sentido, será célebre el trabajo Orlando Fals Borda *El hombre y la tierra en Boyacá: bases sociales para una reforma agraria* (1957). que además de ser su disertación doctoral en la Universidad de Florida, tiene un claro “aroma” de la sociología rural canónica norteamericana, en particular la de Lowry Nelson y Thomas Lynn Smith, con quienes Fals Borda compartió en Minnesota y Florida. La recuperación de este escrito evidencia el gran manejo de datos demográficos y etnográficos del sociólogo colombiano y su impronta del ecologismo rural en su obra, ambos enfocados a la explicación de las tensiones derivadas de los cambios socioeconómicos en una típica sociedad agraria de los años cincuenta. A través de su pluma, caracteriza a la sociedad boyacense a partir de un acendrado “agrocentrismo”, “pasividad en sus tradiciones” y “sistemas políticos gamonalistas”, pero también muestra cómo ella pretende transitar hacia formas modernas de vida, con “producciones más racionalizadas” que le permitan superar las “secuelas de la violencia” (Fals Borda, 2009: 51).

¹⁷⁷Fragmento de entrevista realizada a Morales Benítez por Indepaz.

*Colombia (1962-1963)*¹⁷⁸. Incluso en el año de 1962, sería declarado por el periódico El Tiempo, en su habitual balance de las principales publicaciones del país, como “el libro del año” en un periodo donde ya comenzaban a sentirse, según el columnista “*la supremacía de las monografías y la tendencia hacia los estudios técnicos*”

Figura 12. Noticia sobre el libro *La Violencia en Colombia*



El mejor libro del año y el más importante: “La Violencia en Colombia” - La supremacía de las monografías y la tendencia hacia los estudios técnicos. - El panorama de la poesía y de la novela.

Fuente: El Tiempo, 1962

Años más tarde, Germán Guzmán en un Simposio Internacional sobre violencia, reconocería que dicha comisión fue sólo “*una precursora remota del libro*” (Guzmán, 2009). El mismo Otto Morales Benítez diría que no se explica “*cómo él, siendo un escritor, nunca sistematizó el material. Sin embargo, reconoce que colocar de acuerdo a los comisionados hubiera resultado una tarea titánica*”. Según él, la premura del momento estaba marcada por otras necesidades, y en ese sentido lo que hizo Guzmán Campos, fue tomar en medio del arduo trabajo “*atenta nota de lo que escuchaba y veía*”, ese material sería luego insumo básico para el libro, en lo que pasaría a llamarse la *Colección Guzmán* cuyo paradero hasta ahora es incierto.¹⁷⁹ Además, según Otto Morales, Guzmán Campos nunca consultó a los comisionados, ni tampoco solicitó autorización para publicar el libro. El libro resultaría en ese sentido, de “*un encuentro accidental de él con Fals Borda y con Umaña Luna, que eran sus amigos y aunque fue*

¹⁷⁸Al menos en 1962, 1964, 1968, 1977, 1980, 2005 el texto fue reeditado por las editoriales Iqueima, Tercer Mundo, Punta de Lanza, Progreso, Carlos Valencia, Taurus. Su primer tiraje por la Editorial Iqueima fue de mil ejemplares, la segunda edición, realizada por Editorial Tercer Mundo fue de 5.000 ejemplares, todos agotados.

¹⁷⁹Frente a esta colección existen muchos rumores, que van desde considerar que Guzmán vendió los archivos hasta la que asume que los archivos que la integran estarían en México, quizá en Chapingo, donde luego de retirarse se radicó y vivió hasta su muerte.

considerado un trabajo de la Facultad de Sociología, fue un trabajo más de Guzmán”¹⁸⁰.

Figura 13. Los “notables” de las ciencias sociales en los sesenta: el cura, el jurista y el sociólogo



Fuente: *El Tiempo*, 1962

Aun así, la participación de monseñor Guzmán Campos fue clave en esta empresa. Sin lugar a dudas, podemos denominarlo un “etnógrafo de la *Violencia*” que aportaría información de primera mano (material fotográfico y testimonios, entre otros) recogida cuando fuera cura párroco del Líbano (Tolima) y como parte de los recorridos de la *Comisión* por las zonas afectadas. Su impronta se evidencia de “cabo a rabo” en los dos tomos. Del primero, elaboró diez de los trece capítulos, así como las palabras finales. Del segundo, elaboró ocho de los catorce capítulos. Estos capítulos estaban orientados a describir la historia y geografía de la *Violencia*, los elementos estructurales del conflicto y la terapéutica sobre la *Violencia*. Y pueden ser considerados la arquitectura del libro. También colaboraron de la escritura del libro, el sociólogo Orlando Fals Borda, recién llegado de Estados Unidos y el abogado penalista Eduardo Umaña Luna, que aunque no integraron la comisión, elaboraron algunos de los capítulos del primero y segundo volumen del libro. A Fals Borda, le correspondió la parte interpretativa del primer tomo,

¹⁸⁰Fragmento de entrevista realizada a Morales Benítez por Indepaz.

con un capítulo sobre la sociología de la violencia y otro sobre la estructura social colombiana, además del epílogo. En el segundo tomo, contribuyó con una senda introducción donde muestra la dinámica de recepción del primer volumen desde un punto de vista de la sociología del conocimiento, a partir de las reseñas y comentarios publicados en periódicos y revistas¹⁸¹. Umaña Luna por su parte, realizó en el primer volumen la descripción de los factores socio-jurídicos de la violencia; y en el segundo tomo un estudio sobre el andamiaje normativo en el contexto del conflicto y un capítulo sobre la niñez abandonada.

Si el primer autor le confirió al libro un carácter testimonial y de denuncia por el acervo de voces consignadas, los otros dos le imprimieron un sabor intelectual en muchas ocasiones con un lenguaje encriptado propio de los expertos del momento, más aún, si se tiene en cuenta que el libro en parte fue pensado, planeado y lanzado desde la recién creada Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. El libro en ese sentido, recoge el espíritu descriptivo y terapéutico de un Guzmán Campos que había sido clave en la Comisión del 58, combinado con una aroma academicista propia de la emergencia de la sociología en la Colombia de los años cincuenta que quería posicionarse dentro de los cánones científicos norteamericanos. Años más tarde, contaría Guzmán Campos que para la construcción del libro se habría pensado también en otras voces, invitándose a participar del proyecto a un psicoanalista y un militar, aunque ambos declinaron la oferta (Guzmán, 2009: 51). En la prensa de la época se habló incluso que para el segundo tomo del libro participarían el cura y sociólogo Camilo Torres¹⁸², con un trabajo sobre las implicaciones morales de la Violencia; el sociólogo norteamericano Aaron Lipman, con un trabajo sobre las condiciones sociales de los desplazados en Bogotá; Andrew Pearce, con un trabajo sobre el cambio cultural y el médico José Gutiérrez, a cuyo cargo estaría el estudio psicoanalítico de la Violencia¹⁸³. Sin embargo, ese proyecto no se llevó a cabo de esa manera.

¹⁸¹ Sobre esta introducción ver Cubides (1999); Guzmán (2009); Valencia (2011).

¹⁸² En realidad el trabajo de Camilo que estaba pensado para hacer parte del libro, fue el artículo que presentó en el *I Congreso de Sociología* realizado en Bogotá en 1963, titulado “La violencia y los cambios socio-culturales en las áreas rurales colombianas” (Conversación con Jorge Hernández en Cali).

¹⁸³ El Espectador, 21 de diciembre de 1962

Da la impresión hoy, que por aquel entonces se asumía que el libro debía superar el carácter cuasi evangelizador de la Comisión del 58 y concentrarse más en el estudio científico de los determinantes de la violencia, es decir, estudiar las causas objetivas, próximas y remotas del fenómeno. Aunque, desde la perspectiva de Daniel Pécaut, el libro terminaría combinando una especie de “*progresismo sociológico con una buena dosis de reparación cristiana*”¹⁸⁴. Finalmente, para que el libro saliera a la luz, son dignos de considerar en este proceso, “otros” factores extraacadémicos, como la licencia eclesiástica de la cual gozó Guzmán Campos para realizar la labor, la legitimidad otorgada por el gobierno de Lleras Camargo al tema y el aporte privado institucional de la Fundación de la Paz de propiedad de la familia Urrea¹⁸⁵.

2.4.2 El libro y la primera lectura emblemática sobre la *Violencia*

Nuestra percepción es que este libro inaugura la *primera lectura emblemática sobre el pasado reciente de la violencia política en el país*. Esta lectura es emblemática por varias razones. De una parte, inscribe e instituye “otras formas” de descifrar el desangre nacional, más allá del acalorado bipartidismo o de las visiones apologéticas de uno u otro bando. En ese sentido, el libro pondera la importancia del análisis sociológico para construir una visión explicativa sobre el pasado, el presente y el futuro de la nación. La lectura ofrecida por este texto genera en ese orden de ideas, una ruptura respecto a los cánones interpretativos del momento, donde impera más la visión novelada y autobiográfica sobre el tema. El mismo Guzmán Campos reconoce que esta obra marca una diferencia con aquellas iniciativas que hasta el momento habían vehiculizado la memoria de estos episodios, siendo “*presa de la escueta enumeración de crímenes nefandos o de una fácil casuística lugareña*”¹⁸⁶. Aunque también es cierto que el libro no puede escapar tan fácilmente al acumulado literario sobre este período. De hecho, a lo largo de sus páginas, aunque pretende ser una lectura objetiva, se acude y se retoma

¹⁸⁴ Entrevista a Daniel Pécaut, 23 de julio de 2010.

¹⁸⁵ Entrevista con Álvaro Camacho, junio 21 y 23 de 2010

¹⁸⁶ Palabras de Guzmán Campos, en Guzmán, Fals y Umaña (2005: 37).

permanentemente la literatura testimonial para contextualizar lo que pasó en ciertas zonas¹⁸⁷.

En relación con este tipo de literatura con la que el libro se ve confrontado, habría que decir que se caracterizó básicamente por una simbolización y representación de lo sucedido a partir de posicionar los relatos de algunos de los protagonistas de este período. Así no será extraño que este tipo de literatura surja de “*viejos líderes campesinos que habían tomado las armas, primero en las filas del liberalismo y luego en las autodefensas guerrilleras, o en los intelectuales liberales que hicieron su tránsito hacia el partido comunista*” (Silva, 2007: 269). Según Rodríguez (2008), el período que va de 1946 a 1965, se caracterizó precisamente en Colombia por la proliferación de varios libros de testimonios (vehículos de la memoria nacional) producidos por víctimas, victimarios, testigos, simples observadores o críticos, los cuales hasta el día de hoy resultan invaluable para entender los mecanismos mediante los cuales se representó y recordó el pasado de nuestra *Violencia*.¹⁸⁸ Dentro de estos vehículos vale la pena resaltar por ejemplo, las *Memorias de un pobre diablo* del guerrillero liberal Saúl Fajardo, *Las Guerrillas del Llano* de Eduardo Franco Isaza, o *Lo que el cielo no perdona* del cura párroco de filiación liberal Blandón Berrío (el libro fue escrito bajo el seudónimo de Ernesto León Herrera). Pero no sólo los liberales construyeron un acervo de literatura testimonial sobre el período, también lo hicieron los conservadores, quienes intentaron imponer determinadas representaciones del pasado, legitimar ciertos discursos morales y visiones de mundo. Esto se puede rastrear por ejemplo, en *Las Balas de la Ley* del policía conservador Alfonso Hilarión Sánchez; y en *Mi diario*, del obispo conservador Miguel Ángel Builes¹⁸⁹.

¹⁸⁷Por ejemplo cuando se habla de la dinámica de violencia en los Llanos se acude a la obra del coronel guerrillero Franco Isaza, *Las guerrillas del Llano* (1959) o la del coronel Gustavo Sierra Ochoa, *Las guerrillas de los Llanos Orientales* (1954). Para una ampliación de las fuentes de las cuales se alimentan los autores del libro, se recomienda Valencia (2011).

¹⁸⁸Sobre este tema se pueden consultar también Sánchez (2003); Vélez (2003); Figueroa (2004).

¹⁸⁹Obispo de Santa Rosa de Osos, una población del Departamento de Risaralda. Fue famoso por sus discursos incendiarios a favor de la violencia contra los liberales, arguyendo que “matar liberales no era pecado”.

Sin querer ser exhaustivos con el tema, dado que no es nuestro objeto de indagación, si es posible afirmar que estos relatos funcionaron antes que apareciera el libro *La Violencia en Colombia*, bajo la lógica de una guerra de espejos en la que la afirmación de la identidad de unos autores pasaba necesariamente por la confrontación con la identidad de otros. Además, como hicimos notar en el apartado anterior del capítulo, varios de estos textos también fueron decisivos para articular una génesis sobre el período. Ahora bien, alrededor de esa guerra de espejos se construyó una interpretación de lo sucedido en la nación y fue contra ella o con ella que el libro *La Violencia en Colombia* tendrá que litigar. Así, la novela de Blandón, un policía que con el tiempo deviene en alcalde militar de Muzo (Departamento de Boyacá) y las memorias del guerrillero, que funge también como jefe liberal en Yacopí (Departamento de Cundinamarca) entran en tensión por la representación del mundo y la valoración que hacen de su contrario político. En la versión del conservador se considera que en Muzo, “el orden es él” en medio del desorden provocado por la violencia liberal, lo que implica imponer códigos morales, pautar comportamientos y establecer una persecución sistemática a todo lo que huelga a liberalismo. En cambio, en la visión del guerrillero, se expresa una protesta permanente a ser considerado un bandolero y un cuatrero por parte de senadores y políticos, pero sobre todo a que el gobierno insista en perseguirlo como jefe de las guerrillas liberales de Cundinamarca, a él que lo que hace es recuperar la dignidad liberal. También la novela del cura liberal se contrapone al diario del Obispo. Ambos ejercen su pastoral en una de las regiones más afectadas por la Violencia, Antioquia; ambos construyen escenarios de disputa por el sentido del presente y del futuro nacionales. Mientras el cura Blandón defiende a través de su libro, a sus feligreses liberales de la persecución de los conservadores, exigiendo “justicia divina” para los conservadores que han asesinado liberales; el obispo de Santa Rosa de Osos, estigmatiza a los liberales, considerando que no hay paz con los impíos, tildando al liberalismo de ser la “pocilga de todos los errores” pasados y presentes, reivindicando la política de Mariano Ospina Pérez (Rodríguez, 2008).

A ese juego de relatos, donde se multiplican por doquier representaciones fragmentadas y partidistas sobre la Violencia, que también son vehiculadoras de ofertas de sentido

temporal, no será extraño tampoco el *Frente Nacional* (1958-1978). En el marco de esta estrategia política, se colocan en juego muchos relatos que buscan legitimar explicaciones sobre lo sucedido, por ejemplo, a través de los grandes líderes políticos, como Laureano Gómez, el máximo líder del conservatismo, o a través de Lleras Camargo, líder del liberalismo, o a través de los jefes de directorios de partidos políticos regionales y locales. En todos ellos, existe como bien se anotaba antes, una retórica de la responsabilidad compartida por lo sucedido en los años aciagos de la Violencia, tratando por arriba de repartir culpas para todos y así evitar juicios específicos. Sin embargo, el libro *La Violencia en Colombia*, trata de romper con esa lógica y lo hace en términos de mostrar la *Violencia* como un “proceso social”, “globalizando la descripción del fenómeno” (Sánchez, 2009c: 22).

De otra parte, el libro es emblemático, porque para la época se convierte en una especie de tribuna de la justicia, lo que no logró hacer la Comisión del 58, frente a unas élites liberales y conservadoras que habían querido imponer y pactar cierres sobre la *Violencia* (Pécaut, 2003). De hecho en una entrevista con Gonzalo Sánchez se afirmó que:

*“El libro revela en la escena pública “la gran verdad” de la violencia bipartidista, incluso, rompiendo los silencios que se estaban pactando por arriba. El “choque” entre lo uno y lo otro, es monumental, gigantesco para la época”*¹⁹⁰

A esto se añade que el trabajo es paradigmático dado que traduce el análisis de la violencia en un ejercicio reflexivo sobre su naturaleza, desarrollo e impactos (Pécaut, 1998). Pero también emerge como emblemático en su misión curativa, de un cáncer que azota la nación (Rueda, 2008). Lo es además porque inscribe los testimonios de campesinos, combatientes y líderes políticos de las regiones, como piezas centrales del informe, no los desecha sino que los exalta en su composición. Es decir, legitima y visibiliza sus voces en la escena nacional, cosa que no se había hecho hasta el momento

¹⁹⁰ Entrevista con Gonzalo Sánchez, 2 de julio de 2010.

bajo ningún esfuerzo institucional, a excepción de la Comisión del 58. Dicha lectura además se encarga de legitimar una génesis de la guerra en el país, situándola entre 1930 y 1958, enfatizando en un continuum comportamental bipartidista desplegado en olas de violencia y olas de tregua. Esta génesis va acompañada a su vez de una etiología de las causas sobre el fenómeno; de una exposición sobre su incidencia en la dinámica social; de una regionalización del fenómeno¹⁹¹; y de una interpretación sobre su trascendencia en la psicología del conglomerado campesino. Además, trata en lo posible de producir y consolidar un discurso explicativo canónico sobre el pasado reciente, rompiendo “*fronteras geográficas y casuismos locales*” (Guzmán, 2009: 56) valiéndose para ello de distintas opciones y entradas metodológicas y disciplinares que para la época son dignas de destacar. Así a lo largo de sus páginas, el libro combina un “flash” de historiografía nacional, un diagnóstico del presente, permanentes denuncias políticas, cuotas testimoniales y una dimensión terapéutica, que lo hacen único en su momento. Para uno de sus lectores contemporáneos, “*de este libro, a pesar de su objeto de estudio tan dramático para la época, se derivará una lectura que hunde sus explicaciones en las bases estructurales del país, para comprender las estructuras agrarias previas, como detonantes de la Violencia*”¹⁹².

2.4.3 El libro y la institucionalización de una ciencia social incipiente en Colombia

La publicación del libro otorga tempranamente un estatus teórico a los estudios sobre la violencia en el país, permitiendo que se transite de un momento de representación novelesca de la violencia a una etapa de sociologización de sus causas y desarrollo. En palabras de Ortiz (1994) con el texto, operaría un tránsito entre la “representación de la

¹⁹¹ Este esfuerzo por la regionalización y espacialización del fenómeno es crucial en los estudios sociológicos sobre violencia, y en general, en la historiografía del conflicto. Está presente, sin ser exhaustivos al nombrarlos, en los esfuerzos de Gilhodes (1972); Oquist (1978); Fajardo, (1979); Arocha (1979); Henderson (1984); Sánchez y Meertens (1983); Ortiz (1985); Legrand (1988). Un balance sobre el tema se encuentra en González (2009). La espacialidad y la georeferenciación de la guerra, si bien son destacados en esta comisión, desaparecen del espectro de intereses de la comisión del 87. Aparece en el año 91 de manera especial con el informe *Pacificar la Paz*, que condensó la experiencia de la Comisión de Superación de la Violencia. Luego estará presente en el trabajo de Cubides, Olaya y Ortiz (1998) que detalla el comportamiento homicida entre otras cosas, en términos territoriales. También está presente en el célebre trabajo de González, Bolívar y Vásquez (2003). Nuestra percepción es que de nuevo estaría emergiendo esta dimensión en el trabajo de *Memoria Histórica*, en los informes emblemáticos.

¹⁹² Entrevista con Teófilo Vásquez, realizada en Bogotá, el 5 de marzo de 2010.

violencia” y la “violencia como objeto”. Todo ello se corresponde además con un momento de institucionalización de la sociología en la Universidad Nacional en el que comienza a ser evidente también una “*peculiar forma de intervención de los intelectuales en la sociedad*”, (Sánchez, 2009c) y que como ya se anotó en la introducción va a permitir la eclosión de eso que hemos denominado una “industria política y académica del diagnóstico de la violencia”.

Lo llamativo aquí es que de cara a la institucionalización de la sociología, este libro será una especie de “mojón inaugural”, que rompe con una imposibilidad propia de una época en la que producir investigación sobre el tema era casi una odisea. Como han señalado Pécaut (1998) y Sánchez (1988), *La Violencia*, no sólo mató personas sino también ideas, impidiendo la consolidación y sedimentación de tradición investigativa, de centros de investigación, además siempre rodeó el ambiente de amenazas sobre las instituciones y los investigadores que intentaran pensar el momento. Los intelectuales y artistas del período, lamentablemente quedarán atrapados por ésta confrontación, siendo una especie de conciencia cautiva, pasiva y resignada en un país desangrado (Pécaut, 1998; Sánchez, 1998).¹⁹³ En ese sentido, a los pocos académicos existentes les será imposible tomar distancia y convertir en objeto la *Violencia*. A lo más que se llegó fue a hacer relatos autobiográficos sobre el período, como se anotó anteriormente, dado que “*ni los jefes de las bandas campesinas, ni las chusmas conservadoras, ni los sicarios, ni las células de la guerrilla o de autodefensa, teorizaron sus acciones, o por lo menos no en un lenguaje que se comunicase cómodamente con el de las universidades en las ciudades*” (Pécaut, 1998). La violencia bipartidista en ese sentido, será la responsable de que la comunidad intelectual se disgregue y se pierda y que solo vuelva a renacer en las décadas de los sesenta y setenta¹⁹⁴.

¹⁹³Uno de estos grandes intelectuales atrapado en su momento por la persecución fue precisamente Gerardo Molina. Militante de izquierda, rector de la Universidad Nacional de Colombia, exiliado, retornado al país y luego rector de la Universidad Libre.

¹⁹⁴Renace con intelectuales, activistas, profesores y pensadores de distintas tendencias políticas y visiones diferenciadas, no sólo frente a lo que pasa en el país, sino también respecto a las formulas a seguir para lograr cambios. Melo (2008), a propósito del tema, menciona varios nombres de significativa importancia: Jorge Gaitán Durán, Mario Laserna, Mario Arrubla, Camilo Torres, Antonio García, Diego Montaña Cuellar, Álvaro Delgado, Virginia Gutiérrez de Pineda, Gerardo Reichel Dolmatoff, Jaime Jaramillo Uribe, Germán Colmenares Juan Friede, Orlando Fals Borda, Luis Guillermo Vasco, Rubén Jaramillo, Víctor Daniel Bonilla, Horacio Calle, Estanislao Zuleta, Jorge Villegas, Pedro Gómez Valderrama, Luis Villar Borda, Rafael Gutiérrez Girardot y Carlos Rincón.

Con el libro de Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna se romperá ese mutismo y ese fatum y se abrirá la posibilidad para que un público más numeroso, quizá más calificado, que está ingresando a las universidades, acceda al mundo social de la violencia. Ello de hecho coincide con un momento de modernización de la academia y de la cultura nacional, donde se expanden los productores, los intermediarios, los públicos y la demanda de analistas sociales y políticos (Sánchez, 1998). Ese momento modernizador favorecerá el surgimiento de una generación de intelectuales que no se *siente representada en el sistema de reparto político*. Es una generación “atrapada y rebelde” que encuentra en el libro *La Violencia en Colombia*, una fuente de crítica a los estragos que los partidos políticos han causado durante los años cuarenta y cincuenta, sobre todo, “*del nivel de impunidad que eludió el castigo para los responsables de la tragedia nacional [...] premiándolos con lugares principales en la escena política*” (Silva, 2007: 269). Será la misma que intente establecer las causas objetivas de la *Violencia*, al igual que lo hizo el libro. Por un tiempo militará o compartirá con la izquierda ciertos ideales programáticos y ayudará a educar a otra generación que emergería en los ochenta y noventa. En el fondo fue un grupo heterogéneo de intelectuales que intentó dar testimonio de sus orígenes, haciendo memoria de la guerra, afectada por su propia memoria de los hechos¹⁹⁵. Testimonio que en el caso de algunos los llevó a realizar una mixtura entre conocimiento y contestación política pero desde la arena civil¹⁹⁶ y en otros a tomar las armas¹⁹⁷.

¹⁹⁵Habría aquí una diferencia entre la memoria del que narra y la memoria nacional. La primera estaría más cerca de eso que Maurice Halbwachs llama la memoria autobiográfica. Recordemos que este sociólogo hace una diferenciación entre memoria interior o autobiográfica y memoria exterior o histórica. La primera se apoya en la segunda, dado que la primera es íntima y la segunda es general. Sin embargo, es consciente que la histórica (aunque ese término de por sí le parezca muy cuestionable) es más resumida en la visión de la vida que nos ofrece, mientras que la autobiográfica se caracteriza por generarnos “*una representación mucho más continua y densa de nuestra vida*” (Halbwachs, 2005, p.55). Por su parte, la noción de memoria nacional se nutriría de la reflexión del historiador francés, Pierre Nora, quien considera que ella hace relación a todos aquellos escenarios donde se solidifica el patrimonio y la identidad de una nación. Esta memoria nacional estará condensada y vehiculizada a través de los llamados *lieux de mémoire*. Cfr. Nora (1998). Nuestra percepción es que la memoria nacional en Colombia estaría atravesada por una o varias “memorias de la violencia” articuladas a distintos grupos, aunque no se reduciría a ella.

¹⁹⁶ El caso específico del sociólogo Orlando Fals Borda.

¹⁹⁷ El caso del cura y sociólogo Camilo Torres.

A partir del libro, se abrirán además temáticas que van a ser objeto de indagación futura en el campo de estudios sobre la violencia. En ese sentido, algunos han considerado que a partir del mismo se erige “una enorme montaña de publicaciones sobre el tema” (Sánchez, 2009d). Publicaciones que asumirán como propia una de las tantas vetas de este trabajo pionero. Así, sin sospecharlo, este texto transitará de ser libro memoria a “libro premonición” (Sánchez, 1999) dejando el embrión explicativo de muchas de ellas para las nacientes ciencias sociales del país: las guerras, las negociaciones, las amnistías, los actores, las dimensiones estructurales del conflicto, los desplazamientos, los despojos, las colonizaciones, la degradación de los grupos y el conflicto armado. Sin embargo, para Pécaut, fue solo un mojón inicial, porque las obras universitarias que abordarán el tema, más allá de lugares comunes o de estereotipos culturales o de imágenes simplificadoras del universo rural, comenzaron a escribirse sólo hasta finales de los años setenta y más específicamente en los ochentas. Estos estudios serán los que permitan dar cuenta, incluso rompiendo con la lectura emblemática del libro de Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna, “*de la diversidad y de la combinación de las dimensiones de los fenómenos, rescatando el papel de los actores, ya no reduciéndolos a ser más que la expresión pasiva de las estructuras y confrontando las posiciones que anulan las interferencias e intermediaciones entre las violencias heterogéneas*” (Pécaut, 1998).

Finalmente, el libro se constituye en una muestra del acopio de técnicas y material, las cuales van de alguna u otra forma a prefigurar las herramientas que en adelante serán privilegiadas por los científicos sociales. Este es un proceso que involucra varias fases. De una parte, los autores comienzan sistematizando material ya recogido por los comisionados en las localidades y regiones (toma de notas de campo y testimonios claves de campesinos, jefes guerrilleros y subalternos, exiliados, presos, jueces, notarios, jefes religiosos y militares y autoridades gubernamentales). A esto le añaden un mapeo de la violencia¹⁹⁸ realizado con la ayuda del Instituto Agustín Codazzi, por

¹⁹⁸Siendo un libro pionero en destacar el tema de la espacialización de la violencia, también es cierto que adolece de tratamientos rigurosos sobre la “representación cartográfica de la violencia”. Según lo han reconocido Pissot y Gouëset (2002) dado el bajo desarrollo de la geografía como disciplina por entonces, en la visión de sus autores se terminará agrupando en los mapas producidos, bajo la misma denominación de “violencia” hechos muy diferentes entre sí (matanzas, torturas, desplazamientos forzosos). La representación geográfica de la violencia, evoca en ese sentido, la vaguedad semántica del nombre asignado a este periodo como *Violencia*, que evita designar con exactitud

departamentos y municipios. A ello le complementan investigación histórica y de archivo en parroquias, notarías, juzgados, inspecciones de policía y ministerios. Así como la recolección y clasificación de elementos culturales utilizados en la violencia. En la labor se analizarán series estadísticas (por ejemplo, la estadística sobre mortalidad consignada en el segundo tomo), así los datos con los que contaran fueran incipientes para la época. Con la participación de Fals Borda y Umaña Luna, el libro a su vez introducirá las lecturas de los clásicos de la sociología norteamericana y los estudios socio-jurídicos en la comprensión del fenómeno, las cuales también aparecerán insertas en los currículos de la época, por ejemplo, Parsons, Merton, Coser, Sorokin, Gluckman, Gurvich, entre otros.

2.4.4 Ruptura o continuidad del libro con el pacto frentenacionalista

El libro *La Violencia en Colombia*, se convirtió pronto en un vehículo de la memoria de un pasado siempre en disputa, como ha sido y seguirá siendo el pasado de nuestra guerra, mientras esta continúe. Lo significativo aquí, es que para la época, este texto expresó lo tensionante que podían llegar a ser la recuperación de sus huellas, en un presente en efervescencia y de permanente “turbación del orden público” como lo fue el momento de la transición del desangre bipartidista. El libro de hecho ya muestra las implicaciones de reconstruir la memoria y la historia de la guerra dentro de la guerra misma, desafío que ha sido una constante para las comisiones que han tenido lugar en el país. Lo importante es que sitúa en la escena pública una memoria pública conflictiva sobre el episodio de la violencia bipartidista, que hace un cierre de lo que pasó entre 1930 y 1958, en un país marcado por visiones unilaterales y apologéticas provenientes de diversos sectores. Así, el libro termina realizando un corte, una edición sociológica sobre la memoria del pasado nacional que quiere reconstruir; aunque de hecho la guerra siga avanzando silenciosamente. Es de todas formas, el primer y quizá el único libro memoria de gran trascendencia para el país, que más claramente acomete esta labor de apertura y cierre académico del pasado.

las fuerzas presentes y, por el contrario, sugiere una responsabilidad difusa, compartida por todos los colombianos.

Al exponer una responsabilidad estructural sobre lo ocurrido, el primer tomo del libro desencadena, cosa que no va a suceder por ejemplo con el informe de la comisión del 87 que en el siguiente capítulo entraremos a analizar, así como con otros informes de comisiones publicados en el país, acaloradas reacciones de la prensa, de los poderes civiles, eclesiásticos y militares. En su momento, Fals Borda leería estas innumerables reacciones como síntoma de un retardo cultural de ciertos sectores del país, especialmente los políticos y religiosos, para aceptar las evidencias sobre los hechos, y como expresión de una inmadurez social, enraizada en la cultura nacional, que imposibilitaría consensuar sobre el deber ser de la nación (Guzmán, Fals, Umaña, 2009: 67, tomo II).

Sin embargo, no es de extrañar que un trabajo de esta magnitud que pretende sacudir la enclenque tranquilidad de la época que se ha encargado de vender el ideario frentenacionalista, termine siendo escenario de tensión y de luchas discursivas por posicionar y legitimar distintas versiones y representaciones sobre lo que pasó en el país. Lo extraño sería que no lo fuera. Aún así, lo potente de esta experiencia está en que en su momento, y retomando con cuidado las palabras de Crenzel para el caso argentino con el informe *Nunca Más*, avanzó en la conformación de un nuevo régimen de memoria sobre ese pasado, constituyéndose en muchos escenarios políticos y académicos en la forma predominante, quizá hegemónica, a partir de la cual muchos sectores de la sociedad colombiana pensaron, recordaron y representaron la violencia (Crenzel, 2008: 186).

Del múltiple cúmulo de reacciones que el libro desata y que Fals Borda recoge de manera esquemática y analítica en la introducción al segundo tomo (1963) a partir de la revisión de las reseñas y comentarios publicados en revistas y periódicos no especializados, quisiera destacar brevemente algunas cosas. Inicialmente el libro fue objeto de ponderación y expectativa desde julio de 1962 hasta más o menos agosto de ese mismo año. Se habló del mismo en los periódicos *El Espectador*, *El Tiempo*, *El Siglo*, *La Nueva Prensa* y *Sucesos*. Se dijo que era un “libro objetivo y valiente,

*producto de una serena reflexión, que ningún colombiano podría leer sin estremecerse de vergüenza y frustración*¹⁹⁹. Pero también el libro fue objeto de críticas provenientes de sectores partidistas y eclesiásticos, a partir del mes de septiembre y hasta octubre de ese año. Los conservadores van a aducir que se escribió en defensa de la versión liberal de la Violencia, sobresaliendo la visión de uno de los gestores del Frente Nacional, como lo fue Gómez Hurtado, para quien el libro terminaría siendo “mañoso y acomodaticio”.

Para la Iglesia Católica, sobre todo a partir de la reseña del texto realizada por el sacerdote Miguel Ángel González, se trató de un libro con faltas históricas, sociológicas y estadísticas, además se adujo la “mala fe” de los autores y se consideró muy precario en terminos de antecedentes de la violencia El alto clero incluso llegó a pronunciarse sobre la “inoportunidad de su publicación” en una época de reconciliación, en la que en lo menos que había que pensar era “hacer historia del desangre”. Durante este período el texto se debatiría a puerta cerrada en el Congreso, donde políticos y militares van a confrontar su contenido. Aquí se enfrentarán los más radicales y los más progresistas. Incluso, sus autores, no escaparán a innumerables ataques y argumentos ad hominem, que confrontarían sus adscripciones religiosas y personales, sus pasados académicos y sus visiones de país. A finales de diciembre de 1962, el libro, como dirá Fals Borda, será objeto de una crítica más cerebral, aunada también a la aparición de otros estudios sobre el tema y otras reseñas²⁰⁰. A partir de entonces, el libro entrará a ocupar un lugar importante en los sitiales de la ciencia social colombiana.

¹⁹⁹ El Espectador, Agosto 19 de 1962.

²⁰⁰ Introducción de 1963 al segundo Tomo (Guzmán, Fals y Umaña, 2005: 33)

Figura 14. Noticia sobre la reacción del alto clero colombiano frente al libro *La Violencia en Colombia*

EL SIGLO — Información General

No es el Momento de hacer Historia Sobre la Violencia

Sostiene el Cardenal Concha Córdoba. “Hay demasiadas pasiones todavía que oscurecen el criterio y que llevarían a formular juicios inexactos y a hacer imputaciones injustas”, sostiene el prelado. Velada referencia al libro “La Violencia en Colombia”. Carta de despedida dejó antes de viajar al Concilio Ecuménico.

En la carta del Cardenal se formula un nuevo llamamiento a todos los colombianos para luchar contra la violencia y señala que “la principal raíz de los males que nos han afligido durante tanto tiempo está en el olvido de la Ley de Dios en grandes sectores de la población bandoleros de otros preceptos de la ley moral? ¿Qué arma suficientemente eficaz se puede emplear contra la violencia si se ha vuelto un hábito entre muchos el menosprecio de la moralidad cristiana?”

Fuente: El Siglo, 1962.

2.4.5 Un canon interpretativo del desangre en tres lecturas

A nuestro juicio, de este libro surge un “canón interpretativo del desangre” en tres grandes lecturas: una subjetiva, otra estructural y otra jurídico - social. Esas tres lecturas además de posicionarse en las ciencias sociales, modelan los marcos de temporalidad a los que ya hicimos alusión en este capítulo. La primera, considera que existen unas “cadenas de violencia en el alma nacional” y emerge del discurso, en parte pastoral, en parte sociológico de Guzmán Campos. Comprende la violencia bipartidista de manera atávica, y en ella navega una visión de la condición humana del colombiano, atravesada más por la emoción que la sensatez política. Esa visión, concibe que la visceralidad del colombiano, no es un trazo pasajero, sino una huella fatídica, casi apocalíptica, impresa en toda nuestra cultura, la cual comienza a detonar cuando el “*virus de la Violencia se toma los campos*”. En esa lectura, aunque se asegura que el campesino no ha desatado la guerra, se reconoce que él mismo acepta el reto que ésta le depara, porque está casi que destinado, a ser un “bárbaro en la vindicta”. Bajo esta lectura, da la impresión que lo acepta, porque en su naturaleza ancestral se ha despertado algo que está doblegado por los períodos de paz. En la visión de Guzmán Campos, que al parecer será la que más cobre importancia en el sentido común, existe una visión consecuencial del pasado, es decir que lo que nos afecta de manera brutal y protuberante en el presente es resultado

de lo que en determinado momento alguien hizo o dejó de hacer en el pasado, signando de esa manera el presente y el futuro del alma nacional. La vía de superación de este apocalipsis será entonces la de reconciliación de los espíritus.

Ahora bien, esta mirada del cura Guzmán Campos, se acompaña de fondo, a lo largo de los dos volúmenes del texto de un sinnúmero de metáforas y estereotipos culturales, las cuales de alguna manera también han sido objetivados y mimetizados en la comprensión de la violencia. Es posible que muchas de ellas, sigan presentes en interpretaciones académicas, culturales y políticas sobre el tema, bien valdría la pena rastrearlas discursivamente en un estudio más amplio como el que se propone aquí. Por ejemplo, nombrar la violencia bipartidista como *estado antisocial, cáncer, enfermedad nacional, brutalidad aberrante, vorágine incontenible, bestialidad, monstruosidad, virus nacional, odio larvado, dosis explosiva de resentimiento, maquinaria del odio*, o incluso, hablar del *dócil y pasivo campesino, eterna víctima de la explotación*, en contraposición con el *matón consagrado o el político cerril*. Estas visiones están ligadas también a maneras particulares de nombrar la condición cultural de los habitantes de ciertas zonas donde se sintió con fuerza la *Violencia*: el llanero como “acrisoladamente honrado”, o el boyacense “como laborioso, de frío valor y metódico en pobreza” o el tolimense como “pasivo y estático”.

La segunda lectura es la estructural²⁰¹, que emerge del sociólogo Fals Borda, formado en Estados Unidos, recién graduado de su doctorado en Florida. Tiene un claro aroma de la sociología rural canónica norteamericana, en particular la de Lowry Nelson y Thomas Lynn Smith, con quienes compartió en Minnesota y Florida. Ella pretende explicar las tensiones derivadas de los cambios socioeconómicos en una sociedad colombiana agraria y agrietada. Una sociedad agrocentrista, pasiva en sus tradiciones y con sistemas políticos gamonalistas. Una sociedad que necesita y debe transitar hacia formas modernas de vida, con producciones más racionalizadas que le permitan superar las secuelas de la violencia. En este marco, la lectura de lo que ha pasado en el territorio

²⁰¹ Una aproximación a esta lectura se encuentra en Guzmán (1990).

nacional, se explica por una especie de “sismo” de gran magnitud en las estructuras nacionales. La violencia, ya no es una condición atávica, es una desviación de un patrón normal de conducta. Sin embargo, atavismo y desviación terminan pareciéndose, porque ambas invocan la tesis de la corrección moral. Lo desviado y lo atávico puede ser nuevamente encausado, corregido, normalizado. Esto es posible, si se entiende el alma nacional del colombiano, según la lectura de Guzmán, o se superan los detonantes históricos de la incorrección, en el caso de Fals Borda: la impunidad, la falta de tierras, la pobreza, el fanatismo y la ignorancia en la nación.

Finalmente, está la lectura sociojurídica del penalista Umaña Luna, que no se distancia mucho de la visión estructural de Fals Borda. Esta lectura considera que el problema se explica por un dramático desequilibrio entre instituciones, fuerzas del orden e ímpetus rebeldes de los campesinos. Las primeras no logran colmar las expectativas de los segundos y hacen que estos busquen conductas más afines a sus demandas. La consecuencia es que los primeros actúan represivamente frente a la rebelión de la población. En esta imagen, las instituciones ejercen una decisiva influencia en la socialización del individuo, evitando la anomia y la desviación. En una sociedad bien ordenada debería existir entonces una clara conformidad entre el cuerpo normativo y los actos de los individuos. La sociedad colombiana hija de la Violencia, sería todo lo contrario a ese tipo normalizado de vida bien ordenada, dado su alto grado de impunidad, flaqueza institucional y comportamientos desviados de la norma. Para su superación sería necesaria una gran profilaxis social, que pasaría por una macro reforma institucional, específicamente de sus instituciones jurídicas.

Asumiendo de antemano el riesgo de ser demasiado esquemáticos, ya que no es nuestra pretensión realizar una historiografía o sociología de la violencia a través del libro, lo común a todas estas lecturas es que combinan en su explicación del “ser violento colombiano”, la “visceralidad subjetiva” con la “ignominia estructural” y para quien lea el libro, ambas estarán flotando permanentemente en todos los capítulos. Más aún, en todas las tres lecturas parece emerger, como lo anota Rueda, la idea de que la sociedad colombiana es un “*organismo atacado por un cáncer generalizado*”. De tal forma, “*que*

*el papel de los científicos sociales (en este caso del cura etnógrafo, el sociólogo de profesión y el jurista), es estudiar la sociedad como un cuerpo, descubrir su enfermedad e indicar un posible remedio para la misma” (2008: 357) Esa lectura, servirá además, para fortalecer la tesis de que la Violencia en tanto cáncer generalizado, debe ser extirpado con más modernización social e ingeniería social. Esta modernización haría de Colombia, en la lectura de sus autores, una nación más cerca de la civilización (Zuleta, 2010). Pero también que esa labor no es sólo del Estado sino que es una responsabilidad plural de todo el país, o al menos así deduce de la famosa sentencia repetida por doquier por estos tres autores: “*todos nos equivocamos, por tanto, todos somos responsables*”.*

Esta imputación de responsabilidades al “nosotros nacional”, al “alma colombiana”, a la “cultura tropical”, excluirá o al menos evaporará ciertas responsabilidades individuales, dejando también a la historia como el gran juez. Lo que había hecho la Comisión con la idea de ser consecuente con el gran pacto de caballeros del Frente Nacional, se terminará también reproduciendo de alguna manera en el libro, que había prometido romper con ello, pero esta vez bajo cánones científicos. Nuestra percepción es que la fórmula “*todos somos responsables del desangre*”, seguirá siendo una fórmula útil políticamente más allá de la comisión del 58 y del libro. Será la mejor fórmula para editar nuestro pasado nacional y enfrentar de manera “más leve” el presente y el futuro. Trascenderá el Frente Nacional y llegará también a posicionarse de alguna forma bajo el ropaje de los discursos de la cultura democrática propios de la década de los ochenta, donde se insertará la *II Comisión de Estudios de la Violencia*.